





REFORMAS  
A LA  
CONSTITUCIÓN NACIONAL

TOMO I

BIBLIOTECA DE LA CORTE SUPREMA	
Nº. DE COPIA	3717
UBICACIÓN	
FICHA MATERIA	

## DEL MISMO AUTOR

*Memoria descriptiva de la provincia de Santiago del Estero*, 1885.

*Estudio de la cuestión de límites entre las provincias de Catamarca y Santiago del Estero*, 1898.

*Proyecto de canal navegable de Santiago del Estero al río Paraná*, conferencia dada en el Instituto Geográfico Argentino, 1900.

*¡ Despierta Argentina ! ; Guerra á la decadencia !* Obra político-económica, 1901.

*Causas de la crisis y medios de conjurarla*, conferencia dada en el « Operai Italiani », 1901.

*Evidencia geográfica internacional*, límites chileno-argentino, 1902.

*Cuestiones económicas*, conferencia dada en los salones de la « Liga de defensa comercial », á pedido de la junta directiva de la sociedad de este nombre, 1904.

*Dorrego*, su biografía, 1907.

ALEJANDRO GANCEDO

*Santafe 2221 - IX. 20.909*  
REFORMAS

Á LA

# CONSTITUCIÓN NACIONAL

TOMO I



BUENOS AIRES

IMPRENTA Y CASA EDITORA DE CONI HERMANOS  
684 — CALLE PERÚ — 684

1909





# FE DE ERRATAS



## TOMO I

Página	Línea	Dice	Debe decir
17	14	condiones	condiciones
26	17	rentas	reatos
27	24	ó	á
46	2	Furgot	Turgot
46	5	con	contra
70	23	Forquino	Tarquino
78	23	ha	he
93	23	abaja	aboga
103	2	impropia	impropio
122	25	37	67, inciso 27

## TOMO II

17	22	Preciso que	preciso es que
37	9	del	de
47	25	cambiándose	cámbianse
50	17	hecha	hecho
91	21	ninguna	ninguno
94	21	el cambio propuesto	su modificación

Página	Línea	Dice	Debe decir
143	10	gobiernos	gobiernos y
213	12	inciso	artículo
216	8	legalizar	legisla
219	1	Art. 71	Art. 70
221	1	Art. 70	Art. 71
221	19	veto	voto
224	17	dos heredados	desheredados
262	14	catorce	trece
330	15	residente	presidente
516	23 y 24	Es el jefe inmediato y local de la capital de la Nación	<i>Suprimido</i>





*Al Honorable Congreso de la Nación.*

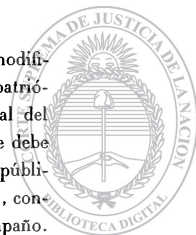
Alejandro Gancedo, ciudadano argentino, en uso de la facultad acordada en el artículo 14 de la Constitución nacional, según el cual todos los habitantes de la Nación gozamos del derecho « de peticionar á las autoridades, » y de conformidad al artículo 3o, que permite la reforma de la Constitución « en todo ó en cualquiera de sus partes », y protestando estar inspirado en el más alto deber de patriotismo, ante V. H., me presento y expongo : Que compenetrado de los graves defectos de que adolece la Constitución Nacional para el perfecto funcionamiento del gobierno libre, base del principio representativo republicano democrático que auspicia, lo que importa decir que el mal no radica en los hombres sino en las ins-



tituciones : y en la firme convicción de que modificados algunos artículos, racional, justiciera y patrióticamente, es posible levantar el nivel moral del pueblo de la república, á fin de que sea lo que debe ser : *soberano*, en las deliberaciones de la cosa pública, solicito de V. H. el estudio de esta cuestión, conforme al adjunto plan de reformas que acompaño. Por ser él bastante extenso, he considerado conveniente presentarlo impreso para facilitar la acción del Honorable Congreso ; y á este fin entrego en este mismo acto ciento cincuenta ejemplares en la secretaría de la Honorable Cámara de diputados y cincuenta en la del Honorable Senado.

Honorable Congreso.

A. GANCEDO.





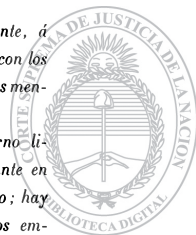
*Este trabajo que entrego á la discusión pública, no es una obra á la que haya dedicado mis vigiliass en un largo período de tiempo; no. Es labor del momento, podría decir; propia de este instante psicológica : en la víspera del centenario de nuestra emancipación política, y en vísperas también de la elección presidencial, y en momentos en que el ambiente cívico argentino, deprimido y languidecente por los efectos desastrosos de una constitución viciosa, preparada para el absolutismo de un cuasi rey, intitulado presidente de una seudorepública, está apto para auspiciar las condensaciones del pensamiento íntimo de sus hondas manifestaciones en favor de la verdad del sufragio tantos años mancillado. Esta es obra de pocos meses de intensa labor, y por consiguiente ha de adolecer de errores ó ha de ser escasa en demostraciones, — lo que es disculpable, — pues era preciso llegar á tiempo.*

*Existe un prejuicio que se repite constantemente, á guisa de verdad evidente, y todos permanecemos con los ojos vendados, sin avanzar un ápice más allá de esas mentiras convencionales.*

*El pueblo no está preparado para el gobierno libre... la corrupción política se mantiene triunfante en todas las esferas de la sociedad... no hay pueblo; hay sólo extranjeros que labran la tierra y ciudadanos empleómanos...*

*Estas son voces corrientes que permiten asegurar que ninguna reforma podrá ser eficaz en sentido de nuestros progresos políticos, y todos repetimos en coro las mismas simplezas; y así marcha este país al acaso, sin rumbo determinado; orgánicamente enfermo y con apariencias de una salud rebosante.*

*No es cierto que el pueblo no esté preparado para el gobierno de sí mismo, desde que tiene un alto grado de cultura intelectual, y sólo espera el grito salvador, de: urnas libres; no es cierto que por todos los cauces corran aguas turbias, como por una cloaca maestra; la corrupción está solo circunscripta al reducido número de los que han hecho una profesión de la política, desde que se estableció como principio la imposición del sucesor y las reelecciones aseguradas con serviles obsecuencias; y es ésto tan cierto que no se cita un caso en que los veteranos*

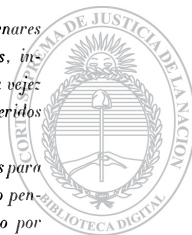


den lugar á nuevas fuerzas, y así tenemos por centenares los jubilados, agobiados con nuevos cargos públicos, incapacitados de desempeñarlos debidamente por una vejez prematura y porque viven la vida de antaño, adheridos al presupuesto como el marisco á la concha.

La masa ciudadana tiene las mejores condiciones para hacer práctico el gobierno libre, pero el elemento pensante adolece del mar de no pensar, está dominado por una haraganería musulmana y todo lo espera del supremo elector: nada estudia en serio, y como el cosmopolitismo en esta gran capital, cabeza directriz de la nación ha tomado ya proporciones alarmantes, el espíritu nacional está casi diluido. Si el elemento pensante pensara en verdad, estaríamos, tiempo ha, mejor organizados que al presente, sin la vergüenza de tantos desmanes de los poderosos, con un congreso formado por personas salidas de elecciones libres, representantes de votos conscientes.

Estos males que anoto son males viejos de los que ninguno escapa.

Los mejores años de mi vida los he pasado en la creencia de que nuestra gran carta, era la constitución más adelantada del mundo, y hoy estoy convencido que es una de las más atrasadas. El marco es bueno : gobierno representativo republicano federal, pero el fondo del cuadro es desastroso : monarquía perfecta.



*Ligeras y trucas lecturas de la constitución, me hicieron el efecto del espejismo, cuya realidad me ha sorprendido cuando he penetrado al análisis con espíritu crítico para curar nuestro morbosó estado político. Me ha acontecido con la constitución, lo que ocurre con algunos de nuestros personajes de actualidad que, mirados desde lejos, son colosos, y una vez cerca de ellos, analizados y juzgados, muchas veces parecen pigmeos, y lo son en realidad.*

*Más de una vez he pensado sobre la forma de hacer práctico el gobierno de todos, es decir, el de la genuina representación del voto libre, de la soberanía efectiva del pueblo, del exponente del sufragio de verdad, dentro de la prescripciones constitucionales, y siempre me encontré incapaz de solucionar el problema, cual si se tratara de la exacta resolución de la cuadratura del círculo. He pensado en los hombres, he medido sus capacidades, he comparado épocas, he estimado riquezas, he avaluado tendencias, he vislumbrado destinos, he aportado recuerdos del pasado y he columbrado el porvenir; he contemplado el llano y la montaña, el abismo y la cima y no me fué posible llegar á la cristalina fuente : no libé la miel de Himeto. Empero, la perseverancia me decidió á buscar por otros medios, á los comunmente usados, el remedio del mal. Comprendí que era preciso romper el molde y*



*fundir otro nuevo en el crisol democrático de verdad, y esta es mi obra.*

*Este trabajo, escrito sin pretensiones literarias ni científicas, tiene por objeto iniciar la controversia en cuestiones de capital importancia para llegar al pleno conocimiento de la verdad, cuestiones que, no solamente afectan, sino que son alma y vida del organismo político y social de la república.*

*Prescindiendo del principio de que las verdades no son consideradas tales por quien las expone, sino por las razones que las sustenta, quiero decir dos palabras, á guisa de profesión de fe, como complemento de este trabajo eminentemente patriótico, para todas aquellas personas que ignoran las condiciones de este ciudadano que, sin ocultar la mano, arroja la primera piedra, á las tranquilas aguas de este mar institucional.*

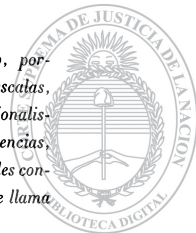
*Argentino soy. En la más hermosa explanada del regazo del enhiesto Aconquija, donde el perfume de los azahares y mirtos y la vegetación lujuriosa caldean y vigorizan la energía humana, vi la luz primera; deslicé mis mejores años en la provincia de habla quichua, á la que estoy vinculado por afecciones inolvidables en un largo período de mi vida.*

*Nunca fuí ni ministro en provincia, ni diputado, ni senador nacional, no hablemos de los encumbra-*



mientos ejecutivos, desde que no fui lo primero, porque, por lo general, estas cosas vienen por escalas, mediante sucesivas cristalizaciones de incondicionalismos, de sordera y de mudez : servir sin reticencias, oír y callar, ó simular ignorancias, son las grandes condiciones para surgir, á lo que en jerga política se llama superficie.

Parece que en materia de instituciones y práctica política, hubiésemos obtenido nosotros patente de invención, para apoderarnos de todo lo malo de las monarquías europeas, ó de lo que es inconveniente para nuestro régimen de gobierno. cuando no inventamos algo peor, y hacer caso omiso de lo bueno y racionalmente aplicable. En aquellos países, son los hombres maduros quienes gobiernan, y entre nosotros se busca la juventud, la inexperiencia; el calor intermitente del pensamiento irreflexivo. De manera que, quien ha pasado los primeros cincuenta, es ya un pasado de moda, máxime si antes no formó parte de la moda. En consecuencia, como estoy ya entrado en años, puedo decir, propiamente, que soy un rezagado político, circunstancia que halaga mi vanidad — si es que la tengo — de hombre independiente. Me encuentro, además, en el mejor de los mundos de la idea, porque no tengo el más remoto deseo de escalar esas altas posiciones; pues también se gobierna desde el llano. No

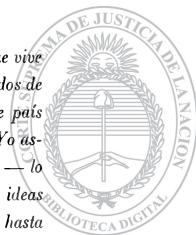


*tengo émulo á ninguno de tanto dichoso mortal que vive de honores de pega y de dineros á granel, henchidos de satisfacción con la creencia de que gobiernan este país que espontáneamente desborda sus riquezas. No. Yo aspiro algo más que todo eso, y tengo la debilidad — lo confieso — de creer que sirvo para algo y que mis ideas han de triunfar á su debida oportunidad — véase hasta donde soy ingenuo — aspiro, lo que otros hombres aspiran, algo más de las cosas pasajeras : lo que no muere, lo que queda y contempla los siglos pasados y venideros ; prefiero como otros hombres, la vida del pensamiento, la de la idea elaborada en el propio cerebro que, franqueando las fronteras del medio en que nace, organiza sociedades y gobierna pueblos, antes que las fruiciones fugaces del poder á nombre de otro, llámese este, pueblo, siervo ó poderoso.*

*— Que es esto demasiado?*

*He contemplado tantas bastardas aspiraciones satisfechas... y me he contagiado. Declaro que pago tributo á un mal de la época.*

*El gobierno por poder es muy delicado, y para que él sea justo y eficaz, es preciso una buena fe del mandante y del mandatario. Falsos poderes, quiere decir falso gobierno, espúreo, clandestino ; y son falsos los poderes que se otorgan por la fuerza de los poderosos. Esta es una de*





*las tantas razones que me inducen á considerarme feliz en este no ser político de mi vida.*

*He hecho mi camino á pie. Conciliador y ecuaníme por temperamento, he procurado no crear abismos en este mar de egoísmos insondables, porque he comprendido que para hacer agradable la existencia en el enmarañado césped que se llama sociedad, es preciso vivir la vida.*

*Como es consiguiente, no soy ecuaníme en el sentido político de la palabra, pero sé disculpar los errores políticos de los hombres. Esto he aprendido en el estudio de las cuestiones que trato en esta obra; sé perdonar los abusos con que tanto azotamos el rostro de los que han estado al frente de la primera magistratura del país; por que, desde Sarmiento, quien instituyó la costumbre de imponer sucesor, todos han delinquido, porque la constitución está hecha á propósito para ello.*

*La categoría de los abusos y su ponderación, son propios de la diversa capacidad, tendencia é idiosincracia de cada presidente, porque los resquicios que la Constitución deja para vulnerarla son adaptables á todos los calibres.*

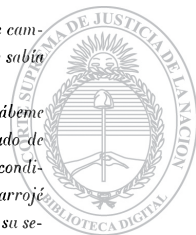
— *Usted se contradice, con lo que sobre el mismo asunto discurrió anteriormente, se le dijo en cierta ocasión al doctor Vélez Sarsfield, y éste contestó : « Yo soy*



un hombre que estudio y aprendo todos los días; he cambiado de opinión, porque sé ahora más de lo que sabía antes. »

Parodiando á este eminente hombre de estado, cábeme la satisfacción de decir que yo también he cambiado de opinión respecto á la idea que antes tenía sobre las condiciones del general Roca como hombre público. Le arrojé dictérios, cuando se encontraba en el tercer año de su segunda presidencia, y lo descargo de ellos, puede decirse, cuando se encuentra en su retiro. Nombro á este personaje, porque es creencia general, que él encarna cuanto mal político tenemos en el país.

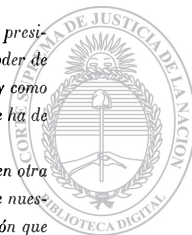
A menudo se oye decir : — La enfermedad cívica del país es debida al general Roca ; la ausencia del carácter argentino en el Congreso, es obra de Roca ; las imposiciones de los gobernantes son obra de Roca, y mil otras cosas más, y yo he hecho iguales críticas en público y en privado en diversas ocasiones; y hoy estoy convencido que esta es la obra de todos los Roca, es decir, de todos los presidentes y de todo el país que vive en una casa con goteras, ó con un traje que no le cuadra para el carácter que desea ostentar en este grande y duradero festín que se llama vida, en consorcio de las naciones civilizadas. Los presidentes hacen el papel de las hechiceras ó pitonizas de las primeras edades, ó el de las medium de hoy, entre



la constitución y el pueblo que es el hechizado. Los presidentes son personas encantadoras con el enorme poder de que disponen y los cien mil empleos que adjudican y como sagas, saben predecir el nombre del candidato que ha de salir de las urnas (sic) en su reemplazo.

La culpa es de todos y de la constitución hecha en otra época diversa de la de hoy, por más que se trata de nuestros antepasados y en favor nuestro. La constitución que nos rige es viciosa, y por consiguiente, nuestro deber es depurarla, para que sea ella lo que debe ser : inmaculada. Dejemos de lado el apóstrofe, suprimamos las recriminaciones á los que han tenido y tienen en sus manos la alta dirección del gobierno del país, y dirijamos la proa á los afechos constitucionales que hacen de un pueblo libre una sociedad de esclavos; cuánto tiempo tenemos que andar aún para vivir en el régimen de la moneda sana.'

En el país no se debaten ideas ó pensamientos de gobierno; se forman agrupaciones personales á objeto de asegurar algunos ítem del presupuesto : no hay, propiamente, partidos, y por consiguiente no tengo filiación partidista. No tengo amigos políticos. No soy de nadie, ni quisiera que nadie fuese mío incondicionalmente. Y, en general, me encuentro siempre más cerca de lo justo que de la amistad... Me seducen las águilas enseñoreadas

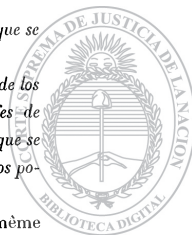


en los espacios infinitos, en cambio de los reptiles que se arrastran.

No rindo culto á la mentira; no soy cortesano de los magnates intitutados ministros, secretarios ó jefes de cualquier cosa de la regia mansión de pasatiempo que se llama casa de gobierno; no temo los desmanes de los poderosos: mi Dios, mi credo y mi fe, es la verdad.

En mí no habla la tradición ni la cátedra, pas même l'académicien, ni ostento brillazones pergaminosas heredadas, que no me hacen falta, y que, comunmente, son pesadas cargas que agobian y por lo general impiden merecerlas; en mí, habla el espíritu contemporáneo, templado al calor de la lucha diaria de la vida, habla la experiencia, la observación aquilatada cuidadosamente. Mi palabra es grito de guerra contra los abusos del poder, aura de paz, de igualdad social, de verdad republicana.

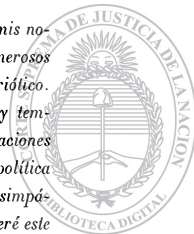
En esta obra he invocado el patriotismo de nuestros manes; he procurado penetrar la suspicacia del genial Sarmiento, el espíritu delicado de la inteligencia inagotable de Avellaneda; el equilibrio perfecto del modelo de ciudadano, Mitre; la exhuberancia científica del estadista Alberdi; la simpática figura oratoria del eminente ciudadano del Valle; el tesón de labor patriótica del jefe de la unión cívica radical, doctor Alem, y de tantos otros personajes caídos en la jornada de la vida — ignoro



quiénes han acudido á mi llamado; pero consten mis nobles aspiraciones, mi buena fe y mis anhelos generosos en esta obra que representa mi mayor esfuerzo patriótico. La semilla está arrojada, expuesta á los vientos y tempestades, en esta playa del mar bravío de aspiraciones defraudadas y de esperanzas desvanecidas de la política militante; aquí espero los ecos de la brisa suave y simpática, ó la agreste bruma ó el cálido zonda; defenderé este árbol, lo regaré con la firmeza de mis convicciones para que la frondosidad de su ramaje, la frescura de sus hojas y el suave perfume de sus flores, cicatricen las viejas heridas, hiergan al doliente é irradien la armonía y la felicidad en todos los que á su sombra se cobijen.

He aquí, lectores, en pocas palabras, lo que soy, lo que pienso y lo que anhelo. y si me cupiera el honor de que los hombres de pensamiento del país, lean y mediten sobre lo que este trabajo contiene, haciendo un paréntesis á esta vida agitada y de pasatiempo que nos absorbe, me consideraré recompensado y feliz en mi retiro.

Las ideas que en este trabajo emito, son hijas legítimas de la sinceridad que las inspira, fiel compañera mía en todos los momentos de mi vida. Si en algunas partes, parece que la pluma fuese más allá del pensamiento tranquilo y moderado, si hubiese causticidad en el lenguaje.



*no se me inculpe intención premeditada; pues sólo la necesidad de exponer demostraciones concluyentes y eficaces, me ha llevado á reflejarlas en la forma en que lo hago, y porque creo que así cumplo mejor con la fe patriótica que inspira mis anhelos.*





# CARTA DEL D<sup>o</sup> MANUEL GOROSTIAGA

Buenos Aires, 5 de julio de 1909.



*Señor don Alejandro Gancedo.*

Estimado :

Así como se penetra á su trabajo puede apreciarse su consagración y el vigor de sus procedimientos, al formular las reformas á la constitución, cuyos orígenes conocidos nos dan la clave de su contextura, y nunca será superfluo rememorar.

Los convencionales del 53, tuvieron como modelo la constitución norteamericana, la cual, á su vez, había seguido la inglesa, según se observa en la división de los poderes, y sobre todo, en los gobiernos locales, de los que Blackstone es su mejor comentarista. Pero la constitución americana, incorporó principios nuevos. Despojó á la corona de la sobera-



nia, para entregarla al pueblo, poder constituyente; restringió las facultades del legislativo, y le atribuyó al judicial autoridad para mantenerlo dentro de la ley escrita.

Esta novedad, sin mencionar otras, cambió los fundamentos del régimen político, sin consistir en sólo la singularidad de la obra americana, que Gladstone, con su grande autoridad, consideraba única en el mundo. Lo que realmente la distingue de toda otra y transmite esa peculiaridad que la vuelve inconfundible, es someter el mismo territorio y el mismo pueblo, á dos gobiernos separados é independientes entre sí, cada uno con su esfera propia y medios coercitivos para obligarlos á la obediencia, directamente, haciendo posible — según la expresión del general Mitre — la mayor dignidad de los gobiernos provinciales á la par de la mayor estabilidad del gobierno general. El mecanismo de estas dos agencias, que componen la « unión indestructible de estados indestructibles » es verdaderamente admirable, por los resortes puestos en juego para alejar perpetuamente la posibilidad, siempre inminente, de roces que desarticulen ó perturben su funcionamiento regular.

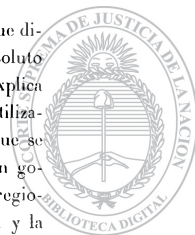
Este sistema de apariencias frágiles, cuya consis-



tencia proviene de un orden preestablecido, que dirigen leyes racionales y científicas, fué en absoluto desconocido por los estadistas antiguos, y se explica como una modalidad ambiente, sorprendida y utilizada por el espíritu genial de Hamilton. Es á él que se debe la facilidad de coordinar y mantener un gobierno institucional coherente, sobre extensas regiones, sin las contingencias de la disgregación y la anarquía, ó del terrible centralismo romano.

De ahí que, á mi juicio, sea irremplazable y debemos cultivarlo con todos nuestros conatos, como el único apto para crear y alimentar núcleos de vida autónoma, ante los cuales se embote, la prepotencia central.

Lo consigno así, en comunión con sus opiniones, como una profesión de fe política, nota discordante — lo reconozco — en el descreimiento, por desgracia general, y como un homenaje respetuoso á los constituyentes del 53, quienes en posesión de los trabajos de Rossi, su constitucion para la Suiza y la nuestra del año 26, tomaron de ellos y refundieron sus principios y doctrinas, en el molde americano, como lo mejor y más practicable, dando á su creación una estructura apropiada, que difiere tanto de una copia servil, como de una concepción abstracta,



semejante á la de Locke, para las Carolinas. La prueba de su eficacia está producida con la realización del fin primordial á que se destinaba, y si sus frutos no han sido completos, las causas le son extrañas y conocidas.

Tengo el más alto concepto de la constitución argentina, tal como es, como salió de las manos de los obreros. Á ella le debemos la unión nacional, la terminación de la época anárquica y demoledora, que señala los comienzos de nuestros progresos, punto de partida necesario de nuestra existencia, y de un porvenir cuyas proyecciones escapan á todo cálculo de probabilidades, y hay que rendirle, por espíritu de justicia y de gratitud, la más cumplida admiración, como previsor que pudo ser ordenada, en aquellos días tormentosos, cuando todo era precario, hasta la vida.

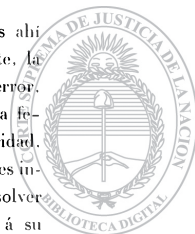
¡Quién puede dudar de sus imperfecciones, peculiar de toda obra humana! — Empero, ellas no son reparables, ni serán reparadas, si falta á la trama de su acción, el concurso directo y restaurante del pueblo, á quien le pertenece el cuidado de su conservación y de su eficiencia. En la rotación de los oficios, al reemplazar la herencia por la elección, quedaron en sus manos, en las manos del pueblo, y



á su discreción, las llaves del instrumento. Es ahí donde está el secreto de su fuerza determinante, la oportunidad, siempre renovada, de reparar un error, de limitar sus consecuencias, y que el sistema federal-nacional, por la distribución de la autoridad, estrechó aun más, colocando á las colectividades interesadas, en condiciones de reconocer y resolver por sí, con criterio cierto, lo más conducente á su bienestar.

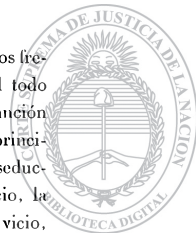
Es evidente que lo substancial en una carta política se reasume en la adopción de los principios cardinales, pero el *alma mater* de las instituciones libres, es el soplo popular. La Roma libre y la Roma de los Césares, se mantuvo bajo las mismas instituciones, que Augusto no necesitó alterar, y contrariamente, cuidó de conservarlas como adornos engañosos, decorativos de un despotismo manso y corruptor, del cual fueron simultáneamente vehículo y sostén.

Es de indiscutible importancia, cuidar de la separación de los poderes: dar á cada uno su independencia, la medida de su dignidad y los medios de protegerla, á fin de que se basten á sí mismos, en el cumplimiento de la misión confiada á su prudencia y sabiduría. No es posible desconocer, sin embargo,



que por grande que sea la previsión y fuertes los frenos empleados contra la corrupción, serán del todo inútiles sin la rigidez de las costumbres y la sanción pública moralizadora. Puede extremarse el principio cuanto se quiera, sin detener el paso á la seducción. Los parlamentos, la justicia, el sacerdocio, la prensa, están condenados á las acechanzas del vicio, y esto es común á todos los pueblos de la tierra. Horacio Walpole no empleaba el disfraz de los cargos públicos, para prostituir á los representantes del pueblo. Ejemplos no son los que faltan, para mantener victoriosamente esta tesis, en todos los tiempos, como lo demuestra sin ir muy lejos, la virilidad con que se condena en las páginas recorridas, actos colectivos, que si excluyen extravíos individuales, aislados y de indole inferior, acusan un estado social patológico, por la extensión del mal y la indiferencia pública ante sus manifestaciones ostensibles. Por esto, sí, como lo creo, es muy laudable toda tentativa de mejorar la constitución, con disposiciones acertadas, considero de superior alcance, tonificar el carácter nacional, exaltando sus altiveces decaídas.

Desde el 53 hasta nuestros días, no han corrido dos administraciones iguales : cada una tiene su característica. Entretanto, la constitución es la misma.



En su vigencia se han sucedido períodos de libertad y de opresión, de verdad y falsificación del sufragio, de honestidad y de peculado. No hay una sola lesión á la moral, al sentimiento público ó un acto violento, que se justifique por una de sus disposiciones.

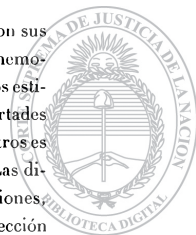
Los gobiernos han sido buenos, en tanto que se mantuvieron dentro de ellas, y malos, por haberlas olvidado ó pisoteado. Un instrumento de gobierno que es necesario *destruir ó violar*, para asegurar los resultados de un error ó la impunidad de un agravio, atestigua, por eso mismo, sus cualidades como agente de orden y de libertad.

Entre nosotros, no se concibe un acto popular sin la asistencia de la fuerza armada: el orden sin la espada. En los Estados Unidos, con un sistema de gobierno modelo del nuestro, no se ven soldados sino en las fronteras, y Washington no los tiene ni para rendir honores en actos oficiales. Nuestros gobernadores de provincia, no viven tranquilos sin la custodia de un batallón de línea. En los Estados Unidos, la presencia de fuerzas de línea en el territorio de un estado, es agravante para su dignidad. El derecho de tener y llevar armas, es allí tan amplio, que los ciudadanos se arman y organizan públicamente, en cuerpos militarmente regimentados



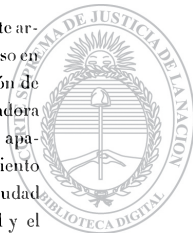
y más de una vez, esos ejércitos populares, con sus generales al frente, han desfilado en revistas memorables «ante el presidente de la república, que los estimulaba como el mejor sustentáculo de las libertades públicas y de su propia autoridad. Entre nosotros es un delito tener armas y algo más, llevarlas. Las diferencias no están, como se ve, en las instituciones, sino en las costumbres. Es por eso que una elección entre nosotros, reviste todos los signos externos de los preparativos de un combate, y termina, para no decir más, por una falsificación, al amparo de la fuerza pública, y es allá, un verdadero movimiento de opinión entusiasta ó ruidoso, pero eminentemente *culto y pacífico*.

Encuentro sumamente escabroso, demostrar que la constitución del 53 ha fallado por defectos intrínsecos, y avanzo, que si no ha llenado todos los fines, para los cuales fué construida, no es porque le falten amplitud y previsión. No es completa, porque es perfectible, siendo ese su mérito orgánico, y no ha llegado ni llegará á su rigidez mortal, porque es inagotable su plasticidad, lo que permite en ciertos departamentos, acentuar cláusulas no bastante expresas, si bien se transparente el espíritu generador, sin perjudicar sus lineamientos cardinales.



La forma federo-nacional, será perpetuamente argentina. Los días que vivimos marcan su descenso en la tendencia, pero eso proviene de la intromisión de elementos disgregantes, que la reacción reparadora no tardará en desalojarlos. La estamos viendo aparecer como una luz de esperanza, en el movimiento municipal, habiéndole correspondido á una ciudad sin tradición colonial, el primer esfuerzo viril y el éxito más ruidoso. Dentro de «la unión indestructible de estados indestructibles», habrá de mantenerse, vivo y activo, el principio superior de la división de los poderes, con el concurso decisivo del pueblo, y la insustituible alianza de la moral cívica, abroquelada en la sanción pública. Esta forma de gobierno nacida entre agonias, que inspiraron á Franklin acentos de duda, expresados en la bella imagen del sol que nace ó del sol que muere, no perecerá, é irradia hoy en el mundo civilizado, carcomiendo los fundamentos de la monarquía unitaria, para levantar sobre sus ruinas, la federación de los pueblos libres vinculados por el derecho universal y perpetuo, que encarna la naturaleza humana.

El estudio que va á entregar al examen y la crítica, cualesquiera que sean las opiniones á su respecto, será útil, de gran utilidad, si atrae la atención pú-



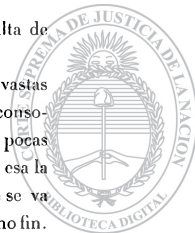


blica hacia temas casi abandonados, por la falta de fe en las instituciones.

No es posible detenerse en el análisis de las vastas reformas propuestas, ni ocultar la impresión consoladora causada por la independencia y no pocas veces, el rigor de los juicios emitidos, siendo esa la mejor demostración de la sinceridad con que se va detrás de la verdad-verdadera, como guía y como fin.

Le deseo el mejor de los éxitos y hago voto por ello, quedando de usted atento y afectísimo.

MANUEL GOROSTIAGA.



REFORMAS  
A LA  
CONSTITUCIÓN NACIONAL

---



I

*« Art. 2°. — El Gobierno federal  
sostiene el culto católico, apostólico,  
romano. »*

*Art. 2°. — El Gobierno federal estará constituido por tres  
poderes independientes entre sí : Legislativo, Ejecutivo y  
Judicial, cuyas funciones serán regidas por las disposiciones  
contenidas en esta Constitución.*

Dos son y divergen fundamentalmente, las reformas que comprende este artículo. La primera, importa la supresión de un principio que, si el 53 fué luz, al decir de la mayoría de los constituyentes, es hoy negación. Este principio es el sostenimiento del culto. La segunda, comprende una conquista propia del siglo en que vivimos : la *independencia* de

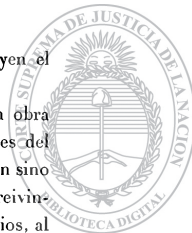
cada uno de los tres poderes que constituyen el gobierno.

Estas reformas, que son la portada de esta obra que de lleno abraza los más vastos horizontes del progreso institucional de la República, no son sino el reflejo de una sentida necesidad nacional, reivindicadora de derechos vulnerados y de principios, al parecer, ignorados.

La tan diversa índole de estas dos cuestiones impone la necesidad de dividir su estudio en dos distintos capítulos, en el orden en que están colocadas.

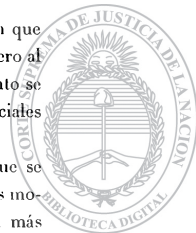
## I

Desde que la libertad de conciencia es una conquista real é irrevocable de las sociedades modernas, la protección de determinadas religiones por el Estado, en las repúblicas americanas, es un contrasentido. Nuestro país, eminentemente de inmigración, abierto á las actividades de todos los hombres del mundo, es esencialmente cosmopolita, y no hay religión que entre nosotros no tenga sus genuinos representantes. Si este artículo prestó algún servicio en favor de la cultura social en sus primeros



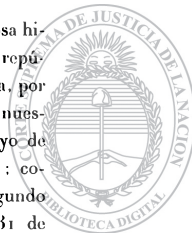
tiempos, cuando no conocíamos otra religión que la católica, se explica que se lo respetara : pero al presente, no es justificable que el sostenimiento se haga con el concurso tributario de factores sociales completamente ajenos á la religión del Estado.

Este artículo fué propio de la época en que se instituyó, y no podía ser de otra manera. Los modelos de las monarquías europeas influyeron más que la Constitución norteamericana en este asunto, y en especial, la española, la que en su larga dominación en sus colonias occidentales llevó el credo religioso en que reposa la reyesía, y lo fecundó con el fanatismo, propio del período y medio en que actuaba. La idolatría incásica, abatida por la fe cristiana, cedió su puesto á esta poderosa arma del conquistador, y de la misma manera que el protestantismo en Norte América, fué luz que rasgó las tinieblas de la barbarie : y si, como es cierto, el poder político y el espiritual marchaban de consuno en el gobierno monárquico de la madre patria, y este común propósito había originado los más satisfactorios resultados en favor del predominio de ambos, justo era que nosotros, en aquellos tiempos tan diversos de los de hoy, procuráramos hacer lo mismo. No fuimos nosotros los únicos que declaramos



el sostenimiento del culto católico : igual cosa hicieron el imperio del Brasil, y todas las demás repúblicas sudamericanas y las de Centro América, por las razones expuestas. Así, pues, apenas sellada nuestra emancipación política, en el primer ensayo de constitución, sancionamos el mismo principio : como lo comprueba el artículo 1°, capítulo segundo del reglamento provisorio, promulgado el 31 de enero de 1818, que dice textualmente : « La religión católica, apostólica, romana, es la religión del Estado. » Análogamente, el artículo 3°, sección primera de la Constitución unitaria de 1826, refiriéndose á la nación, dice : « Su religión es la católica, apostólica, romana, á la que prestará siempre la más eficaz y decidida protección y sus habitantes el mayor respeto, sean cuales fueren sus opiniones religiosas ».

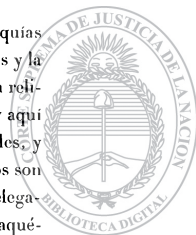
El origen del artículo en cuestión es eminentemente monárquico, é importa el dominio de la conciencia ciudadana por el poder político, auxiliado por la autoridad religiosa costeada por la economía de los hombres de todas las religiones : es la mancomunidad de intereses para la perpetuación de castas gobernantes, repugnante á nuestro régimen de gobierno : es el círculo estrecho de poderes sin con-



tralor. El concepto del gobierno en las monarquías es muy diverso del nuestro. Allí, los monarcas y la familia de éstos son de origen divino como la religión y el poder se transmite por herencia, y aquí los presidentes son de origen humano, terrenales, y su acción se limita á un corto período : aquéllos son irresponsables, porque su poder no es una delegación de la voluntad popular. La autoridad de aquéllos es á base de absolutismo y la de éstos á base de libertad, de opinión, y es por esta razón y por la disparidad de caracteres, que la entidad política no puede estar hermanada entre nosotros con la religiosa, y por lo tanto no debemos sostener culto alguno con el erario, formado por contribuciones destinadas á procurar la felicidad de todos y de cada uno.

Tan arraigado había quedado entre nosotros el espíritu religioso español, excusable en la escasa cultura del pueblo argentino de entonces, que la reconocida autoridad moral de Rivadavia en política, quien hizo sancionar la Constitución unitaria contra la unánime voluntad de las provincias, se estrelló en lo relativo al culto, ante el enorme poder del clero y de sus fanáticos feligreses de espectabilidad.

En honor del espíritu liberal y progresista del



gran Rivadavia, con ideas propias de una cultura muy avanzada á la época en que actuó, se registran en el archivo oficial los decretos del 1° de julio y del 31 de diciembre de 1822, por los que se declaraba bienes del estado á todos los pertenecientes al santuario de Luján que no fuesen privativos del culto, y se ordenaba inventariar todos los bienes muebles é inmuebles, capitales y rentas que pertenecieran á las casas de regulares, y las que de entre éstas fuesen suprimidas, pasaran á ser propiedad del Estado. Por los mismos decretos se abolió el fuero personal del clero y los diezmos.

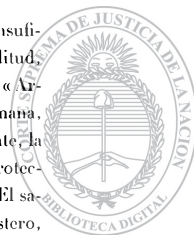
Prueba evidente del fanatismo religioso, en la incipiente de nuestros afanes de organización política, que Quiroga enarboló el estandarte de demolición : « Religión ó muerte », en oposición al liberalismo del genial Rivadavia, con lo que consiguió sublevar el espíritu de las atrasadas poblaciones del interior, cual un Pedro el ermitaño la Europa católica hacia Jerusalén.

Así es que, tanto en el proyecto de Constitución de 1818 como en la de 1826, el artículo en cuestión pasó sin discusión alguna, porque era casi inobjetable. En la constituyente del 53 este artículo fué materia de controversia, pero no porque se tratara



de suprimirlo, sino porque, encontrándolo insuficiente, se pretendía darle mayor fuerza ó amplitud, con cuyo motivo se presentó esta forma : « Artículo 2°. La religión católica, apostólica, romana, como única y sola verdadera es, exclusivamente, la del Estado. Las autoridades le deben toda protección, y los habitantes veneración y respeto. » El sacerdote Lavaisse, diputado por Santiago del Estero, persona discreta y de fino criterio práctico, triunfó en este debate, abogando por el artículo, en la forma que hoy nos rige.

El artículo 14, relativo á los derechos de los habitantes, en la parte que se refiere á la libertad de cultos, fué materia de un detenido debate. Como se argumentara que nuestro país necesitaba del elemento inmigratorio para sus progresos, y que, por consiguiente, era necesario respetar el santuario de la conciencia individual de los arribantes en materia de cultos, los que á todo trance anhelaban implantar el ejercicio de la única religión verdadera, la católica, apostólica, romana, en oposición á esa parte del artículo, considerando al Congreso en las condiciones de un concilio canónico, para decidir cuestiones dogmáticas, según la expresión de crítica del doctor J. B. Gorostiaga, llegaron á decir que la in-

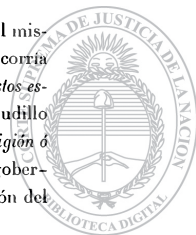




migración sólo debía ser católica, recordando, al mismo tiempo, en auxilio de esta tesis, que « se corría el peligro de que, *resentidos los pueblos con estos escándalos*, facilitasen el levantamiento de un caudillo que inscribiese en su pendón el lema : *Religión ó muerte*, para arrastrar las masas, derrocar gobernantes y echar por tierra la misma Constitución del Estado ».

La libertad de cultos, defendida por los diputados Gorostiaga, Seguí, Gutiérrez, Zapata y Lavaisse, fué sancionada. Este último manifestó en esta ocasión que, al sostener la libertad de cultos, lo hacía porque comprendía « que, como diputado, debía promover para la nación las fuentes de su prosperidad, y que la inmigración de extranjeros, aunque de cultos disidentes, era, á su juicio, una de las principales », y que, como sacerdote, se ocuparía después en predicar el Evangelio.

Éstos son, sucintamente, los motivos de la existencia del artículo 2° de nuestra Constitución, y ellos pintan una época muy diversa, por cierto, de la que presenta hoy el pueblo de la República. La libertad de cultos que favorece la Constitución y las franquicias acordadas á todos los hombres de la tierra para habitar el territorio argentino, han con-



tribuido á la asimilación de elementos sociales que, á la par de su ciencia, capitales é industrias diversas aportados al país, han traído y conservan sus respectivos credos religiosos : y es evidente que un hombre no es más capaz, más honrado, más moral, más laborioso, ni más respetuoso de la ley, porque sea católico, que aquel que profese cualquier otro culto más en armonía con las tendencias de su espíritu. Los pueblos del interior, ni ningún otro, no se conmueven hoy por ninguna idea religiosa ó motivo que se refiera á la conciencia individual, porque hemos avanzado en civilización : y tenemos provincias, como las de Entre Ríos, Corrientes y Santiago (Constitución de 1884) que, en la reforma de sus constituciones han suprimido el artículo referente al sostenimiento del culto. Así, pues, han desaparecido los temores de que reapareciera el pendón de Quiroga, porque todos dedicamos nuestras actividades al común propósito del engrandecimiento económico del país, con el exponente de una cultura en creciente progreso, que honra á cualquier pueblo civilizado.

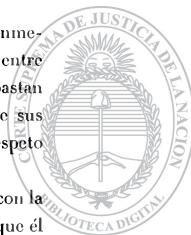
El sostenimiento del culto tiene los mismos malos efectos que las constantes larguezas en dinero de los padres de familia acaudalados con los hijos : la



haraganería y el abuso, son su consecuencia inmediata. Las religiones disidentes con la católica entre nosotros, conservan su prestigio, porque se bastan á sí mismas, por el sano juicio y moralidad de sus prelados y sacerdotes y por la fe y merecido respeto de sus feligreses.

El sostenimiento del culto católico, choca con la libertad acordada á las demás religiones, porque él se lleva á cabo con el tributo que todos aportamos para otros usos y fines más primordiales de la vida.

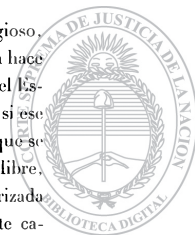
« La Iglesia libre, dentro del Estado libre », es la divisa de hoy; todas las aptitudes, todas las tendencias del espíritu, en liza abierta y franca; cada una por sus obras, como cada época por sus progresos, ésta es la norma de conducta que se abre paso al presente, con los caracteres de un bien entendido progreso institucional, y en esto coinciden hasta los mismos católicos. No ha mucho en la sesión de la Cámara de diputados del 3o de noviembre último, un distinguido diputado, creyente de verdad del catolicismo apostólico romano, en defensa de su credo religioso, y refiriéndose á la aspiración del liberalismo de la época, hacía notar, que Inglaterra y Estados Unidos, países en los que reina una libertad ejemplar y donde domina el pro-



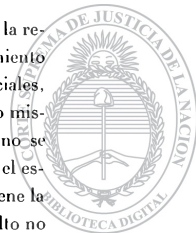
testantismo, « si se observa el movimiento religioso, se nota este fenómeno : que la doctrina católica hace grandes progresos. ¿ Acaso necesita el apoyo del Estado ? No. Los hace á la sombra de la libertad. Y si ese es el ideal que perseguimos los argentinos, que se reforme la Constitución para tener la Iglesia libre, dentro del Estado libre. » Véase cómo la autorizada palabra de esta personalidad indiscutiblemente católica, evidencia la bondad de la separación de la Iglesia del Estado, como un bien para el credo que profesa.

En favor de la tesis que sostengo, debo citar antecedentes demostrativos de que el Estado, con la adopción del Registro civil para el matrimonio, nacimiento y defunción de las personas, no considera á la religión católica en el mismo carácter que se le reconociera en un principio.

Esta conquista del derecho civil argentino, niveladora de todas las religiones, representa una mutilación de los principios del culto sostenido por el Estado, un cercenamiento de su autoridad moral y un desconocimiento del sacramento del matrimonio, puesto que, ante la ley, este acto religioso no tiene valor alguno. Y dejando así de ser, esta práctica religiosa, la base de la organización de la familia



argentina, ¿á qué queda reducida la acción de la religión católica para ser acreedora á su sostenimiento por el Estado? Á los tedeums y funerales oficiales, por los que el gobierno paga gruesas sumas, lo mismo que acontece en Estados Unidos, donde no se sostiene culto alguno. Habiéndose establecido el estado civil de las personas, en el que no interviene la autoridad eclesiástica, el sostenimiento del culto no tiene razón de ser : pues el único rol de los sacerdotes se reduce á puras prácticas espirituales, las cuales no se modificarán sin el concurso pecuniario del Estado. Reducido así el rol de la religión católica al que tienen los otros cultos, es deber dejar su acción, entregada á las bondades de su credo, á la virtud de sus pastores y á la sincera devoción de los feligreses. ¿ Cómo se sostienen entre nosotros las religiones disidentes con la católica? Con el santuario de las buenas conciencias y virtuosas prácticas de los que las dirigen y de los dirigidos. No sin razón los congresales católicos de 1888, extremaron la argumentación en contra del matrimonio civil, haciendo constar que, con su sanción, el Congreso procedía abiertamente en contra de la Constitución y de dogmas religiosos que la misma Constitución impone sostenerlos y propagarlos. Se ve claramente que á raíz de

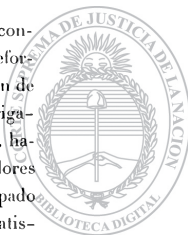


esta importante ley que comento y como lógica consecuencia de ella misma, debió procurarse la reforma de la Constitución para declarar la separación de la Iglesia del Estado. Quizá en esa fecha se abrigan dudas sobre la eficacia y bondades de la ley, haciendo honor á los discursos de notables oradores católicos: pero hoy, después que hemos palpado sus bondades, que en ningún momento el fanatismo religioso ha atentado contra ella, como se había vaticinado, no es posible demorar por más tiempo este acto, que no es sino la resultante de aquél.

Seamos consecuentes. Andemos.

Las sociedades no pueden permanecer estacionarias; deben marchar, y marchan, constantemente, modificándose en el camino incesante de sus verdaderos progresos. Así es que, lo que ayer fué bueno para el medio y época de su actuación, hoy no lo es más, y probablemente, lo que hoy mismo consideramos un progreso, mañana marcará un atraso. Esta es la vida del hombre así como de las sociedades, exponente del medio, de la época y de lo que en cada momento se llama progresos de la razón pública

La religión unida con la política en la edad media y parte de los tiempos modernos, tuvo su época. La



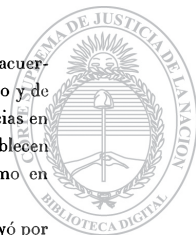
inquisición ó *El santo oficio*, procediendo de acuerdo con la autoridad civil, en beneficio del clero y de la reyesía, hizo su agosto de vidas y conciencias en forma irrecordable, por causas que hoy ennoblecen el espíritu humano y debió desaparecer, como en efecto aconteció.

Posteriormente, « M<sup>me</sup> Pompadour distribuyó por largos años, los obispados, los buenos curatos y las abadías : así la antecámara y el *boudoir* de esta mujer se veían con frecuencia repletos de candidatos eclesiásticos. » Esta es la pintura de otro momento psicológico del clero católico.

Viene, en seguida, la revolución francesa, cuyos resultados, en materia religiosa, se singularizó con la supresión de los diezmos, instituidos por Abraham, el establecimiento del registro del estado civil, la secularización de los bienes de la Iglesia que no estuviesen inmediata y directamente dedicados al culto, restricción de congregaciones religiosas, etc.

Investigando antecedentes de otros países, vemos que Bélgica, Países Bajos, Suiza, Japón, Brasil (1) y Estados Unidos (N. A.) tienen establecida la li-

(1) Constitución de 1891, sec. II, art. 72, § 72. « Ningún culto y ninguna Iglesia gozará de subvención alguna oficial, ni tendrá relaciones de dependencia ó alianza con el gobierno de la Unión o el de los estados.

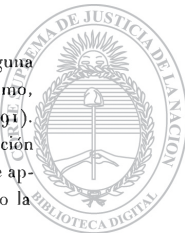


bertad de cultos, sin proteger ó sostener ninguna religión. Los artículos pertinentes de este último, son el 3º, capítulo VI, y el 1º (enmienda de 1791). Respectivamente dicen: «...Ninguna declaración religiosa será jamás exigida como condición de aptitud para ninguna función ó cargo público bajo la autoridad de los Estados Unidos.»

«El Congreso no sancionará ninguna ley por la que se establezca una religión del Estado, ó prohíba el libre ejercicio de religión alguna.»

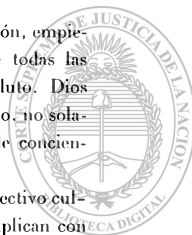
La Constitución de Francia no contiene disposición alguna en la que conste el sostenimiento de un culto determinado, pues ella es eminentemente política. Por otra parte, las leyes de 1905 y 1906, de separación de la Iglesia del Estado, son hechos del dominio público universal.

Contrariamente á estos países, tenemos á Inglaterra, donde la Iglesia anglicana es la religión del Estado y no se puede ser rey, sin profesar esta comunión: á Prusia, con su Iglesia prusiana protestante, de la que el rey es el jefe: á Italia, España y Portugal, en las que la religión católica, apostólica, romana es la religión del Estado: á Rusia, donde el emperador es el soberano defensor y protector de los dogmas de la religión cristiana ortodoxa, católi-





ca oriental. La Constitución de esta nación, empieza con este artículo : «El Emperador de todas las Rusias es un soberano autócrata y absoluto. Dios mismo manda obedecer su poder supremo, no solamente por temor, sino aun por deber de conciencia.»



La protección y sostenimiento del respectivo culto en Inglaterra, Prusia y Rusia, se explican con toda evidencia, desde que los jefes de estado son á la vez jefes ó papas de la religión propia.

España y Portugal, bajo la monarquía, no deben ser sino católicas, porque en las épocas más difíciles de su organización, han defendido su credo religioso con la espada, lo han cimentado con una fe inquebrantable y con un fanatismo enriquecido en el transcurso de los siglos.

Finalmente, Italia protege el catolicismo por razones análogas á las de España y Portugal, y porque la silla de la Iglesia católica está en el reino.

Sabido es, por otra parte, que la religión presta un poderoso concurso á las monarquías, y á su vez, éstas á aquélla, y tradicionalmente se encuentran unidos estos dos poderes para favorecerse mutuamente.

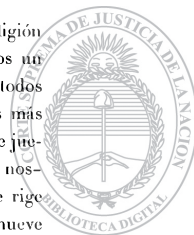
Conforme á lo expuesto, nuestro país está en muy

PIENTAS

distintas condiciones de las monarquías con religión propia citadas: vivimos en república y somos un país esencialmente cosmopolita: aquí caben todos los hombres del mundo con sus creencias las más diversas, porque la conciencia privada no tiene jueces visibles en la tierra, Como poder, entre nosotros, no debe haber otro que el político, que dirige las acciones ostensibles de los hombres y promueve la energía y movimiento de las cosas. ¿Cómo es posible que en un país como el nuestro, habitado por hombres que profesan todas las religiones de la tierra, con hijos argentinos que persisten en la religión de sus padres, sostengamos un determinado culto y tengamos condiciones religiosas excluyentes para escalar los más encumbrados cargos públicos en ventajosas condiciones para el progreso nacional?

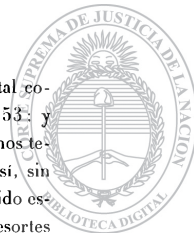
No. No es posible continuar por más tiempo con los ojos vendados ante la luz de la conciencia, ante los deberes que impone el patriotismo y ante las claridades avasalladoras del progreso social contemporáneo.

Categoricamente expuesto queda el problema del culto en nuestra Constitución, sin entrar en otras consideraciones, por creerlas innecesarias, dada la razón que asiste á mis propósitos.



Esta declaración de principios, fundamental como es, era necesaria en la Constitución del 53: y en el curso de nuestra vida institucional hemos tenido siempre la tendencia de comprenderlo así, sin poder hacerla efectiva, porque no habiendo sido establecida en esta forma, se han falseado los resortes y se han establecido dependencias inconvenientes de un poder central, apropiando prácticas é instituciones exclusivas del régimen monárquico.

Propiamente, en nuestra actual Constitución no hay sino un solo *poder*: el ejecutivo. No pudiendo el legislativo sesionar sin su anuencia y no teniendo fuerza legal sus deliberaciones sin el beneplácito del ejecutivo, es una dependencia de éste. Como los jueces son nombrados por el poder ejecutivo, y sus sentencias dependen de la suprema voluntad de éste, que *indulta* y *conmuta* penas, además de que está habilitado para suspender las garantías constitucionales y por ende quedar suspendidos los términos judiciales: la justicia no es un poder en la verdadera acepción de la palabra.

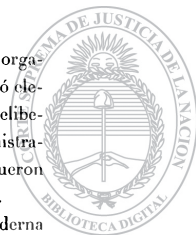


Aristóteles es el primero que, estudiando el organismo del gobierno, establece los tres poderes ó elementos que debían formarlo : « la voluntad deliberante, la magistratura que ejecuta y la administración de justicia, principios que más tarde fueron divulgados y universalizados por Montesquieu.

Constituidas las sociedades en la época moderna en esta forma, pero á base de la monarquía, los poderes legislativo y judicial no han sido propiamente cada uno de éstos un poder, por las absorciones del soberano.

Los constituyentes de Estados Unidos de Norte América, inspirados en las bondades del gobierno libre ó representativo de las democracias, y sin tener en el ejemplo de las demás naciones una forma orgánica adaptada á sus ideales, y en la imperiosa necesidad de uniformar el pensamiento de la nacionalidad que se presentaba preñado de dificultades, procuraron conciliar éstas con sus ideas de libertad, adaptando, á la vez, viejas prácticas de la monarquía inglesa, y dictaron la Constitución monárquico-republicana que los rige.

Organizadas posteriormente las repúblicas americanas, tomaron por base á la Constitución de esta gran república, lo mismo que lo hicimos nosotros,



y es consiguiente que todas adolezcan de la misma enfermedad.

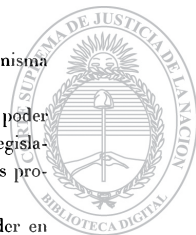
En los gobiernos americanos no hay más poder que el que comprende el ejecutivo ; pues el legislativo y el judicial no disponen de los caracteres propios que á cada uno distingue.

¿ Cuáles deben ser los caracteres del poder en nuestro régimen constitucional ?

La autonomía, el funcionamiento propio de cada uno, dentro de la órbita que á cada uno corresponde.

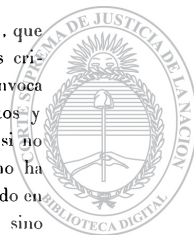
Al tratar esta cuestión el señor José M. Estrada en su libro de Derecho Constitucional, establece estas mismas calidades del poder, sin que ninguno pueda absorber facultades de otro, ni delegar las propias, porque no siendo ellos sino una delegación de la soberana voluntad del pueblo de la nación, son improrrogables é intransmisibles. No obstante, á renglón seguido, habla de que los tres poderes tienen funciones conexas entre sí, y no se refiere á las *absorpciones* por el ejecutivo de facultades propias del legislativo y judicial.

Dice, por ejemplo, que el Congreso tiene facultades ejecutivas, por la intervención del senado en nombramientos de categoría ; que es tribunal de



juicios políticos, y que dicta leyes de amnistía, que paralizan la acción de tribunales en hechos criminosos : que el presidente de la nación convoca al Congreso para tratar determinados asuntos y que las sanciones de este cuerpo no son ley si no llevan el sello de su voluntad, etc. : pero no ha fijado su atención en que, la acción del senado en el primer caso no es propiamente ejecutiva, sino de contralor para los altos empleados, á fin de salvaguardar los intereses de la nación, de la parcialidad ó de la acción partidista del presidente : ésta es una atribución que sirve de valla á los avances del poder ejecutivo, para garantizar la competencia y la honorabilidad de altos funcionarios. Respecto al segundo punto, el autor citado no ha reflexionado que los juicios políticos no son materia de la justicia ó tribunales ordinarios, y por lo tanto, esta facultad del Congreso no es atentatoria de esta rama del gobierno. El Congreso es el más alto poder político del Estado, y ésta es, precisamente la atribución que en tal sentido lo califica.

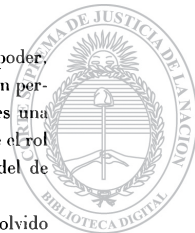
Los altos funcionarios públicos, entre los que está incluido el presidente de la república, son responsables de sus actos, indirectamente ante la nación, y directamente ante el cuerpo político que



se llama Congreso. ¿Por qué? Porque este poder, renovado periódicamente, representa la sanción permanente de la soberanía popular. Esto no es una conexión del Congreso con la justicia, porque el rol de este poder es, en este caso, muy diverso del de aquél.

¿Qué son las leyes de amnistía? Leyes de olvido por causas políticas, y justo es que ellas sean dictadas por el Congreso, cuerpo eminentemente político, en el desempeño de funciones que le son propias. Esto no es materia que entra en la esfera de las atribuciones de la justicia ordinaria. Si la amnistía interrumpe la acción de la justicia en los crímenes políticos, esto no importa una absorción de las facultades del poder judicial, ni se puede decir que sea una conexión de facultades, porque el rol del poder judicial es el de la aplicación de las leyes que dicta el Congreso.

Considerando el tercer punto, debo decir que la facultad que acuerda la Constitución al presidente para aprobar ó desaprobar las sanciones del Congreso, no es una simple conexión de poderes, sino un avance á las facultades de éste, una absorción de poder: porque ello implica una autoridad superior del presidente sobre el cuerpo legislativo.

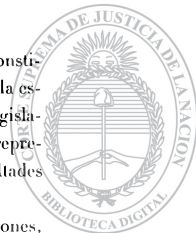


Como se ha dicho, los tres poderes que constituyen el gobierno son autónomos dentro de la esfera propia de acción de cada uno, pero el legislativo, como cuerpo político, compuesto de representantes de la voluntad popular, tiene facultades muy superiores á los otros dos.

El Congreso dicta leyes ó imparte resoluciones, y los poderes ejecutivo y judicial las aplican y ejercitan cada uno dentro de su propia esfera de acción.

Si hay algo fundamental, como base de gobierno en el derecho constitucional, este algo, son los tres poderes : legislativo, ejecutivo y judicial. Pero, ¿ dónde encontrar los antecedentes de facultades bien deslindadas entre unos y otros, de manera que el ejecutivo no ejerza supremacía sobre los demás ?

En Inglaterra, país clásico de la libertad, cuando se dice Parlamento, se dice también Rey. « El Rey es parte integrante de la legislatura » que no es otra cosa que su gran consejo, que él convoca y que él mismo preside, y nombra las autoridades que lo han de reemplazar ; y como además de esto el Parlamento hace las veces de convención constituyente permanente, quiere decir, en resumen, que el Rey es todo y está sobre todo, sin responsabilidad ninguna ante poder alguno de la tierra.



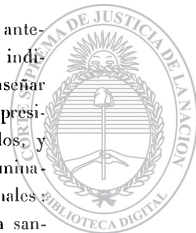


Si esto es así, como lo es en realidad, ¿qué antecedenentes podemos aprovechar, en el sentido indicado, de la libre Inglaterra ? ¿Qué nos puede enseñar Francia, constituida en república, cuando el presidente puede disolver la Cámara de diputados, y hay exclusiones constitucionales contra determinadas familias para escalar posiciones congresionales cuando, no conforme el presidente con una sanción legislativa, « puede pedir á las cámaras una nueva deliberación que *no puede ser rechazada* », y « es sólo responsable en el caso de alta traición » ?

Inútil es referirnos á los demás estados europeos, porque éstos no tienen una constitución comparable á la nuestra.

¿Qué hacer, entonces ?

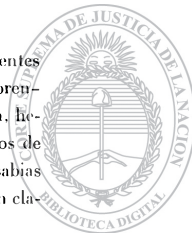
Todo el mundo contesta : á Norte América, fuente inagotable de nuestras instituciones. Llegamos á Norte América, y allí encontramos los mismos ó análogos defectos que procuro corregir : el presidente aprueba ó veta las sanciones del Congreso y convoca á este cuerpo á sesiones extraordinarias, sin cuyo requisito no puede reunirse : está autorizado para suspender la ejecución de las sentencias y acordar gracias, á guisa de suprema autoridad, facultades propias de la monarquía.



¿Y es posible que, por no encontrar antecedentes en la organización de otras naciones, y comprendiendo los defectos de la Constitución argentina, hemos de permanecer indiferentes á los progresos de la razón pública, á la satisfacción de establecer sabias instituciones, cuyas bondades se muestran con claridad meridiana?

¿Es dable que los pueblos que se inician en la vida, inexperientes, sin tradiciones propias, obligados á apropiarse las instituciones ajenas, en uno de los momentos más difíciles de su evolución política, sin la ilustración necesaria en sus hombres de primera fila, pero con el firme propósito de radicarse en el poder, hubiesen podido organizarse en mejor forma que la que se dieron?

Esto que fué muy bueno para su tiempo y por los móviles que les impulsó es hoy muy malo, es horrible, y no teniendo un jalón de mira al cual referir el rumbo cierto de la felicidad anhelada, ya que somos tan dedicados á la adopción de instituciones ajenas, sin examen ni análisis, es preciso que establezcamos el nuevo tipo de verdad republicana, propio, que sea el exponente de nuestra cultura y la realización del pensamiento nacional que, no aviniéndose á un régimen absolutista, emerge á la su-

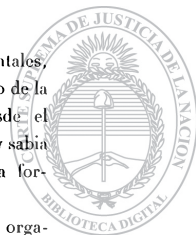


perficie en materia de instituciones fundamentales, para establecer el más regular funcionamiento de la máquina gubernamental, garantizando, desde el voto del simple ciudadano hasta la más justa y sabia delimitación de los tres altos poderes que la forman.

¿Qué obsta para que nos demos la perfecta organización representativa republicana federal, cuando la Constitución que tenemos, tan defectuosa, es más monárquica que republicana?

¿Carecemos, acaso, del discernimiento como entidad política, para distinguir lo bueno de lo malo, lo conveniente de lo inconveniente, para procurar nuestra propia felicidad, y para poder así establecer la perfecta armonía de los poderes delegados por un pueblo que quiere y que debe ejercitar su suprema voluntad, sin rentas ni tutelas deprimentes?

En los tiempos que corren, en que las sociedades marchan á pasos de gigante, en procura de igualdad para todos, de progreso y de bienestar duradero y estable, no podemos permanecer cristalizados en una forma que contraría estos altos propósitos. Pueblo que se estaciona es pueblo que muere, y si no muere languidece. Los pueblos como los hombres, tienen su trayectoria : nacen y se desarrollan, y des-

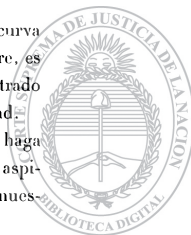


pués que han llegado á su apogeo, empiezan la curva de su descenso : y un pueblo, como un hombre, es más feliz cuando en más temprana edad ha entrado de lleno en la verdadera senda de su prosperidad.

Dejemos, pues, á los pueblos que cada uno haga su evolución política como mejor cuadre á sus aspiraciones é idiosincracia, y nosotros hagamos la nuestra con el patriotismo que ha menester.

La declaración de los fundamentales principios que contiene este artículo adicionado á la actual Constitución, y que no se encuentra en ninguna de las constituciones de los demás países, importa la base del nuevo derecho público argentino, claramente definido y de contornos perfectamente delineados en cuanto á la autonomía de los tres altos poderes que forman el gobierno.

Si en nuestra Constitución se hubiese hecho constar este artículo, no tendríamos que lamentar tanto adesio en cuanto á la supremacía que establece respecto á facultades del poder ejecutivo sobre el legislativo y el judicial, porque éstos se encontrarían en pugna con ese principio fundamental. Explicable es, que no haya sucedido así, por cuanto el estado del país ó la época de su organización requería munir á la autoridad ejecutiva con facultades capaces



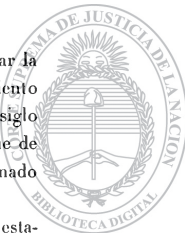
de cimentar la unidad nacional, de obstaculizar la prosecución de la guerra civil y el entronizamiento del partido unitario, que durante un cuarto de siglo había dado su sangre sin poder saciar la sed que de ella tenía el partido de la santa federación, encarnado en Rosas.

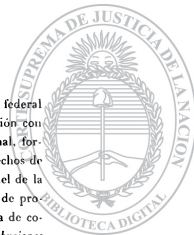
La Constitución de 1826, en la sección III, establece que el pueblo de la nación « delega el ejercicio de su soberanía en los tres altos poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, bajo las restricciones expresadas en la Constitución ».

¿ Cómo se explica que en aquel año se hubiese establecido este principio fundamental de gobierno y en el 53 se haya hecho caso omiso de él en un artículo especial ?

Es que la Constitución del 26, puede decirse que fué obra del gran Rivadavia, eminencia argentina que á veces se anticipaba á los progresos de su época, y la del 53, con un espíritu calculado de predominio político de un partido.

Estamos, pues, en el momento de hacer honor á los constituyentes de aquella data y á aquel grande hombre de gobierno inscribiendo en nuestra Constitución el artículo que propongo, en substitución del que se refiere al sostenimiento del culto.





« Art. 4°. — El Gobierno federal provee á los gastos de la nación con los fondos del tesoro nacional, formado del producto de derechos de importación y exportación, del de la venta ó locación de tierras de propiedad nacional ; de la renta de correos ; *de las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente á la población imponga el Congreso general*, y de los empréstitos y operaciones de crédito que decrete el mismo Congreso para urgencias de la nación ó para empresas de utilidad nacional. »

Art. 4°. — El Gobierno federal satisface los gastos *ordinarios* de la nación con los fondos del tesoro nacional, formados del producto de derechos de importación y exportación, *impuesto sobre la renta ó lo que es susceptible de ella sin incidencia sobre los consumos del gremio obrero*, del de la venta ó locación de tierras de propiedad nacional ; de la renta de correos, *telégrafos, ferrocarriles, canales artificiales de navegación y otros servicios públicos* ; y de los empréstitos y

operaciones de crédito que decreta el Congreso para urgencias de la nación ó para empresas de utilidad nacional.

*La aduana no es arma de represalia comercial, ni instrumento de extorción para el pueblo de la República. En el espíritu de las leyes basadas en este artículo, deberá primar la idea de la exención de impuestos á los gremios obreros, á cuyo fin, se harán disminuciones paulatinas á los gravámenes de sus consumos.*

Desde luego, la necesidad de explicar la razón de la supresión de una parte importante de este artículo y la de substituir por otras, se impone, con tanta mayor fuerza, cuanto que estos cambios representan tendencias económico-fiscales diametralmente opuestas á las existentes.

El artículo que actualmente nos rige, tiene como base principal de la renta, la imposición indirecta, que reposa en la nivelación de los haberes individuales, en la igualdad económica de los factores sociales, cuando es sabido que son de muy diversa ponderación; y el que proponemos en substitución, está fundado en la imposición indirecta para artículos que no son de uso común y en la directa; se dirige á la fortuna, á una parte de los frutos de la riqueza particular efectiva, libertando al brazo fecondo del obrero de una pesada carga, que no debe,



ni puede soportar, si queremos que sea elemento conservador, que viva en orden y en armonía con el capital y que respete la fuerza directriz de la sociedad. Preciso es, pues, que pongamos las cosas en su lugar, desechando las disposiciones con mácula, como lo son las que comprenden la imposición indirecta, cuya mayor bondad, al decir de los maestros de la ciencia que la sostienen, consiste en la facilidad de percepción y en que el que paga no se da cuenta de ello, circunstancia que permite ejercitar el abuso que se comete con la falange proletaria.

Demostrar la improcedencia, ó, más bien dicho, el origen, causa y perniciosos efectos de la imposición indirecta, como base de la renta ordinaria para la vida eficiente de la nación, es evidenciar, al mismo tiempo, las bondades de las reformas que proyecto al artículo en cuestión, y es ésta la tesis que paso á desarrollar.

Preciso es que penetremos al vasto campo de la historia, que investiguemos en el desarrollo del espíritu universal en el tiempo, tan conceptuosamente expresado por Hegel (J. W. F.), considerándolo en su sentido económico ; y preciso es que en él nos remontemos á las lejanas civilizaciones de Grecia y





de Roma, para encontrar el origen de la imposición indirecta que aún agobia las clases proletarias de las sociedades contemporáneas.

Roma, la más fecunda en materia de gabelas (nombre genérico en su origen para toda clase de impuestos), donde hasta la mendicidad estaba gravada, fué quien instituyó la aduana, rama la más fecunda del árbol que absorbe tanta savia vital y que se llama imposición indirecta.

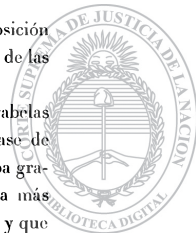
Se remonta á la época de Dolabella y Nobilior (1) (año 595 de Roma) el establecimiento de los derechos de aduana en Italia (2).

Posteriormente, el gobierno romano estableció los mismos derechos en los países conquistados : en Sicilia, España, Grecia, Egipto, Las Galias, Gran Bretaña y Escocia.

Como todo nuevo tributo es mirado con repugnancia por quienes lo sufragan, Italia exteriorizó su desagrado, puesto que el precio de los consumos se

(1) *Encyclopédie de finances, par une société de gens de lettres*, etc., à Paris, 1784.

(2) D. MELCHOR SALVÁ, *El salario y el impuesto*. Las aduanas fueron abolidas en 572 (antes de la era cristiana), temporariamente, según Cicerón, no por la demasia del tributo, sino por los abusos en la cobranza. El derecho *portorium* se cobraba también en los caminos y puentes.



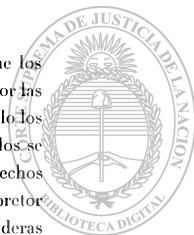
había elevado á un 50 por ciento (3) más que los existentes anteriormente al derecho : y, sea por las repetidas quejas del pueblo, ó porque, con sólo los tributos sufragados por los países conquistados se satisfacían los presupuestos públicos, los derechos de aduana fueron suprimidos en Italia por el pretor Metelo, mereciendo, por tal medida, verdaderas muestras de aplauso y simpatía.

Tal era el odio que había contra los derechos de aduana, *portorium*, y contra los encargados de percibirlos, que en Pérgamo se instituyó una fiesta anual llamada *Mucia*, en honor del procónsul Mucio Scévola, quien castigó severamente á caballeros romanos por haberse hecho culpables de extorsiones en la percepción de las rentas de la república.

Después de cincuenta años, en la dictadura de Julio César, se estableció de nuevo el derecho aduanero en Italia, para aumentar la renta, con motivo de los cuantiosos gastos que originaron las guerras en que estaba empeñado.

Según refiere Fournier de Flaix (pág. 183, t. I), las mercaderías de uso común ú ordinario, estaban tarifadas en una quinta parte de la que correspondía

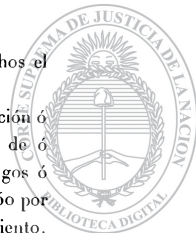
(3) E. FOURNIER DE FLAIX. *L'impôt dans les diverses civilisations*. pág. 106, 1897.

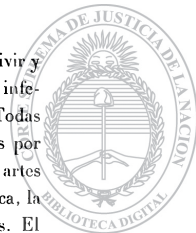


á las de lujo, y eran exentos de estos derechos el trigo, vino, aceite y sal.

En los derechos de aduana, sea de importación ó exportación, se distinguían las mercaderías de ó para países extranjeros y de ó para los amigos ó aliados. En el primer caso el derecho era de 50 por ciento *ad valorem*, y en el segundo de 20 por ciento. Esto importa decir que la aduana, además de ser considerada como fuente de renta, era á la vez una arma de hostilidad, puesto que el excesivo derecho era sólo aplicado á los países ajenos á la nacionalidad. Pero, ¿el alto derecho á un artículo necesario para el consumo, que Roma no lo producía era acaso pagado por el país de origen? ¿No era el consumidor romano quien lo hacía efectivo, con menoscabo de sus intereses económicos y quizá de su porvenir anhelado? Éste es el gran error con que se inicia la legislación fiscal de aquella época y el mismo en el que se mantienen las sociedades contemporáneas, no obstante la mentida cláusula de «la nación más favorecida», incluida en casi todos los tratados de comercio.

Sea que consideremos á Roma en la reyesía, en la república ó en el imperio, su estructura social, con pequeñas variantes, es siempre la misma : la





aristocracia gobierna y establece leyes para vivir y prosperar á expensas del trabajo de las clases inferiores, llámense esclavos, plebeyos ó súbditos. Todas las profesiones industriales estaban prohibidas por el uso ó por la ley (Dunoyer), igualmente las artes liberales : la medicina, la gramática, la retórica, la filosofía, etc., estaban ejercidas por los esclavos. El estado romano atendía la guerra y el pillaje.

Otra de las profesiones innobles era el comercio, y es por esta razón que este ramo de la actividad estaba casi monopolizado por los *melecos* ó extranjeros. En Beocia, el que tenía la desgracia de ocuparse de este género de industria, debía purificarse por espacio de diez años de ociosidad, si quería ser digno de aspirar al manejo de los negocios públicos (4). Siendo el comercio una ocupación degradante para ciudadanos romanos y griegos, la riqueza de éstos consistía en un crecido número de esclavos y en los tributos exigidos á los países conquistados. En Roma, por cada hombre libre se contaba treinta ó cuarenta esclavos, y en frente de las riquezas acumuladas de la aristocracia, estaba la necesidad extrema, vergonzante, lo cual hizo exclamar

(4) M. P. Rossi, *Economía política*. Ed. 1836.

á Platón que las riquezas y la pobreza extremas eran las pestes más formidables que asediaban la república (5). Las deudas eran redimidas con la esclavitud y se garantizaban con el juramento, y el rigor de las sentencias alcanzaba hasta el cadáver de la víctima. Con dinero se compraban grados militares, títulos honoríficos ó pergaminos de nobleza. El libidinismo y la corrupción general de las costumbres, tanto en la plutocrática aristocracia como en las clases proletarias, tenían su asiento permanente en Roma. Catón el Censor cedió su mujer á un amigo que la codiciaba, y volvió á tomarla á la muerte de este último; era usurero como el que más, y sus beodeces no diferían de las de los plebeyos. « La inmunidad del impuesto era practicada á título de privilegio, de rango, de función, de casta, de raza, con una tendencia característica de gravar con el impuesto sólo á las clases inferiores ó á los pueblos vencidos, lo que ha sido largo tiempo el mismo hecho político y económico » (6).

La multiplicidad de impuestos creció enormemente en la época del imperio, notándose como los principales, los siguientes : de aduana, la capita-

(5) J. BODIN, *La République*. Ed. 1594.

(6) DE LAMENAN, *La concurrence sociale*. Ed. 1904.



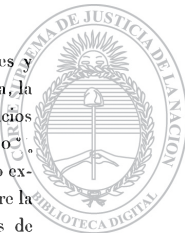
ción, la talla real, la veintena sobre sucesiones y legados, la décima parte de los frutos de la tierra, la octava de los árboles frutales, ayudas para edificios públicos, derechos sobre la venta de esclavos (50% de su valor), y sobre los artículos de comercio expuestos en los mercados ó plazas públicas, sobre la sal, las sepulturas, hogar (fogón), materiales de construcción, bajas dedicaciones de la actividad y la *aurum coronarium*.

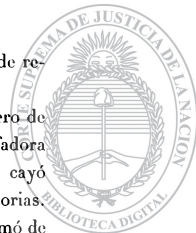
El erario romano disponía de sumas fabulosas, en razón de estos onerosos impuestos y de las indemnizaciones de guerra y pensiones anuales de países amigos y aliados. Da la medida de ésto el dato que registra *De magnitudine romana*, de Juste Lipse (7), que la renta anual de los emperadores era de trescientos millones de sextercios.

Nerón tuvo la idea de suprimir los derechos de aduana, en los primeros tiempos de su gobierno, pero cedió á la oposición del senado, que se fundaba en que el pueblo exigiría nuevas supresiones de impuestos si se excluía aquél.

Tal es el estado de aquellas sociedades en las que, por primera vez, aparece la aduana como fuente de

(7) *Finances, par une société de savants, etc.*, t. I.





renta y al mismo tiempo como instrumento de represalia comercial.

Roma, singularizada por el espíritu guerrero de su época, dueña del mundo conocido y triunfadora en mil combates, tuvo también su Waterloo : cayó al fin, vencida por el peso de sus propias victorias. El oro y el lujo arrebatado á Oriente la enfermó de muerte, y más tarde el desborde irresistible de sus hordas, la arrasó.

Sobre las ruinas de la sociedad romana levántase el pedestal de una nueva civilización, pero en todas partes donde alcanzó el poderío de aquella, quedaron jalones de su empírico sistema financiero adaptado á un pueblo en el que los extremos de la riqueza y de la miseria de las personas, ó sea la nobleza y la esclavitud, eran su característica.

¿Cuáles son los rasgos peculiares de las sociedades en la edad media ?

El cristianismo y la dominación germana en los vastos dominios del imperio romano agonizante, son dos hechos culminantes en la historia que dan origen al largo período que vamos á reflejar.

Como en los tiempos primitivos se inicia el gobierno de los bárbaros con el dominio del más fuerte,

y su característica es el señor y el vasallo, ó sea el amo y el esclavo de los romanos, con la diferencia de que no existe más el derecho de vida ó muerte sobre los de esta misera condición, y esto es ya un progreso. La piratería es ejercida por los señores feudales en las condiciones de hechos invituperables, y con el peaje exigido á mercaderes extranjeros ó las riquezas que á éstos se les arrebatara, se construyen castillos y se compran heredades. El siervo de la gleba es rasurado y lleva un collar de cobre con la inscripción del dueño á quien pertenece (8). En cuanto á tributos, en favor del señor, está gravado con el censo, los diezmos, la cuarta parte de los frutos, la talla, el chevage, la jornada de trabajo gratuito (*la corvée*), etc. El siervo no puede producir ningún acto, sin la voluntad de su amo ó señor y es cosa que aumenta el valor de la tierra, pasando con ella al dominio del nuevo adquirente. Los obispos y curas vendían á los recién casados de sus vasallos el derecho de unión carnal de las tres primeras noches : y los primeros vendían á los curas el derecho de tener una concubina (9).

(8) CH. DUNoyer, *Liberté du travail*, t. I, pág. 227.

(9) M. DÉMEUNIER, *L'esprit des coutumes des peuples*, t. I y II, ed. 1776.

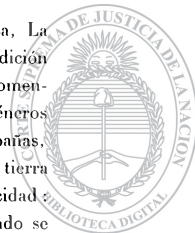




Cien años antes de la revolución francesa, La Bruyère, con frase lapidaria, clasificó la condición del vasallo francés, en forma que exime todo comentario : « Se ven ciertos animales de ambos géneros de apariencia salvaje, esparcidos por las campañas, lívidos y tostados por el sol, adheridos á la tierra que mueven y remueven con invencible tenacidad, tienen una especie de voz articulada, y cuando se ponen de pie, muestran una faz humana. Por la noche se guarecen en cuevas, donde se alimentan con pan negro, agua y raíces. »

Á la par de la reyesía y del señor feudal, existía otro poderoso elemento de gobierno, consistente en la clerecía.

Los obispos eran los más poderosos terratenientes de Europa, así como las congregaciones monásticas. Eran poseedores de provincias enteras y de una cantidad de pueblos y aldeas, y por consiguiente podían levantar y levantaban ejércitos con las riquezas de que disponían y el considerable número de siervos que formaban parte de la tierra de sus dominios. Da la medida de esta afirmación, el dato de que el monasterio de Saint Martin d'Autun, poseía *cien mil familias vasallas* (siglo viii). En las ciudades ó pueblos en que residían estas entidades no se co-



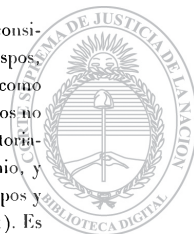
nocia otra autoridad que la de ellos, y por consiguiente eran inmunes al tributo (10). Los obispos, abates, las congregaciones y los señores laicos, como soberanos de numerosos súbditos, con derechos no bien deslindados en grandes extensiones territoriales, vivían en perpetua discordia de predominio, y aun se libraban batallas sangrientas entre obispos y abates, y entre éstos y los señores feudales (11). Es de suponerse el estado corrompido en que se deslizaba la sociedad, si se toma en cuenta las riquezas acumuladas por la clerecía y máxime si escuchamos al obispo de París, Eudes de Sally, quien en 1198, prohibió y condenó las bacanales infamantes que el clero celebraba públicamente en la iglesia de Notre-Dame, así como en la mayor parte de las iglesias catedrales y colegiales del reino, en los siglos xi y xii (12).

Era tal la anarquía reinante y las continuas guerras en que estos señores estaban empeñados, que el Concilio de Tulujes (1041) estableció que solamente tres días de la semana, lunes, martes y miércoles, se dedicarían para la guerra, y los restantes para las prácticas religiosas.

(10) MONTESQUIEU, t. III, pág. 96.

(11) J. L. LAMESAN, *La concurrence sociale*. Ed. 1904.

(12) CH. DUNoyer, *Liberté du travail*, t. I, pág. 213.



El hambre de los menesterosos y las pestes fueron plagas permanentes entre los siglos x y xii, y entre 1031 y 1133, los hombres mismos se cazaban para comerse los unos á los otros.

Servidumbre absoluta, hambre, miseria, ruina de la clase proletaria, mendicidad y prostitución, son la característica de esta época de dislocación señorial. «En fin, un último sello de los desórdenes y de la desolación de estos tiempos, es este aspecto de tristeza profunda que presenta entonces la sociedad, tristeza tal, que su impresión ha llegado hasta nosotros, á través de los siglos: de tal manera, que es imposible aún pronunciar el nombre de edad media sin despertar sentimientos de terror y de melancolía» (13).

Á las causas de tanto malestar apuntadas, tengo que mencionar los derechos de aduana. Éstos no desaparecen en ningún momento, y Francia los tenía hasta interiores, entre las provincias, como acontecía en época de (Clovis 466-511). Clotario II, convocó un concilio (615), el que se pronunció en contra de la multiplicidad de las aduanas interiores, sus tarifas excesivas y la forma extorsionista de pago. En los periodos sucesivos, ó sea de Hugo Capeto

(13) CH. DUNOYER, *Liberté du travail*, t. I, pág. 214.



(987), Luis el Joven (1147) Felipe el Atrevido (1277), Felipe el Bello (1304), Duque D'Anjou (1383), Luis XI (1480), Francisco I (1540), Luis XIII (1601), Colbert (1661), Luis XIV (1754), etc., etc, hasta nuestros días, Francia no abandonó un solo instante los derechos de aduana. Inglaterra los ha tenido también en todo momento desde tiempo inmemorial (14), lo mismo que Alemania, Bélgica, Italia, España y Portugal, Turquía europea, etc.

Penetramos á la época moderna, en la que, no obstante los progresos portentosos que la caracterizan, las clases proletarias continúan agobiadas con tributos de todo género, como en los tiempos de la opulenta aristocracia romana ó en los de los superhombres de la edad media. Las ciencias, las artes y las letras, en su despertar, inician grandes horizontes para el porvenir, pero el señor y el vasallo subsisten siempre en el hecho. El noble no paga impuestos, y el artesano y el campesino son groseramente esquilados por el tributo, como un castigo propio de su condición. La capitación, la talla, la veintean, el diezmo, el impuesto sobre la sal, eleva-

(14) J. BRY, *Historia industrial y económica de Inglaterra*, 1900.

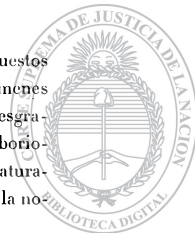


do á un 1200 por ciento de su valor, los impuestos de aduana del reino y los peajes y otros gravámenes de los señores feudales, son el cortejo de las desgracias que aniquilan el esfuerzo de las clases laboriosas, condenadas á transformar las riquezas naturales con su sangre, en beneficio exclusivo de la nobleza y del clero.

Las *corporaciones* marcan ya un progreso, del punto de vista del estado anterior, y las clases sociales establecen su típica delimitación : los señores y jefes militares forman la nobleza y tienen el monopolio de la dirección gubernamental : el clero, la hegemonia religiosa, y el pueblo ó clase media, el trabajo y profesiones liberales. Los primeros están en análogas condiciones á los señores feudales, colmados de honores y funciones lucrativas, exonerados de impuestos y en posesión de derechos propios de su rango ; el clero sigue con los diezmos y son inmunes al tributo : y las muchedumbres, siempre en calidad de bestias de carga.

El descubrimiento de América, acaecido á fines del siglo xv, abre nuevos rumbos al espíritu de conquista de las naciones europeas empeñadas en su definitiva organización, y se ensancha el horizonte del predominio de los mares.

Los siglos xvi y xvii se singularizan por una gue-

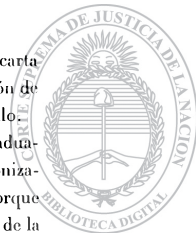


rra sin cuartel de trabas aduaneras, y la gran carta de la marina inglesa, ó sea el acta de navegación de Cromwell (1651), es una prueba evidente de ello.

Montesquieu, pensaba que los derechos de aduana, y en general los impuestos directos se armonizaban más que cualquier otro con la libertad, porque esa forma no afecta directamente los intereses de la persona: ésto tiene su razón de ser, del punto de vista de la extorsión directa que se cometía con el proletariado en la forma personal de los diferentes tributos que le agobiaban, pero no del principio general del impuesto, que debe ser equitativo y humano, ni del de la libertad en sí; porque ésta sólo florece á la sombra de la independencia personal, garantizada con el haber económico conquistado por los frutos del trabajo.

Nos encontramos en el periodo en que la ciencia económica empieza á tomar sus primeros contornos de tal.

La guerra de tarifas aduaneras y la estrecha dirección gubernativa de las industrias nacientes, imposibilitadas de alcanzar un amplio desarrollo, hizo surgir la idea de la libertad comercial, iniciada en Inglaterra con North, Hume, Tucker y Locke y enaltecida y universalizada en Francia con Boisguille-



bert, Vauban, Quesnay, Dupont de Nemour, Gournay, Mirabeau, Mercier-Larivière, Furgot, etc.

El mariscal Vauban criticó las leyes que fomentaban la miseria de las clases laboriosas, proclamó la libertad industrial: protestó con las desigualdades del impuesto, se declaró partidario de los impuestos sobre los consumos de la clase obrera, y propuso un solo impuesto sobre la renta y la tierra, con el nombre de *diezmo real*, que fué también el título de su libro, el cual casi le valió la Bastilla (1707).

Quesnay, fundador de la escuela fisiocrática, decía, que los impuestos no deben ser aplicados sobre los salarios, ni sobre los consumos de las clases laboriosas y proclamaba la libertad de la actividad personal, conforme á las facultades y tendencias de cada uno.

Las ideas proclamadas y sostenidas por los pensadores geniales nombrados, fueron el germen de la revolución francesa.

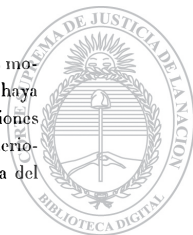
Adam Smith, aumentó el prestigio de los fisiócratas con su libro inmortal: *An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations* (1776).

Á fines del siglo xviii, con los progresos de la mecánica, empieza en Inglaterra la prodigiosa actividad de la maquinaria, y con ella nuevas dificultades de la clase obrera.



Tal es el estado de la sociedad en los tiempos modernos, y por más que la ciencia económica haya progresado, el régimen financiero de las naciones continúa siendo el mismo del de las edades anteriores y primitivas : la renta, á base de la pobreza del obrero.

Hemos llegado al período contemporáneo. En todos los órdenes de la vida y en todos los países y lugares de la tierra se respira un ambiente de febril actividad, de progreso, de energía vital : la libertad se abre paso, franqueando obstáculos que parecían insuperables : la igualdad civil avanza hasta en las civilizaciones más retardatarias ; la libertad de conciencia es un hecho irremisiblemente conquistado, y las monarquías, con ó sin conciencia de la acción de la masa de los pueblos. van, camino de la república, del *self-government* ; el vapor y la electricidad y son vínculo de paz y de fraternidad entre pueblos y razas de habla y de tendencias diversas, haciéndolas converger hacia un solo y único punto de mira, la armonía universal : el consenso de una sola razón pública. Empero, en este hermoso cuadro de realidades y esperanzas mejores. se nota un desequilibrio, una desigualdad, en lo que constituye el origen y fin





de todos los progresos humanos : la sociedad, — el artesano, el jornalero que extrae los tesoros de la tierra y en general, el proletariado, trabajan con indecible tenacidad en beneficio del capital acumulado en las cajas de los bienaventurados de la fortuna por la voluntad de las leyes que rigen los destinos de las sociedades, cual si viviéramos en los más atrasados tiempos de la Roma decadente ó del feudalismo de la edad media.

La revolución francesa epiloga el período anterior con la estrofa inmortal : igualdad, libertad y fraternidad, y las naciones acogen con júbilo el eco de ese gran triunfo laureado por la razón pública, condensado en el espíritu ponderado de la nación francesa. El feudalismo ha desaparecido, y la vida de las masas se humaniza en el orden político y social. La concordia es un hecho realizado, la democracia es culto de gobierno, el sufragio universal es la fuente del poder. Pero en el concierto de estas conquistas y no obstante modificarse el régimen del impuesto, las clases laboriosas continúan soportando el peso de las mismas cargas tributarias de las pasadas centurias. El tributo ha cambiado de nombre y de forma, el vasallo se ha trocado en el ciudadano libre é independiente, pero el que costea los presupuestos públi-

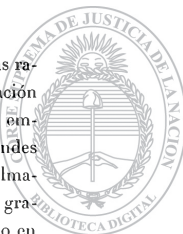


cos es siempre el mismo, el elemento indispensable del trabajo reproductor, el obrero, el proletariado.

La capitación, la talla real y personal, el diezmo, las ayudas, la córvea, las corporaciones y maestrazgos han desaparecido, las condiciones de la clase laboriosa han cambiado favorablemente, pero en cuanto al tributo, excepción hecha de las contribuciones personales deprimentes, no hay sino un cambio de teatro y de decoración : los artistas son los mismos, la burocracia, y el público que costea hasta los más pueriles caprichos de éstos, es también el mismo, la masa del pueblo trabajador.

Es este asunto fácilmente explicable. Como la masa de la población laboriosa estaba agrupada en los territorios de los señores ó de la clerecía, dedicados casi exclusivamente al laboreo de la tierra, *la gran industria de la época*, los gravámenes suprimidos por la revolución, eran aplicados á esa forma en que la sociedad estaba constituida, y cambiada ésta, la modificación del gravamen es su consecuencia lógica. Al mismo tiempo que Adam Smith triunfaba con sus ideas científicas del libre cambio, la mecánica, con el dominio del vapor y la utilización del hierro y de la hulla, inicia su poderoso impulso, y las manufacturas rutinarias diseminadas en las campañas son





reemplazadas por las maquinarias y las fábricas radicadas en las ciudades. Desde entonces la población industrial se traslada á centros poblados, y el emporio de la actividad se reconcentra en las grandes capitales. La tierra cultivada, deja de ser esquilmada, y el tributo, en forma indirecta continúa gravando al mismo artesano ó campesino instalado en las ciudades, focos de actividad, de luz y de vida.

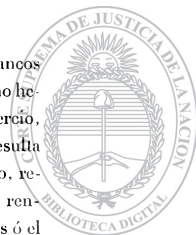
Una comparación entre la renta fiscal del siglo XVIII. por ejemplo, y la del presente, nos demuestra la exactitud de la afirmación que acabamos de hacer.

*L'encyclopédie des finances*, de 1784, página 497, tomo III, nos demuestra que en un cuadro de las rentas de Francia en 1782, la talla, la veintena y la capitación representaban el 50 por ciento del total de la renta; y si tomamos un presupuesto de esta misma nación de cualquiera de estos últimos años, el de 1899, por ejemplo, vemos (página 1115, *Annuaire de l'Economie politique et de Statistique*, de M. Block):

	Francos
Productos de aduana.....	441.012.000
Otras contribuciones indirectas....	624.492.050
Azúcares.....	186.494.900
Fósforos y tabacos.....	426.872.000
Total.....	1.678.870.950

Como el total general de la renta es de francos 3.477,761.849, y en la enumeración anterior no hemos anotado la contribución de patentes de comercio, colocada en la sección de imposición directa, resulta que la imposición indirecta de este presupuesto, representa también el 50 por ciento del total de la renta. Lo que quiere decir que las clases laboriosas ó el obrero de hoy, sin la talla, sin la capitación, sin el diezmo clerical, etc., etc., es el mismo de ayer, que contribuye con su esfuerzo á sostener el complicado armazón de los presupuestos públicos y del clero: es siempre la abeja de la colmena humana llamada nación, labrando la miel que los zánganos liban.

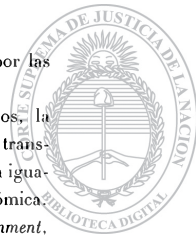
*L'impôt foncier*, en 1782 representaba un 33 por ciento del total de la renta, y el mismo en 1899, es de un 19 por ciento, con la diferencia de que en aquella fecha, el impuesto gravaba casi exclusivamente á la propiedad rural y el de ésta á la propiedad urbana. Así es que, radicándose el tributo en las ciudades, se ha libertado á la propiedad raíz de las campañas, en momentos en que el propietario no tiene siervos para responder á los exigentes presupuestos públicos, y como la propiedad raíz es parte importante de la riqueza particular, resulta que el rico es siempre el más favorecido por las le-



yes fiscales, y el pobre el más lesionado por las mismas.

Se ve, pues, que en materia de impuestos, la revolución francesa no ha tenido la virtud de transferir al rico la pesada carga del pobre; los ha igualado ante la ley, pero no en la capacidad económica. Al pobre lo ha preparado para el *self-government*, pero no lo ha munido de las condiciones necesarias para el gobierno libre, porque no ha favorecido la independencia personal con el bienestar pecuniario: ha levantado su nivel moral y le ha quitado, como antes, la base material en que aquél reposa, como elemento indispensable de vida. La clase no acomodada de la sociedad, no está mortificada por el empleo fiscal en demanda de tributo alguno directo, como acontecía en los periodos anteriores á la revolución, pero está sacrificada indirectamente, sin saberlo.

La crudeza de la forma primitiva y de todos los periodos anteriores á la revolución, exigiendo pagos y servicios directos, exorbitantes, hasta en la posada del más misero habitante, es reemplazada por la imperceptible y habilidosa invención de la imposición indirecta, forma la más elogiada por los que creen que, ser financista de estado quiere decir, ser



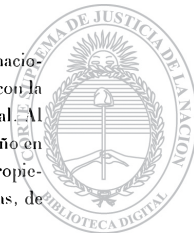
hábil para estrujar el bolsillo del consumidor nacional : es decir, obtener la mayor renta posible con la mayor facilidad, sin dejar sentir la acción fiscal. Al sistema que ejercitan los financistas de este cuño en la hora presente podría intitularse con más propiedad, régimen de la anarquía social, de huelgas, de abuso, de expoliación.

Tal es el estado de las clases laboriosas en la época de alta cultura, en Francia y en todos los países civilizados, así como en el nuestro.

¿ Cuáles son las consecuencias lógicas que fluyen de los antecedentes históricos mencionados ? Que el régimen tributario de la edad romana, cuya sociedad estaba formada por dos clases ; la noble ó guerrera, exenta del tributo, y la esclava ó plebeya, uncida al carro de los presupuestos públicos, es el mismo que al través de los siglos, con insignificantes variantes de forma ó de nombre en los tributos, tenemos en este país nuevo, como la panacea de la ciencia económica.

¿ Por qué en la edad media se mantienen los mismos ó iguales tributos de la edad romana ?

Porque la sociedad está basada en el feudalismo : el señor laico y el señor religioso son los dueños de

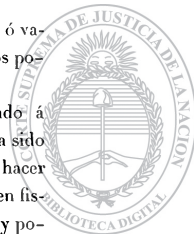


la tierra, y la inmensa mayoría son súbditos ó vasallos adheridos á sus heredades, para hacerlos poseedores de ingentes riquezas.

El análisis social que precede, considerado á grandes rasgos en sus diferentes ciclos, no ha sido traído por una fantasía histórica, sino para hacer ver el estado social en que ha nacido el régimen fiscal y en los que ha sido adoptado y sostenido, y poder compararlo con el actual, y en especial con el nuestro para demostrar que este régimen es anacrónico y no se amolda al progreso social de la hora presente.

El régimen fiscal de las sociedades esclavas, vasallas ó monárquicas, no puede ser nunca el que corresponde á una sociedad á base de libertad, de democracia, de gobierno representativo, de igualdad civil y política.

Cuando se hablaba de sociedad en los primitivos pueblos, se refería á la clase dirigente ó noble, en la que estaba centralizada la riqueza, el saber, la dirección religiosa, el poder, la fuerza ; todo lo demás era esclavitud, servilismo, no formaba parte en la sociedad : pero las democracias no lo entienden así en los tiempos que corren : no hay privilegios de sangre ni de nacimiento : el gobierno es del pueblo y para

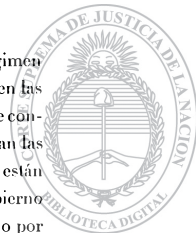


el pueblo : de todos y para todos. Luego el régimen fiscal ideado para hacer pesar todo el tributo en las clases laboriosas y esclavas, no es el que puede convenir á nuestro país ; ni tampoco el que ejercitan las monarquías en la hora presente, porque están constituidas á base del sistema feudal : el gobierno de los privilegiados, y el pueblo está formado por súbditos ó vasallos.

Siendo esto así, ¿ cómo es posible que desoigamos las voces de la razón, de la equidad, de la justicia, de la armonía social que nos dicen á gritos que la igualdad, la fraternidad, la libertad, son mentira, si no se establece el régimen del tributo, conforme á la capacidad económica de cada uno, nivelando los servicios y las cargas públicas ?

¿ De qué nos sirve la libertad civil, el sufragio libre, si el pueblo, si la masa cívica, no puede hacer uso de la facultad de emitir el voto libre y conscientemente, porque su deplorable situación económica le obliga á pagar con ese transcendental acto, al patrón la gracia de estar ocupado en el taller. ó al candidato rentista, los pocos dineros que le alarga ?

Si no nos disponemos á enmendar esta anomalía, tan perniciosa para nuestra sociedad, tendremos que convencernos que los elementos que for-

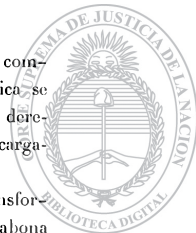




man la fuerza directriz del país proceden con completa mala fe, ó que el pueblo de la república se mantiene aún en la supina ignorancia de sus derechos, vulnerados conscientemente por los encargados de dirigir sus destinos.

El pueblo de hoy no es el de ayer : sus transformaciones se traducen en progresos, que eslabona con cuidadoso empeño, y sus tendencias, conforme á sus necesidades de nuevas conquistas, lo conducen y lo conducirán á realizar reivindicaciones santas y legítimas, y es justo que los hombres dirigentes se anticipen á acordarlas para no hacerse acreedores á la amenaza que Tiberio hiciera desde la tribuna comicial á los ricos que se habían adueñado de la tierra pública, antes en poder de los pobres : « ceded algo de vuestras riquezas, si no queréis que un día os las arrebatén todas ».

Nuestro país está en malas condiciones en cuanto á su economía, y necesita virar la nave para considerarlo bien organizado y dirigido : y lo estará cuando sus leyes no favorezcan la división de clases ó la disparidad de opulencia y pobreza, porque de la miseria del mayor número, á la anarquía, no hay sino un paso : cuando la fortuna privada no sea el patrimonio de un determinado y limitado número



de personas : cuando en vez de proteger el capitalismo las leyes fomenten la equitativa distribución de los frutos del trabajo : cuando la aduana deje de ser instrumento de extorsión para la falange proletaria y se transforme en beneficio de ésta, en fuente de vida, á manera de la mansa corriente de aguas, que desviadas del obstáculo que dificultaba su curso, fecundan los prados por donde cruzan, suavizan el ambiente y embellecen la comarca : cuando la masa ciudadana, en pleno goce de su libertad, consciente de sus deberes y derechos, se encuentre en condiciones de darse el gobierno que se merece : cuando las tarifas prohibicionistas de artículos importados de uso común, económicamente elaborados, permitan ser consumidos á bajos precios : cuando á las industrias nacionales se les quite la muleta proteccionista y se basten á sí mismos por la bondad de sus frutos y la baratura en su costo de producción : y finalmente, cuando todas y cada una de las leyes que se dicten para el país, sean concurrentes al fin que todos los pueblos civilizados se proponen alcanzar : la felicidad social, el bienestar de todos y de cada uno.

Establecidos los fundamentos en que reposa el régimen tributario en los primeros pueblos de la



antigüedad, adaptado y sostenido universalmente hasta nuestros días, y demostrada su inconveniencia á la forma contractual de las democracias, peneiro al detalle de las reformas que propongo al artículo en cuestión.



*De las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente á la población imponga el Congreso general,* es una disposición cuyo contenido importa autorizar el establecimiento de cualquier otra contribución, aparte de las especificadas, que graven indirectamente al contribuyente, en general, á fin de engrosar los recursos ordinarios de la renta fiscal.

Cuando se habla de la población nacional, como base del impuesto, es entendido que éste pertenece á la clasificación de indirectos, á aquellos que igualan la capacidad económica de pobres y ricos, porque la cuota del impuesto es proporcional al monto de la cantidad que se desea obtener y á la población que la sufraga.

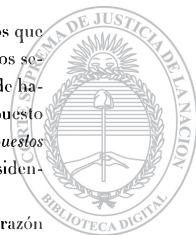
En la discusión de la constitucionalidad de la ley de impuestos internos en el congreso, en 1894, se emitieron ideas las más contradictorias respecto al alcance de esta parte del artículo que comento. Se dijo que ella autoriza el establecimiento ilimitado de

impuestos directos é indirectos ; pensaron otros que sólo se refiere á los primeros y otros más, á los segundos, y el mismo doctor López, ministro de hacienda en 1890, dijo que se trataba de un impuesto directo, lo que comprueba la palabra de *impuestos sacrificios*, con que los clasificó el mensaje presidencial al someter el proyecto á las cámaras.

Así es que los impuestos internos tienen su razón de ser en la facultad discrecional que estudio.

Autorizar al gobierno para imponer cuantas contribuciones indirectas le parezca conveniente es establecer el principio más funesto del desequilibrio social, facultando el aumento creciente del tributo sobre las clases laboriosas, y no sería difícil que llegara á establecerse hasta el impuesto sobre los salarios, anterior á la revolución francesa, que Vauban y Quesnay impugnaban, pidiendo su abolición.

La base del impuesto, en general, es la equidad, y si nuestras leyes no consideran la diversa capacidad económica de los factores sociales y la ponderación de los respectivos beneficios, no consultan la equidad, y por consiguiente son inconsultas y arbitrarias, y éste es el caso de la disposición que comento, por cuya razón apunto la conveniencia de su supresión.

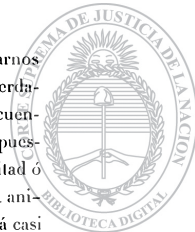


En cambio propongo el *impuesto sobre la renta sin incidencia sobre los consumos del gremio obrero*, cuyo monto, aumentado progresiva y paralelamente á la disminución de los gravámenes indirectos del gremio obrero, puede reemplazarlo con ventaja para las arcas fiscales, sin producir inconvenientes en el monto de los presupuestos públicos, sin herir las fuentes de la riqueza particular, y propendiendo á la universal aspiración de la igualación del haber social.

Si quisiéramos evidenciar los males que la imposición exagerada á los artículos de uso común acarrea á la sociedad, nos bastará recordar que las huelgas constituyen hasta hoy una epidemia social. En 1907 hemos tenido en esta capital 254 huelgas, con 184.431 huelguistas y sus pérdidas en salarios representan la cantidad de 2.683.755 pesos moneda nacional.

El aumento del salario ó la reducción de horas de trabajo, son, por lo general, las causas ostensibles, pero la razón fundamental es otra muy diversa. Son tan caros los consumos y los servicios que paga el obrero, que no hay salario que dé abasto, sin hablar de ahorros. En tal condición, su espíritu está preparado para la revuelta, á costa de cualquier sacrificio





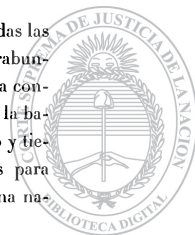
y no espera sino un nimio pretexto para mostrarnos su actitud airada, por razón de que ignora la verdadera causa de sus males. Si el obrero se diera cuenta de que sus consumos se encarecen por el impuesto indirecto ; que el Estado se apropia de la mitad ó más del salario que diariamente percibe con el aniquilamiento de sus fuerzas, y que el rico está casi exento del tributo, como en los tiempos de Atenas y de Roma ó en los de la edad media y moderna, no perdería su tiempo en la limitación de horas y aumento del salario, para reunirse todos los días de descanso en la plaza de Mayo ó en las puertas del Congreso, en demanda de la supresión de los gravámenes que lo extorsionan.

Justificar la exención del impuesto al obrero, es asunto que el simple buen sentido lo aclara y evidencia.

Toda persona que con su esfuerzo adquiere lo necesario para la vida, y le permite el ahorro, es un elemento conservador, exento de ideas levantiscas. La mala situación económica de las personas predispone á todo género de abusos y de crímenes, y acontece lo contrario con el floreciente estado de los negocios.

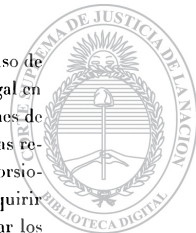
Por otra parte, nuestro país de inmigración, con

inmensas extensiones desiertas, aptas para todas las actividades, necesita la afluencia de la superabundancia de brazos de la vieja Europa, y ninguna condición más en armonía con esa tendencia que la abaratación de la vida. Leyes liberales, pan barato y tierras de cultivo, son los grandes elementos para atraer la inmigración, ó sea para constituir una nación grande, rica y poderosa.



*La aduana no es arma de represalia comercial, ni instrumento de extorsión para las clases proletarias,* es la declaración que agrego el artículo 4°, por las razones que paso á exponer.

La represalia aduanera, no es propiamente un mal para la nación á la cual se pretende hostilizar. Elevar los derechos de aduana para los productos de otros países es, en el peor de los casos, advertirle á éste que debe buscar colocación en nuevos mercados; pero, para el consumidor representa muy distinta cosa. Si el consumo de esos artículos es de indispensable necesidad, el único perjudicado es el consumidor; si son similares á otros de producción nacional, más económicamente elaborados y de superior calidad á éstos, el sacrificado es el pueblo, que consume artículos caros y de calidad inferior.



De manera que la represalia aduanera al uso de la Roma antigua, no puede tener existencia legal en nuestro país, porque, aparte de consideraciones de otro orden, consistentes en la armonía y buenas relaciones internacionales, su efecto es de extorsionar al contribuyente, porque le obliga á adquirir por 100 lo que podría tener por 50; es dañar los verdaderos intereses económicos nacionales, obligando al consumidor á hacer erogaciones superiores á su capacidad, y al Estado á percibir menor renta.

Los derechos de aduana se elevan también sobre artículos similares á otros de producción nacional con el propósito de obligar al consumo de éstos. Esto es lo que nosotros llamamos sistema proteccionista de las industrias nacionales, tales como el azúcar, el vino, fósforos, cerveza y otros productos fabriles, el que, con más propiedad, debiera llamarse : enfermedad nacional.

¿ Por qué se elevan los derechos en este caso ?

Porque los de producción nacional no pueden competir en franca lid con los de procedencia extranjera, en razón de que éstos tienen menos recargo en la producción y son de mejor calidad.

El resultado inmediato de esta medida es el encarecimiento de la vida, el alza del precio de los



artículos, y la exigua renta que por dicho concepto percibe el Estado.

En tal caso, ¿qué es lo que gana el país con medida semejante, exigiendo tanto sacrificio al total de consumidores nacionales y perdiendo una parte de su renta?

¿Ser tenido en las condiciones de país fabril, con productos de calidad inferior, encarecidos por el tributo del obrero y por el costo de maquinarias de fabricación extranjera?

¿Gana el país fomentando la acumulación de capitales en manos de un reducido número de industriales (no alcanza á 100 el número total de los industriales protegidos) á costa de los 5 ó 6 millones de habitantes de la nación?

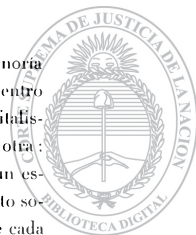
No atino, en verdad, á comprender en qué consiste el beneficio que aporta al país el sistema proteccionista de los que se llaman industriales nacionales mediante el torniquete aduanero: pero entiendo claramente que en, las ciencias sociales, el sujeto es la sociedad nacional, y en los casos de protección, es deber tener en cuenta, en primer término, á ésta, y cualquier obra pública, y cualquier ley debe tener por principal objetivo la protección social, el bienestar de todos y de cada uno y cuando menos el del



mayor número, nunca el de una reducida minoría en detrimento de la inmensa mayoría. No encuentro la razón en que se funde la protección del capitalismo por una parte y la extrema miseria por la otra: pero comprendo los beneficios que reportará un estado próspero en la economía de cada elemento social, conforme á la capacidad y aptitudes de cada uno.

El obrero, el colaborador infatigable de la riqueza nacional es el socio industrial del capital, y en tal condición él no debe tener gravámenes que amenigüen su jornal, á fin de que mejore su estado económico y levante su condición moral, porque todos tenemos derecho á esta legítima aspiración y el Estado tiene el deber de procurarla por todos los medios á su alcance.

La acción del gobernante debe asemejarse á la del médico: interrogar al paciente, que es el pueblo, auscultarlo minuciosamente, y poner en juego la terapéutica para cicatrizar las llagas y fortificar el cuerpo lesionado, á fin de que pueda desarrollar su acción eficaz como elemento constitutivo de una sociedad bien organizada. Empero entre nosotros acontece lo contrario: se abandona al doliente ó no se le toma en cuenta, y se dedica todas las energías



en favor de la parte del cuerpo social que respira salud y vida por todos los poros de su organismo. Esto no es gobierno, ni humanitario, ni científico, es sencillamente régimen de lo arbitrario, de lo injusto, de lo inhumano.

Las bondades de la imposición indirecta consisten en el fomento más decidido de la desigualdad social, ó sea de la riqueza y de la pobreza extremas, y ella ha sido siempre una de las principales causas de las grandes revoluciones sociales. La tiranía y la esclavitud son colorarios de ese sistema, el imperio de la fuerza, en pugna con la impotencia del derecho.

¿ Cuánta corrupción traen aparejadas los extremos de la opulencia y miseria ! ¿ Qué no alcanza el dinero, y qué tesoros no entrega la pobreza !

¿Cuál es el fin que persigue nuestro régimen financiero actual ?

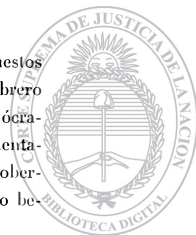
El mismo que informan todos los países civilizados del presente, que no es sino un reflejo del de los pueblos del pasado.

En Norte América, democrática en la letra y aristocrática en el hecho, en cuyo molde hemos vaciado nuestra organización política, para no ir más lejos, rige el sistema financiero protector del capitalismo y la indigencia. El 70 por ciento de la renta fiscal



está constituida por derechos de aduana é impuestos internos. Allí gobierna la plutocracia y el obrero vende el voto en el comicio. Los nobles ó aristócratas de Roma, que, en su mayoría, eran los potentados de la riqueza, procedían de igual manera, gobernaban para sí, y dictaban leyes en su exclusivo beneficio.

Nuestro régimen financiero, es en el orden político, en el que más se refleja sus perniciosos efectos, por que el fomenta la anormalidad cívica, por la disparidad del haber económico de los ciudadanos. ¿Quiénes ganan las elecciones en nuestro país? Los que disponen de dinero suficiente para comprar votos, los industriales que disponen de la voluntad de los obreros de sus fábricas ó talleres, ávidos de trabajo; los terratenientes en las campañas, los jefes de reparticiones públicas que distribuyen empleos y complacencias, y, finalmente, los gobernadores de provincia que se alzan con la suma del poder público, con las dóciles legislaturas que ellos regimentan, para darse la satisfacción de no dejarse ganar elecciones, por considerar que lo contrario sería una mengua para su autoridad augusta. Nuestro permanente estado político es, pues, el del dinero y el de la fuerza, ejercidos sobre la indigencia de un pueblo



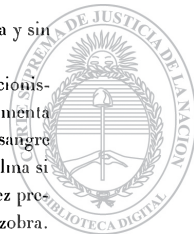
esquilmo por el tributo, sin voluntad propia y sin la conciencia de sus actos.

Es por esto que pugno en contra del proteccionismo aduanero, que favorece al capitalismo y fomenta la miseria de la falange obrera que agota la sangre de sus venas en la labor diaria y tortura su alma si contempla el porvenir que le espera en su vejez prematura ó después de sus dias de angustia y zozobra.

Es por ésto que combato la extrema distancia entre la felicidad y la desgracia, y deseo contribuir á la realización del ideal más sublime y humanitario de los pueblos : la nivelación del haber social, en cuanto es posible, entre las diversas capacidades que la forman.

Es por ésto que brego por el reinado de la igualdad relativa del tributo para la renta ordinaria, en armonía con lo que cada uno posee y con los beneficios que cada uno recibe de la cosapública.

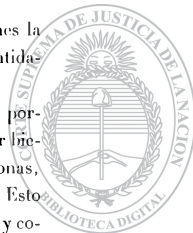
Si anhele esto, la equitativa distribución de los frutos del trabajo, libertando del tributo al obrero y transfiriendo su cuota al capital, es porque aspiro que todos los elementos de la sociedad seamos conservadores, amantes de la independencia personal de todos y de cada uno, de la libertad, del orden, del progreso.



Si anhelo ésto, es porque en tales condiciones la inmigración llegará á nuestros puertos en cantidades no sospechadas.

Si combato el proteccionismo aduanero, es porque éste es el medio menos justo para acumular bienes de fortuna en un reducido número de personas, con menoscabo de toda la población nacional. Esto es como tomar el dinero del bolsillo del pobre y colocarlo en las repletas cajas del rico : é importa reducir el sufragio universal á un limitado número de ciudadanos, y por consiguiente á entronizar con más vigor el gobierno aristocrático del dinero, en desmedro de los intereses del pueblo trabajador : es la parodia de las elecciones en la primitiva Roma, dividida en patricios y plebeyos : es la edad media, ó sea la época señorial y servaica : es el gobierno de castas, ó sea la aristocracia y la plebe de los tiempos modernos : es el predominio del dinero, de la fuerza y de las castas del presente siglo.

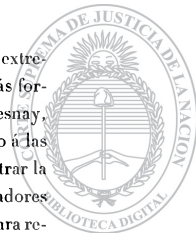
Si aspiro que estas ideas tengan la virtud de irradiarse en el pensamiento del legislador, es en homenaje á un principio de alta justicia, de humanidad y de progreso : porque inspirado en Servio Tulio, quien suprimió la capitación sobre los plebeyos y la transfirió á los ciudadanos de fortuna (218 años de



Roma)(15); en Platón, que conceptuaba los extremos de la riqueza y pobreza, como la peste más formidable de la república; en Vauban y Quesnay, quienes proclamaron la supresión del tributo a las clases proletarias; no hago otra cosa que mostrar la antorcha, levantada en alto por aquellos pensadores geniales y que á través de los siglos ilumina, para recordar á los que sufren que esta es la clave del bien-estar apetecido, y que estamos en la hora de las grandes reivindicaciones de la verdad institucional, sustentadas por los progresos de la razón pública.

Que las sociedades de la vieja Europa, amamantadas en la escuela de la monarquía romana, con la misma ó idéntica estructura política de ésta, con su profunda división de clases, con instituciones tradicionales y viejas prácticas observadas con profundo respeto, cuyos monarcas de origen divino (*sic*), cabeza principal de religiones propias, sostenidas con fanatismo: que sociedades con todos esos reatos y tradiciones de las que aún no pueden desprenderse continúen en el error, se explica: pero que nosotros, un país nuevo, constituido en la forma

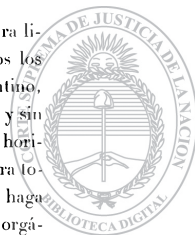
(15) GAMBIE, *Forquino el Soberbio lo estableció*, t. I, pág. 24.



republicana democrática, que auspicia y respira libertad como emblema de progreso para todos los hombres de la tierra que habiten el suelo argentino, independizado por el solo esfuerzo de sus hijos y sin atavismos orgánicos que la contraríen, con los horizontes dilatados de un gran territorio apto para todas las actividades : que nuestro país, repito, haga causa común con ideas vetustas de sociedades orgánicamente enfermas, que se solidarice con sus errores y sus tradiciones, no se explica, ni se justifica.

¿Cuál es, entonces, la razón de este extravío ?

La inexperiencia, la falta de originalidad en nuestras instituciones : todo lo hemos copiado del extranjero. Esta es una de las enfermedades de que adolecemos. Somos un país de adaptación, y de la peor especie, porque lo hacemos sin inventario, sin un prolijo examen : y en este afán de pretender ser tan cultos y adelantados como los países europeos, nos apropiamos de lo bueno, que han conquistado en el transcurso de siglos de paciente evolución, y nos dejamos influenciar también, por corrientes malsanas, idiosincráticas de medios y tendencias diversas á las nuestras. Y así, toda Europa se ha apropiado de las instituciones romanas, porque en toda ella la gran capital del mundo antiguo, plantó jalo-





nes que la recordarán en los siglos, y nosotros do-  
blamos la cerviz ante la Europa toda y llegamos  
hasta heredar por incidencia, un legado de la vieja  
Roma, que es óbice á nuestro verdadero progreso  
social. Así es que, en materia de tributos, vivimos  
en el presente de un pasado deplorable de un pue-  
blo que no es el nuestro, sin dignidad y sin concien-  
cia de su entidad moral, ajeno á los progresos igua-  
litarios de las sociedades contemporáneas.

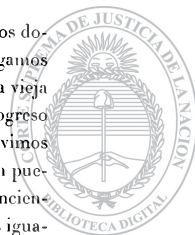
Para demostrar hasta dónde llega la protección  
del capitalismo y el encarecimiento de la vida en  
nuestro país, voy á mencionar un dato muy impor-  
tante, relacionado con la aduana.

¿ Por qué consumimos carne y pan caros, cuando  
somos la primera ó segunda nación exportadora del  
mundo en estos artículos y sus derivados ?

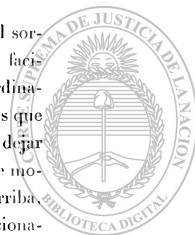
Sencillamente, porque la exportación de estos pro-  
ductos no paga derechos de aduana.

Como los centros de consumo son los que fijan el  
precio de los artículos, conforme á sus necesidades,  
nuestras carnes y nuestras harinas ó trigos tienen en  
el país el precio que el consumo de los mercados  
extranjeros les asigna, según su capacidad de compra.

Se justifica que estas industrias, en su incipencia,  
hayan sido favorecidas por la aduana y por cualquier



otra liberalidad ó estímulo, pero, hoy, con el sorprendente desarrollo alcanzado y cuando la facilidad aduanera á la exportación eleva extraordinariamente el precio de sus consumos en el país que los produce, no es índice de buen gobierno dejar subsistente la libre exportación. Pues, con este motivo, tendré que repetir lo que he dicho más arriba, que la protección de los poderes públicos nacionales debe dirigirse en primer término á la sociedad en general, al consumidor argentino, porque el gobierno, fuerza reguladora y ponderada por excelencia, se ha instituido para el bienestar de todos y no para el del menor número. Las industrias y toda actividad deben ser protegidas, pero sin dañar los intereses generales del país, sin lesionar los intereses de la inmensa mayoría. Los caminos, canales de navegación y de riego y otras obras complementarias, los ferrocarriles, puertos, telégrafos, teléfonos, bancos, la libre introducción de útiles de labranza y maquinarias, mientras no seamos poseedores de hulla y hierro, la defensa agrícola, etc., son estímulos suficientes para desenvolver las industrias propias de cada región, en forma duradera y estable, sin artificio y sin sacrificios para el consumidor nacional. Toda protección indebida ó anormal trae

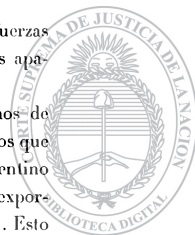


como consecuencia un desequilibrio en las fuerzas que actúan en su desarrollo, por más que las apariencias hagan ver lo contrario.

El consumidor argentino paga los derechos de aduana aplicados sobre los artículos extranjeros que entran á nuestro mercado, y el productor argentino en grande escala, así como el intermediario exportador no pagan cuota alguna por su extracción. Esto viene á comprobar nuestra tesis, que el Estado, en las condiciones actuales, esquilma á las clases laboriosas en beneficio exclusivo de los ricos : esto es la verdadera protección del capitalismo y del proletariado.

La libre exportación de nuestros productos, artículos de primera necesidad, favorece el consumo de los mercados extranjeros y engrosa las cuantiosas ganancias de los productores y exportadores, sin beneficio alguno para el consumidor nacional.

Si estableciéramos un derecho mínimo sobre la exportación de nuestras grandes industrias, nuestro consumo en estos productos se reduciría, lo menos en una cantidad igual al recargo para la exportación, lo cual vendría á mejorar las condiciones del obrero, á aumentar la renta del Estado para compensar en parte la disminución de los graváme-



nes de este gremio, propuesta al final del artículo 4°.

Por otra parte, el derecho aplicado á la exportación estaría compensado con la reducción del salario, en atención á la disminución, primero, y á la exención, más tarde, de los gravámenes á los consumos del obrero, y por la abundancia de brazos que afluiría al país como consecuencia de la baratura de la vida y el extenso campo de acción para el trabajo.

Se ha exagerado de tal manera el proteccionismo aduanero para las industrias nacionales de toda categoría, que hemos descuidado por completo á la clase verdaderamente productora : con su brazo, ella transforma las riquezas naturales en productos apropiados á los usos del hombre y ella misma, con los tributos que gravan sus salarios, aporta la mayor cantidad en el monto de los presupuestos públicos : en Europa se consume carne y pan relativamente baratos, y el que paca los ganados, siembra y cosecha las mieses lo paga bien caro. Esto quiere decir que no hemos puesto mientes en la ley de Gibbins, que dice : « una libra esterlina del comercio nacional es siempre más importante para la industria que dos libras esterlinas del comercio extranjero ».

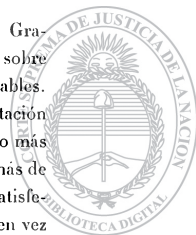


Esta es la mayor anomalía de nuestro país. Gradualmente, hemos aumentado los gravámenes sobre los consumos del obrero hasta hacerlos intolerables.

Veinte años atrás, los derechos á la importación se cobraban en moneda nacional y en el periodo más álgido de la depreciación del papel moneda (más de 300 " „ de oro), se ordenó el pago á oro. No satisfecho el gobierno con esta desacertada medida, en vez de reducir los presupuestos públicos á la mitad de su monto, sobre un ejército de empleados inútiles, estableció los impuestos internos en calidad de sacrificios pasajeros : posteriormente, varios cinco por ciento adicionales á los derechos de aduana, etc., etc. Así es que en estos últimos años hemos triplicado ó cuadruplicado los tributos de las clases laboriosas, sin mayores ventajas para el erario, pero sí para los industriales favorecidos, y para los que se han adueñado de los cargos públicos.

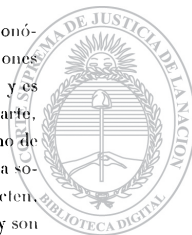
Hablando con propiedad, es de creer que el gobierno de las democracias no es conforme á la fórmula que á diario se repite : de todas y para todos, pues que en la práctica es : de los señores y para los señores ; es decir, que vivimos en pleno régimen feudal.

El progreso social contemporáneo está en vías de



realizar una transformación en el principismo económico. Desde hace algunas centurias, las naciones tienen como sujeto económico, las industrias, y es de este punto de vista que todas ó la mayor parte, han sujetado sus leyes fiscales al proteccionismo de las mismas, y hoy el sujeto, en economía, es la sociedad. Todas las medidas que en su favor se dicten, llevan el sello de la protección social ó nacional y son opuestas á este principio, todas aquellas que la contrarian. Pero, ¿qué quiere decir proteccionismo social? Bienestar de todos y de cada uno: igualdad relativa económica: presupuestos públicos á base de los frutos de la riqueza efectiva: liberación de las cargas fiscales al obrero: consumos baratos á la clase proletaria.

Los defensores del proteccionismo aduanero podrán forzar su argumentación, ofreciendo á la crítica los enormes progresos alcanzados por nuestro país, en todos los órdenes de su actividad en estos últimos años, y los que nos declaramos defensores del bienestar de las clases laboriosas, oponemos á ello este argumento, ¿el aumento inmigratorio, la red ferroviaria, la importación y exportación, la actividad y la cultura generales, no hubieran sido mucho mayores con consumos baratos para el obrero?



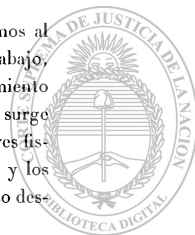
Nuestros actuales progresos no los debemos al encarecimiento de la vida para el hombre de trabajo, porque este antecedente, es factor de estancamiento y despoblación. Los debemos á la riqueza que surge casi espontánea de la tierra, no obstante las leyes fiscales que entorpecen los esfuerzos humanos y los desvian del recto camino de su natural y lógico desenvolvimiento.

Por las razones expuestas, se ve claramente que la exportación de nuestros productos debe ser gravada con un derecho mínimo, consecuentemente con la tesis general desarrollada.

*Impuesto sobre la renta, sin incidencia sobre los consumos del gremio obrero*, es otra de las fuentes de renta que propongo, en substitución « de las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente á la población imponga el Congreso general ».

Con la exposición que antecede, está demostrada la razón del nuevo impuesto : la cual no es otra, que la liberación de las cargas fiscales que pesan sobre el obrero y su transferencia á la riqueza efectiva particular (16).

(16) Zeballos, en la *Revista de derecho, historia y letras*, t. XXIV, pág. 373 á 84, ha analizado esta cuestión.



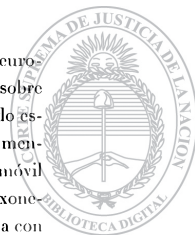
El impuesto sobre la renta en los estados europeos no tiene la condición de la no incidencia sobre el consumo del gremio obrero, porque él ha sido establecido desde su origen, al solo objeto de aumentar la renta fiscal: no ha sido impuesto por el móvil que guía mi pensamiento, consistente en la exoneración del tributo á las clases que viven al día con los frutos que rinde el esfuerzo diario de su brazo.

Como el ramo de los consumos del obrero en que más se distingue la incidencia, es el del comercio, las utilidades que percibiera el comerciante de los artículos de uso común que serían especificados, no serían gravados con este impuesto.

Para la efectividad de esta exención, sería necesario circunscribir el negocio á los artículos y clases que se detallarían, y cuyos precios netos serían publicados semanal ó mensualmente, y distribuidos con profusión por la oficina de trabajo, sobre los cuales se fijaría un máximo de ganancia del vendedor, en razón de la exoneración dicha.

Es posible que esta condición permitirá la multiplicación de las casas de este género, pero ésto en cambio de ser un mal, sería un bien, porque la competencia sería benéfica para el menesteroso.

Si entre las modificaciones del artículo en cues-





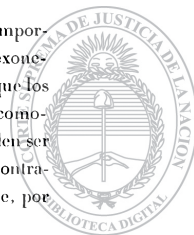
tión no entra la supresión de los derechos de importación, no obstante el espíritu dominante de exonerar de él los artículos de uso común, es porque los productos extranjeros para uso de personas acomodadas ó que poseen bienes de fortuna, no pueden ser comprendidos en dicha exoneración. Por el contrario, deben ser gravados con un derecho doble, por lo menos, del que tienen actualmente.

¿No es, pues, un contrasentido, que los tejidos de algodón que usa el pobre tengan la misma tasa de 40 por ciento *ad valorem*, que los de hilo y seda que usan los ricos?

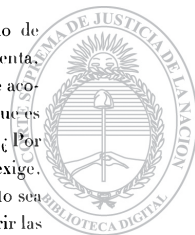
Y lo que se dice de éstos, puede decirse de los demás artículos importados.

¿Qué es para una persona acomodada el pago de 400 pesos por el derecho de introducir un milord que la cuesta la misma suma, cuando hoy paga 200; ó que pague 800 pesos en vez de 400 por un automóvil cuyo costo es de 4000 pesos?

Estos y otros aumentos puede sufragar el capitalista sin que afecte mayormente su situación económica, pero al pobre no puede exigírsele la mitad de su salario por el derecho de vida, y no otra cosa representa el gravamen que diariamente satisface, agregado al precio neto de los artículos que consume.



Así es que mi propósito, al dejar el derecho de aduana sobre la importación como fuente de renta, es de gravar los artículos que consume la gente acomodada que dispone de bienes de fortuna, que es rentista, ó que goza de bienestar económico. ¿Por qué? Porque la democracia contemporánea exige, para su perfecto funcionamiento, que el tributo sea pagado por el que tiene cómo hacerlo, sin herir las fuentes de la riqueza, porque los presupuestos no deben costearse con la pobreza de los habitantes, al uso de la Roma antigua, señorial y esclava.



Otra de las reformas proyectadas es la que se refiere á telégrafos, ferrocarriles, canales artificiales de navegación y otros servicios públicos.

Esto se explica por sí mismo. Pues si la constitución del 53 no contiene estos índices de renta ó atributos de progreso general, es porque en aquella fecha eran desconocidos para la nueva nación, y justo es que hoy los hagamos figurar para legalizar su existencia.

Como complemento de la tesis que he dilucidado me considero en el deber de esbozar cuando menos, una importante cuestión íntimamente relacionada con las modificaciones fundamentales que he ex-

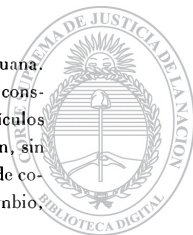
puesto, y que se refiere á los derechos de aduana.

No podemos iniciar la reducción metódica y constante de los derechos de importación sobre artículos de uso común hasta su completa exoneración, sin que celebremos nuevos tratados diferenciales de comercio con las naciones de nuestro intercambio, denunciando previamente los existentes.

Como está demostrado, dentro de este plan de gobierno existe un pensamiento que modifica fundamentalmente las teorías hasta ahora en boga : libre cambio y proteccionismo aduanero, para ser reemplazados por algo más grande, más duradero, más humanitario : el bienestar de todos y de cada uno, la felicidad social. Es menester humanizar las leyes y hacer gobierno de verdad, levantando las clases menesterosas de la postración en que se encuentran, para que marchemos todos por el camino del orden y de la paz que garantiza la labor fecunda, para que tengamos verdaderos ciudadanos, conscientes de sus deberes y derechos.

El libre cambio apareció en Inglaterra en contraposición al proteccionismo aduanero, en época en que no se tenía el claro concepto de las sociedades, tal cual se las considera en el presente.

El libre cambio, en la verdadera acepción de la pa-

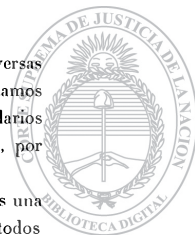


labra no puede existir en país alguno, por diversas razones de orden económico que no necesitamos analizar, luego, no podemos declararnos partidarios de esa escuela, ni tampoco del proteccionismo, por las razones que hemos expuesto.

La escuela económica de las democracias es una sola, como lo hemos dicho ya : el gobierno de todos y para todos. Los viejos sistemas : proteccionismo aduanero y libre cambio, deben ser tales, para cimentar y fortalecer el bienestar de todos y de cada uno, no el de un reducido número de personas : el equilibrio industrial de la nación tiene sus resortes propios, naturales, para su arraigo y prosperidad, y para ello no debe utilizarse la aduana como instrumento que gradúa el flujo y reflujo de su desarrollo, porque ese no es su rol.

Dentro de estas ideas debe orientarse el criterio gubernativo para la denuncia de los tratados que, con la cláusula obligada de « la nación más favorecida », nos impide expandir nuestra fuerza productora especializándonos con los países que más convenga á nuestros intereses, ya que un principio de bienestar general del nuestro nos obliga á facilitar la entrada de artículos de procedencia extranjera.

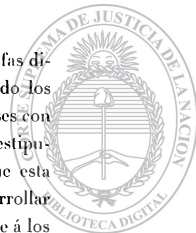
Con los actuales tratados de comercio no pode-



mos subscribir ningún otro que estatuya tarifas diferenciales, sistema que á Alemania le ha dado los mejores resultados, porque con todos los países con los que mantenemos activo comercio, rige la estipulación de la nación más favorecida. Así es que esta condición es una traba que nos impide desarrollar las energías de la economía nacional, conforme á los distintos ciclos de nuestros progresos : y, por otra parte, dados los términos de los actuales tratados, ó sea el periodo de su validez, estamos en condiciones de denunciarlos.

Lo curioso es que la cláusula de la nación más favorecida en los tratados de comercio, inventada por Inglaterra con toda malicia, ha llegado á ser, en cierto modo un principio de derecho internacional, cuyas bondades no se discute.

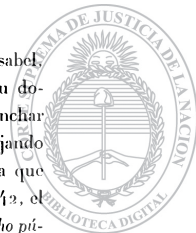
Cuando declinaba el estado guerrero de Europa en la época moderna, humanizándose las tendencias internacionales, se acentuaba el carácter de la vida industrial, se activaba el comercio y se desarrollaba un marcado espíritu de empresa y de dominio en las Indias. El reino de Portugal era dueño de casi toda la costa occidental de África y de una gran parte de América del Sud, de donde sacaba ingentes riquezas.



Inglaterra, con la clara visión predicha por Isabel, de que su riqueza y poderío le vendría por su dominio en los mares, consideró necesario ensanchar el radio de acción de su espíritu mercantil y fijando su atención en Portugal, fué con esta potencia que celebró su primer tratado de comercio, en 1642, el 29 de enero, según el abate de Mably (*Derecho público de Europa*, t. II, pág. 489), ó el 29 de noviembre según otros, en el cual se estipuló, por vez primera también, la cláusula de *la nación más favorecida*, aplicable tan sólo en beneficio de la nación más interesada en su celebración, Inglaterra. Merced á este tratado, Inglaterra extendió su comercio en Portugal y sus grandes dominios, de tal manera que después de pocos años este reino parecía una colonia inglesa. Mientras Portugal mandaba un buque á Inglaterra, esta nación enviaba cien ó más á la primera. ¿Cuál era el beneficio económico que Portugal obtenía por este tratado?

Ninguno, á no ser la ostentación de su amistad con Inglaterra.

Inglaterra concluyó también un tratado con Dinamarca el 13 de febrero de 1660, considerándose reciprocamente como las naciones más amigas, y ¿quién fué la más beneficiada con sus estipulacio-

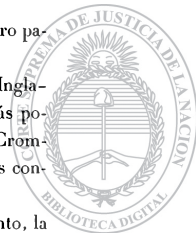


nes? Inglaterra, que necesitaba el fácil y seguro pasaje del Sund, que con él lo garantizó.

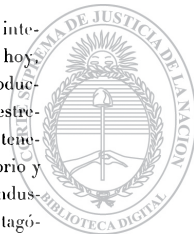
No obstante las ventajas adquiridas por Inglaterra con estos y otros tratados con las demás potencias, conocida es el *acta de navegación* de Cromwell (1651), llena de egoísmos y restricciones contra las naciones signatarias.

Éste es el origen de la cláusula que comento, la que en la práctica es letra muerta cuando hay el propósito de falsearla, como sucede á menudo. Brasil favorece las harinas de Estados Unidos (N. A.); Inglaterra cierra sus puertas al ganado argentino declarándolo apestado de fiebre aftosa cuando cree que conviene á sus intereses; Alemania dificulta con cualquier pretexto la entrada del tanino argentino ó de la madera que lo contiene, no obstante constar en los respectivos tratados con estos estados que debemos ser tratados como *la nación más favorecida*.

Que en épocas en que necesitábamos la amistad de potencias de primer orden para garantizar nuestra independencia constantemente amenazada por enemigos de dentro y fuera del país, cuando hasta las harinas eran artículos de importación — Chile lo sabe — se explica que hayamos firmado esos tratados, que en los primeros años de nuestra eman-



cipación y posteriormente sirvieron mejor los intereses económicos del extranjero ; pero, que hoy, en las condiciones de nuestra potencialidad productora, cuando las relaciones internacionales se estrechan cada día, con mayor decisión : cuando tenemos asegurada la paz dentro y fuera del territorio y ensanchado el horizonte de nuestras grandes industrias, á la par que Norte América, nuestra antagonica, disminuye su exportación de iguales productos de manera alarmante, es un contrasentido que mantengamos esos tratados, cual si fueran una panacea de la economía nacional y de nuestro intercambio internacional.



No debo terminar esta parte de mi exposición, sin hacer mención de un hecho que se relaciona con la familia obrera, á la cual procuro beneficiarla con las reformas que proyecto en este artículo.

El obrero pide aumento de jornal y disminución de horas de trabajo, como alivio de los males que sufre, ó sea de su economía maltrecha, y el Estado se aboca el asunto y fija horas de trabajo, días de descanso, etc., en abierta oposición al artículo 14 de la Constitución que acuerda el derecho de trabajo y el ejercicio de toda industria lícita. Justo es



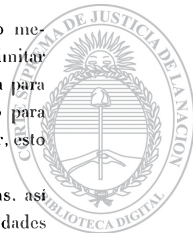
que tales disposiciones rijan para el obrero menor de edad, pero no que ellas alcancen á limitar el ejercicio de la energía física del adulto, apta para producir lo que el individuo estima necesario para satisfacer las apremiantes necesidades del hogar, esto es atentatorio hasta contra el derecho de vida.

Cuán diversa es la ponderación de energías, así como de las necesidades que apremian á las unidades laboradoras de la riqueza nacional. Mientras unos satisfacen lo que han menester con una ó dos horas de trabajo, otros no estarán satisfechos con menos de seis, de ocho ó de diez, y cada una de estas aspiraciones se mide por la fuerza de que se dispone.

¿ La razón de las limitaciones es la higiene social ?

Conozco centenares de hombres que han trabajado hasta dieciseis horas diarias al rayo del sol, durante años, y su naturaleza no ha decaído y sus necesidades han sido satisfechas : yo tengo la gloria de contarme entre éstos.

Primero que todo es vivir, y nadie más que uno mismo sabe lo que le hace falta y el tiempo en que puede ejercitar su actividad para satisfacer sus necesidades. ¿ Quién no aspira reposo, el menor desgaste físico, la mayor suma de felicidad con el menor esfuerzo ?

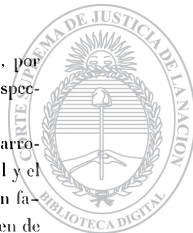


Todos marchamos en pos del mismo ideal, por distintos caminos y medios, conforme á las respectivas capacidades.

La libertad, es el ambiente en que deben desarrollarse las actividades que no ofendan la moral y el orden público, para que éstas sean eficientes en favor del individuo y del Estado. Y en este orden de ideas, hasta las sociedades gremiales importan perjuicios á los asociados, porque no todos se encuentran en igualdad de condiciones por sus facultades de trabajo como por sus necesidades.

El gobierno se ha dado cuenta, ó no se ha dado, de que el gremio obrero, mal inspirado, no gestiona la exoneración de las cargas fiscales : es decir, que no va contra la verdadera causa de su pobreza pecuniaria, contra el fisco, y que se dirige por un camino errado, en contra del patrón ó capitalista, con el cual está constantemente en pugna y sin el cual no puede vivir, y el gobierno, repito, sigue esta corriente, aparentando estar de parte del obrero y esquilmandolo al mismo tiempo con tributos, en forma que iguala su estado precario con la bolsa repleta del rico.

El espíritu de imitación que nos distingue como característica de pueblo nuevo, nos especializa tam-



bién en la formación de gremios obreros por la acción privada y en la intervención abusiva del Estado, imponiendo reglamentos de trabajo que impiden ó dificultan la mayor expansión industrial y encarecen los productos elaborados.

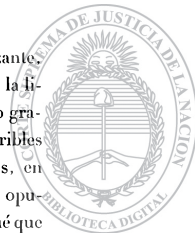
Cuando la Europa, conmovida por la aplicación de la mecánica, se iniciaba de lleno en el régimen de la industria fabril y en toda ella, la explotación de las minas de hulla, fierro y otros metales tomó un desarrollo extraordinario, se iniciaron también las asociaciones gremiales para hacer frente á la inicua explotación del capitalista que lo tenía reducido al obrero á la condición más miserable. Éste aniquilaba sus fuerzas en la mina ó en la usina insalubres que hoy no se conocen, ó en los campos, sin más voluntad que la del amo, con alimentación insuficiente y sin abrigo, en calidad de esclavos disimulados ó de bestias de carga, para satisfacer la avaricia de los señores que explotaban su pobreza; el mísero salario (5 chelines por semana en Inglaterra, 1817) y el precio exorbitante de los consumos, entre los que el trigo era artículo de lujo (126 chelines por *quarter*), hizo imposible la vida y propendió á un aumento considerable de la criminalidad: la mina y la fábrica, donde afluían hombres y mujeres harapientos



de todas las edades, en promiscuidad vergonzante, eran focos de corrupción, las restricciones de la libertad civil llegaron en esa época á un tan alto grado, que los meetings eran aplacados con horribles carnicerías humanas. En este estado de cosas, en que, en repugnante consorcio se ostentaba la opulencia extrema, al lado de la extrema miseria, fué que aparecieron Marx y Engel como verdaderos apóstoles de la cruzada que debía redimirlos de tan dura esclavitud.

El régimen fabril de aquella etapa de la civilización europea requirió leyes y reglamentos de trabajo para higienizar la mina y las fábricas y mejorar las condiciones del obrero, humanizando los procedimientos en el ejercicio de su fuerza física. Pero nosotros no hemos vivido esa época, porque, por las condiciones de nuestro suelo y de nuestro clima, hemos nacido para cubrir la pampa virgen con nuestros ganados, ó para transformarla con el arado en fuente fecunda de productos alimenticios que excediendo los cálculos más optimistas triunfan en la competencia y satisfacen el consumo de allende el océano.

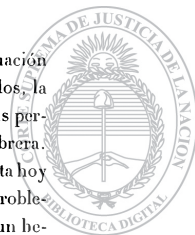
La sociedad gremial europea, fortalecida por sus esclarecidos defensores, tuvo su época, como su ra-



zón de ser, y debió dar por terminado su actuación para abarcar en el gran escenario de los pueblos, la campaña libertadora del tributo que es la más perniciosa en contra del bienestar de la familia obrera. Merced á los progresos políticos alcanzados hasta hoy en todas las naciones es posible afrontar el problema. La civilización y cultura de las masas es un hecho incontrovertible : las fábricas y talleres son higiénicos y las disposiciones que los reglamentan defienden la impericia y los daños que puedan causar al operario : la ciencia, en su investigación infatigable, ha descubierto la luz eléctrica que inunda con sus claridades las galerías de la mina y transforma en una temperatura apetecible el aire que se respira : y como complemento, la libertad, el dón más grande y apreciable de la entidad humana, es ejercitado en todas las manifestaciones de la vida.

Que el obrero vaya en contra del capital, ó éste en contra de aquél, en los dos casos se acomete la ruina de los propios intereses, en procura de agotar la fuente que reciprocamente los alimenta.

El capital y el trabajo son dos fuerzas inseparables y las más ponderadas en la economía de las naciones, y no sólo pierden su tiempo los que instigan á las masas á hacer mayores exigencias á los jefes

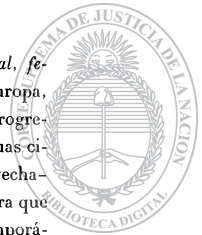


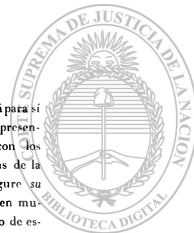
industriales ó dueños de talleres ó fábricas, sino que las inducen mal y dañan considerablemente los intereses económicos del país. El mal del obrero está en el excesivo tributo que sufraga para costear los presupuestos públicos fabulosos, y contra él es necesario ir de frente, y habremos echado así los cimientos del verdadero bienestar económico del país.

El portentoso crecimiento de nuestras riquezas en estos últimos años, merced á la energía de capitales y brazos empeñados con encomiable tezon y á las riquezas naturales de este suelo pródigo, no es suficiente para que nos demos por satisfechos de la labor directriz de la vida nacional. No. Necesitamos algo más. Preciso es que tengamos el verdadero sentimiento de la nacionalidad, de los destinos de esta patria grande, contribuyendo también á sus progresos morales: hagamos ver á Europa que nuestros adelantos no son solamente económicos, sino que marchamos también á la vanguardia de los progresos institucionales del mundo, y que, á la par de los productos que llevamos á esos lejanos mercados, irradiamos la luz de nuestro pensamiento que abaja en favor de un nuevo estado social que armoniza todas las voluntades en un solo y único propósito.



sintetizado en esta frase : *verdad institucional, felicidad social*. Si. Devolvamos á la vieja Europa, madre pródiga de tantos y tan marcados progresos conquistados palmo á palmo á las antiguas civilizaciones en el transcurso de siglos, aprovechados en un día y sin esfuerzo por nosotros, para que grabe en los anales del progreso social contemporáneo el nombre del pueblo argentino.





« Art. 5°. — Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución nacional, y que asegure su *administración de justicia*, su régimen municipal y *la instrucción primaria*. Bajo de estas condiciones el Gobierno federal garantiza á cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones. »

Art. 5°. — Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución nacional, y que asegure su régimen municipal *electivo*. Bajo de estas condiciones el Gobierno federal garantiza á cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones.

Las reformas que propongo á este artículo son dos : supresión de la administración de justicia y de la educación primaria, á objeto de que estas ramas



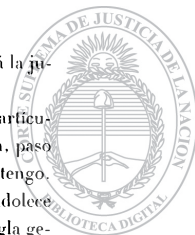
de las administraciones provinciales, pasen á la jurisdicción del Gobierno general.

La razón de la primera está explicada en el artículo 94 de esta reforma : y en cuanto á la segunda, paso á dar las que militan en pro de la tesis que sostengo.

La educación primaria en las provincias adolece de defectos capitales. El profesorado, por regla general, no es idóneo. La escasa y tardía remuneración, agregadas á que los nombramientos responden más á la afección partidista hacia el primer mandatario que á la suficiencia profesional, hace que la dirección de la niñez no satisfaga eficientemente el mandato constitucional. Si en las capitales de provincia hay algunos profesores competentes, ajenos á la política mezquina de los gobernantes, en las campañas son, por regla general, agentes políticos del mandatario.

La educación primaria en las provincias falla por su base, desde que los directamente encargados de dirigirla no poseen las condiciones necesarias, ni la independencia requerida para emitir sus ideas libremente, conforme á su saber y conciencia.

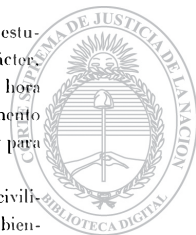
Hemos olvidado ó ignoramos que las aulas donde se educa el niño, son cátedras de espíritu público, donde á la vez que se le inicia en el conocimiento de

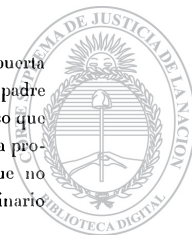


los signos que preparan al adolescente para el estudio de las ciencias, artes y letras, se forma el carácter, se modela la masa del perfecto ciudadano de la hora venidera, para que sea lo que debe ser, un elemento ponderado de la sociedad, útil para sí mismo y para los demás.

Mientras que en países monárquicos, más civilizados que el nuestro, se educa al niño en un ambiente de perfecta libertad, con el propósito de formar caracteres y de bastarse á sí mismo, nosotros hacemos todo lo contrario. Se suprimió la antigua *palmeta* y se la substituyó por algo peor: y á propósito, recuerdo un hecho muy curioso en una escuela provincial de Santiago del Estero, que paso á relatar.

Un niño de carácter locuaz, que no prestó la suficiente atención á las explicaciones del profesor, se hizo pasible de la siguiente penitencia: debía escribir en una hoja de papel: «yo soy un niño incorregible», y una vez firmada, presentarla personalmente al director del establecimiento. Este niño que había oído en la primera escuela, la del hogar, que era preferible dejarse cortar la mano antes de subscribir con ella un documento infamante contra sí mismo, se negó á hacerlo, alegando este consejo paterno, y como la señorita profesora insistiera con





ademán de obligarlo por la fuerza, tomó la puerta por suya y abandonó la escuela. Presentóse el padre del niño al consejo escolar, en queja, y lo único que consiguió fué la contestación de que la señorita profesora había procedido correctamente porque no hizo otra cosa que aplicar un precepto disciplinario establecido por el consejo.

¿Dónde va una sociedad con regímenes escolares de esta índole, propios de pueblos esclavos, si se deprime el nivel moral de la masa humana en el momento de su mayor ductilidad, en vez de levantarla, estimulando la altivez y el carácter?

Da la medida de lo mal atendido que se encuentra el profesorado en las provincias, el telegrama del 10 de julio del año próximo pasado, inserto en *La Prensa* del día 11, que dice : « Á los maestros de las escuelas provinciales se les debe los sueldos de mayo y junio, á pesar de que hace más de veinte días que se recibió del Concejo Nacional la suma de pesos 95.000, ingresados á la tesorería provincial. Sin embargo, el personal de *vichadores* (1), fué pagado el primero de mes. »

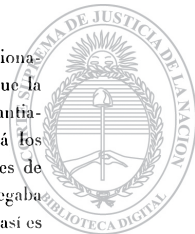
Esto no es una novedad en las provincias, porque

(1) Espiones con sueldos elevados, que siguen la pista á los opositores políticos.

se ve á menudo que la policía y los gastos eleccionarios son atendidos con mayor puntualidad que la enseñanza primaria. En años anteriores, en Santiago del Estero, habia la práctica de abonar á los maestros de escuela con libramientos (órdenes de pago), ó bonos, cuya cotización en plaza llegaba hasta un 20 por ciento de su valor nominal: así es que, un maestro de escuela cuyo sueldo mensual era de 100 pesos, percibía 20. También ha acontecido lo siguiente. Como la subvención nacional á la instrucción primaria de la provincia era de un 50 por ciento, y el gobernante se habia propuesto hacer este servicio con sólo el tesoro nacional, por todos los alquileres y sueldos se hacia firmar recibos por el doble de las sumas percibidas, y no obstante esto, el pago se hacia en libramientos, cotizables como se ha dicho. De manera que un sueldo nominal de cien pesos, correspondia á un pago de cincuenta, el que quedaba reducido en definitiva á diez.

Los defectos apuntados son comunes á la mayor parte de las provincias, y á todas ellas en lo relativo á la intervención política de los gobernantes en la designación del personal de educación.

Aparte de estos graves inconvenientes, existe el de la anarquía de los planes de enseñanza.



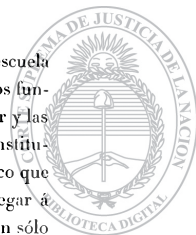
Se ha dicho con sobrada razón, que la escuela primaria es la continuación de los rudimentos fundamentales del hogar para formar el carácter y las tendencias del niño, y prepararlo para que constituya con los demás un solo conjunto armónico que identifique el alma nacional. Pero, para llegar a este anhelo público, es necesario que haya un sólo régimen uniforme y metódico en la instrucción general, desde la escuela primaria, impuesto por una sola dirección inteligente.

No hay edificio mal construido, cuando la base es sólida y adaptada al plan que el arquitecto se ha propuesto realizar.

Necesitamos formar caracteres y una alma nacional, y esto es antes que todo, materia de instrucción pública, y su base es la escuela, de manera que los distintos ciclos sean eslabones de una sola cadena confeccionada por un solo artífice.

La escuela y la instrucción en general debe estar al cuidado y dirección del gobierno federal, pues que, en la uniformidad del gran plan, están los beneficios que el país ha de cosechar en lo futuro.

No puede argüirse en contrario, la razón del aumento de gastos para la nación porque éste es insignificante : y si así no fuere, esto no sería motivo sufi-



ciente para privarnos de los frutos de una medida salvadora, que augura progresos insospechables.

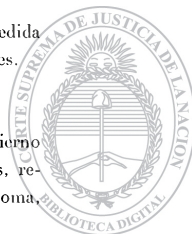
¿Que se altera la forma federal de gobierno?

Absolutamente, no.

Si los estados-provincias no cedieran al gobierno general, parte de sus atribuciones ó facultades, reservándose las más necesarias para su vida autónoma, no habría federación.

Propiamente hablando, no hay un limite fijo entre las delegaciones del poder, á objeto de constituir la nacionalidad y el reservado para la vida autónoma de las provincias, pero se advierte desde luego, que sirviendo de base al gobierno general «la forma representativa republicana federal», y debiendo cada provincia dictar para si una constitución bajo el mismo sistema representativo republicano de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la constitución nacional, que lo esencial para la vida orgánica provincial es todo aquello que concierne al régimen eleccionario para constituir sus autoridades, siendo entendido que todos los demás atributos del poder pueden ser materia de delegación.

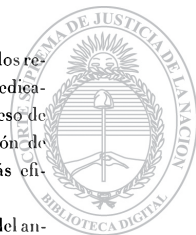
¿En qué le daña á la autonomía provincial, la delegación al gobierno general de dirigir la instrucción primaria y costearla con fondos del tesoro nacional?



En vez de afectarla, la beneficia, por cuanto los recursos que hoy invierte en ella, pueden ser dedicados á muchísimas obras que requiere el progreso de las provincias, ó puede permitir la disminución de gravámenes impositivos para proveer con más eficiencia las energías que elaboran la riqueza.

El régimen municipal, es asunto distinto del anterior, por cuanto esto significa gobierno del municipio, y cuando se dice gobierno, se dice también pueblo, se dice elección, representación.

He agregado la palabra electivo á régimen municipal, para significar que los cargos directivos del gobierno municipal, deben ser hechos por elección directa del pueblo ó habitantes de la comuna. La causa que me induce á esta reforma, es el hecho de que en estos últimos años hemos retrogradado, por que el poder ejecutivo, tanto en el orden nacional como en el provincial, se ha apropiado facultades propias de la voluntad directa del pueblo del municipio y ha regimentado las corporaciones comunales por la voluntad exclusiva del mandatario, por lo menos en lo tocante al intendente ó gobernador. Anteriormente á estos hechos, el gobierno local, higiénico y edilicio, ó de salud y embellecimiento, era materia de elección de los interesados, y es hoy de



imposición directa del magistrado omnipotente, impropia de pueblos libres, en los que la representación popular es la base de todo gobierno.

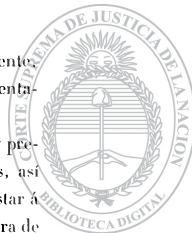
Véase si es necesario estatuir con claridad y precisión las declaraciones, derechos y garantías, así como las facultades de los mandatarios, para estar á salvo de los abusos y desmanes, que á la sombra de una falta involuntaria ó de una torcida interpretación, se cometen.

Pero es el caso de que en las provincias no llama tanto la atención este retroceso en la práctica de la vida comunal, como en la capital de la república, por razones que no necesito explicar.

¿Qué es lo que la presidencia se propone al arrancar el derecho electivo del intendente, al pueblo de esta capital?

Parece que hubiese la consigna de extremar la centralización del poder, con el fin de imponer más fácilmente la suprema autoridad: y téngase presente que, cuando esta centralización es mayor, mayor es también la noción de irresponsabilidad de quien la ejecuta.

La renuncia del intendente Alvear y su causa, hecho muy reciente, denuncia hasta qué punto la autoridad del presidente pesa en esta rama del gobier-



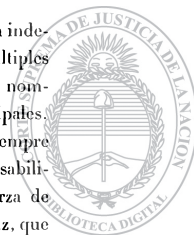


no, cuya acción debe desenvolverse con entera independencia del ejecutivo nacional que tiene múltiples funciones más altas que las que se refieren al nombramiento de empleados subalternos municipales.

Los gobernadores de provincia, ávidos siempre de mayor suma de autoridad y con la irresponsabilidad del ignorante ensoberbecido con la fuerza de que disponen, no concibieron otra idea más feliz, que la de seguir el ejemplo del presidente, y hace tiempo que ellos también iniciaron en ese sentido la revolución de arriba al pueblo de la comuna, completando así la obra, de que en el país no debe haber otra suprema voluntad electora que la del presidente y la de los gobernadores.

Así es que la palabra *electivo*, agregada al artículo, significa que las autoridades, ó cuerpo municipal, comprendido el intendente, deben ser designados por elección popular: y desde que esto se estatuye para las provincias, es lógico que en la capital de la república debe procederse de igual manera.

Acostumbrados como estamos á los antecedentes de otros países, debo citar las constituciones monárquicas de España de 1812, de Portugal de 1826 y de Brasil de 1824, por pertenecerá una época menos ade-

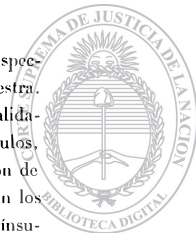


lantada que la de hoy, y no obstante, á este respecto, son más liberales y democráticos que la nuestra.

La parte que á los ayuntamientos ó municipalidades se refiere la primera, consta de catorce artículos, que son la expresión de la más franca resolución de establecer el perfecto gobierno de sí mismo en los municipios de las ciudades y pueblos de la península y de sus colonias. Todas las autoridades de los ayuntamientos deben ser nombradas por *elección directa* de los respectivos pueblos, ninguno puede ser *reelecto* sino después de un periodo de dos años y prohíbe á los empleados del rey pertenecer al consejo (art. 309 al 323).

Portugal y Brasil tienen la misma disposición entre sí, sin discrepancia ninguna en la forma y en el fondo de los artículos, y en ellos está resuelto que los ayuntamientos serán *electivos*, debiendo ser presidente, el que obtuviese mayor número de votos, siendo de su competencia el gobierno económico y municipal de las ciudades y villas.

Esto quiere decir, lo que ya he dicho en otra parte de este trabajo, que nos hemos apropiado de las monarquías todo lo que era inconveniente para la república, y hemos despreciado lo bueno y útil de aquéllas.





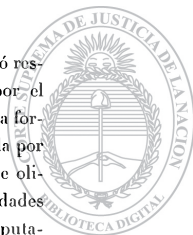


« Art. 6°. — El Gobierno federal interviene en el territorio de las provincias para garantizar la forma republicana de gobierno, ó repeler invasiones exteriores, y á requisición de sus autoridades constituidas, *para sostenerlas ó restablecerlas, si hubiesen sido depuestas por la sedición ó por la invasión de otra provincia* ».

Art. 6°. — El Gobierno federal interviene en el territorio de las provincias para garantizar la forma republicana de gobierno, ó repeler invasiones exteriores y á requisición de sus autoridades constituidas, *ó cuando un grave acontecimiento imponga esta medida.*

La supresión que hago á este artículo es perfectamente aplicable. Desde que al principio dice, que la intervención es á objeto de garantizar la forma republicana de gobierno, se ha dicho todo, en cuanto á las cuestiones de orden interno : y por consiguiente,

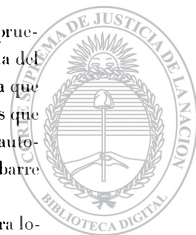
no puede ser una necesidad el sostenimiento ó restablecimiento de autoridades entronizadas por el abuso, cual lo establece la parte suprimida. La forma republicana de gobierno puede estar alterada por abusos del poder ó por el entronizamiento de oligarquías, y en tal caso, depuestas las autoridades por la sedición y comprobados los hechos imputados, la intervención no iría á reponer y sostener las autoridades, sino á establecer un nuevo orden de cosas, en armonía con los intereses bien entendidos del pueblo y las fundamentales disposiciones constitucionales, y así se ha procedido en muchísimos casos. La intervención á Santiago en 1884, declaró nulos los poderes legalmente constituidos, y restableció, según la manera de entender del interventor doctor Chavarría, la forma republicana de gobierno, de acuerdo con las instrucciones del entonces presidente, general Julio Argentino Roca. Refiriéndome á las intervenciones de esta misma provincia, debo citar la de 1892, á los efectos de los artículos 5° y 6° de la Constitución nacional », y sin ningún estudio previo, el interventor doctor Eduardo Costa, barrió con los representantes de los tres poderes y los organizó de nuevo, debiendo notarse el hecho curioso de que el congreso, que más tarde aprueba los procederes del interventor



en todas sus partes, es el mismo (el senado) que aprueba la elección de senador hecha en la persona del gobernador derrocado, por la misma legislatura que el interventor la había declarado ilegal. Así es que en este caso también, en vez de restablecer las autoridades constituidas depuestas por la sedición, barre con ellas.

La de 1895, á objeto de sostener la legislatura local y garantizar el cumplimiento de sus resoluciones, no tuvo otro fin que el de impedir que el gobernador derrocado por la sedición asumiera de nuevo el mando y la intervención terminó con la hechura de un nuevo gobernador, impuesto por el general Roca.

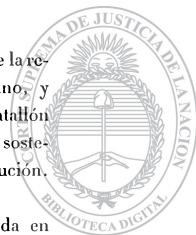
En 1898, se intervino también esta provincia « á los efectos del artículo 5° y primera parte del 6° de la Constitución nacional », con motivo del asesinato del diputado Garcia, por fuerzas policiales. En este caso las autoridades no fueron derrocadas por la sedición, ni por invasión de otra provincia, ni ninguna de ellas requirió la intervención, pero se consideró subvertida la forma republicana de gobierno por el hecho de ser la fuerza policial la ejecutora del crimen. Por consiguiente, la intervención declaró cesantes las autoridades constituidas y estableció otras



nuevas. Finalmente, en 1908, el presidente de la república intervino de hecho, sin decreto alguno, y telegráficamente, por intermedio del jefe del batallón destacado en aquella capital para restablecer y sostener al gobernador que depuesto por la revolución, simuló, con *extrema habilidad, ser cadáver*.

La provincia de Tucumán fué intervenida en 1887, « á objeto de restablecer las autoridades legalmente constituidas, de conformidad con los artículos 5° y 6° de la Constitución nacional », pero como la revolución se hizo por orden del presidente de la república doctor Juárez Celman, con jefes y oficiales del 4 de línea y empleados del ferrocarril de Córdoba: la intervención, en vez de reponer al gobernador depuesto, señor Juan Posse, quien resistió heroicamente los desbordes de la fuerza de los revolucionarios, consumó su separación del cargo, é hizo elegir un reemplazante.

En 1893 fué intervenida nuevamente esta provincia, « á objeto de efectuar la elección de un nuevo colegio electoral que practique la elección de gobernador », porque el gobernador derrocado y el electo para el periodo venidero no respondían á la política del partido nacional dirigente. Impidiendo así que acabara el primero y que empezara el segundo, feliz-

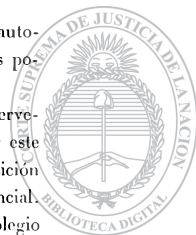


mente para Tucumán, el interventor arrazó las autoridades existentes y reorganizó de nuevo los poderes.

En 1905 y á solicitud de la legislatura fué intervenida esta provincia, «á objeto de reorganizar este poder y el colegio electoral, porque la composición del existente no convenia á la política presidencial. La intervención reorganizó la legislatura y el colegio electoral, éste eligió un nuevo gobernador, porque no siendo de moda el existente, fué *forzado á renunciar* y marchó á su casa.

Creo que no necesito refrescar la memoria de cualquiera de mis lectores en este asunto en los demás estados, porque estos son los antecedentes históricos de todas las provincias, la historia de los desmanes de los presidentes y claudicaciones del congreso y la efígie viva y desnuda de la Constitución, hecha á propósito para el partido unitario imperante, á la época en que se sancionó.

El artículo constitucional vigente quiere decir, en síntesis, que toda intervención tiene por objeto *restablecer las autoridades depuestas* por la sedición ó invasión de otra provincia, garantizando de esta manera la forma republicana de gobierno. Como en la práctica este artículo ha sido interpretado de diver-



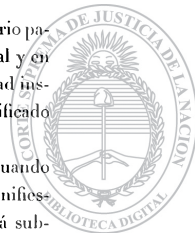


sas maneras, acomodándolo á guisa de manubrio para el juego maculado de la política presidencial y en realidad él no se aviene á un régimen de verdad institucional republicana, creo que debe ser modificado en la forma propuesta.

Las provincias deben ser intervenidas, cuando graves acontecimientos permitan poner de manifiesto que la forma republicana de gobierno está subvertida, porque este es el principio que debe regirlas.

El artículo, tal cual está reformado, importa una facultad más lata y más de verdad que el vigente, pero con las modificaciones introducidas á otros artículos, no hay peligro alguno que esta disposición sea ejercitada para cimentar la anarquía ó imponer el imperio de la fuerza como principio de gobierno, cual ha acontecido hasta el presente. Toda intervención á los estados, debe ser siempre materia de ley, dictada por un congreso independiente, con el claro concepto de sus altas funciones y de sus responsabilidades, ajeno á las imposiciones ejecutivas.

Una de las causas permanentes de anarquía en las provincias es la fuerza de línea destacada en sus capitales : ella ha servido siempre para sostener los gobernadores que hacen ostentación de la mentira y



del abuso, ó como base de las conspiraciones : pero esta causa de tan graves sucesos desaparecería si se adoptase la medida que propongo en el inciso 17 del artículo 86.





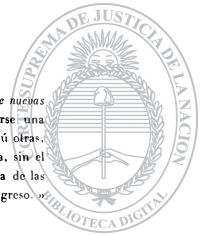


« Art. 12. — Los buques destinados de una provincia á otra, no serán obligados á entrar, anclar y pagar derechos por causa de tránsito; sin que por ningún caso puedan concederse preferencias á un puerto respecto de otro, por medio de leyes ó reglamentos de comercio. »

Art. 12. — Los buques destinados de una provincia á otra, no serán obligados á entrar, anclar y pagar derechos por causa de tránsito; sin que por ningún caso puedan concederse preferencias á un puerto respecto de otro, por medio de leyes ó reglamentos de comercio, *con excepción de lo que dispone el inciso 1° del artículo 67.*

Esta reforma se explica por el inciso 1° del artículo 67 que se propone.





« Art. 13. — *Podrán admitirse nuevas provincias, pero no podrá erigirse una provincia en el territorio de otra ú otras, ni de varias formarse una sola, sin el consentimiento de la legislatura de las provincias interesadas y del congreso.* »

Art. 13. — *Los actuales territorios federales serán erigidos en provincias, cuando á juicio del congreso y según leyes especiales, el crecimiento de la población y el desarrollo de la respectiva economía, les permita bastarse á sus necesidades públicas ; pero no podrá erigirse una provincia en el territorio de otra ú otras, ni de varias formarse una sola, sin el consentimiento de la legislatura de las provincias interesadas y del Congreso.*

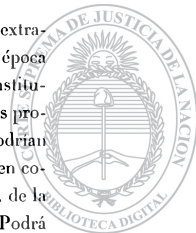
Las razones que militan en favor de la reforma, fluyen lógicamente de la comparación de estos dos artículos.

La palabra «admitir». del artículo vigente, signi-

fica adherir á nuestra nacionalidad, provincias extrañas al territorio de nuestra jurisdicción á la época de la Constitución. Es de creer que los constituyentes abrigaban la idea de que alguna de las provincias argentinas separadas anteriormente podrían incorporarse nuevamente, ó sin mayor examen copiaron textualmente el artículo 1°, sección 3°, de la constitución de Estados Unidos, que dice: « Podrá admitirse por el Congreso, nuevos estados en la Unión, pero no podrá erigirse ningún nuevo estado en la jurisdicción de otro ú otros, ni de varios formarse uno solo, sin el consentimiento de la legislatura de los estados interesados y del Congreso. »

Este artículo de la constitución de aquella nación tenía su razón de ser, y era perfectamente lógico. Los constituyentes anhelaban y tenían fundadas esperanzas en la unión de los demás estados que no adhirieron al pensamiento de la solidaridad americana de la primera hora; aspiraban constituir la nacionalidad con todo el territorio que formaba la Nueva Inglaterra, como aconteció en efecto.

Cuando se sancionó la constitución, el 17 de septiembre de 1787, se unieron solamente trece estados, y era necesario facilitar la unión de los demás, y es lógico que se dejara esa gran puerta de acceso :

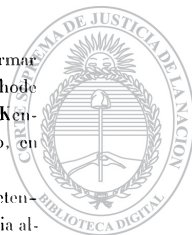


y así fué que Carolina del Norte entró á formar parte de la Unión en noviembre de 1789; Rhode Island, en mayo de 1790; Vermont, en 1791; Kentucky, en 1792; Tennessee, en 1796; Ohio, en 1802; etc.

Como actualmente no podemos tener la pretensión de incorporar á nuestro territorio provincia alguna ajena á nuestra nacionalidad, se impone la supresión de la primera parte del artículo tal cual se indica.

En la época de la organización nacional (1853), no se reconocían territorios federales, y los que hoy existen formaban parte de las actuales provincias: y así, el Chaco y Formosa, bajo el nombre de gran Chaco, ó Chaco Hualamba, eran parte integrante de Santiago del Estero; Misiones, de Corrientes; La Pampa hasta el estrecho de Magallanes, entre la Cordillera y el Atlántico, formaba parte de Buenos Aires y de Mendoza; y el actual territorio de los Andes de Salta.

El inciso 14 del artículo 67, pone de manifiesto el pensamiento de que los territorios que quedaren fuera del límite que se asignara á las provincias, serían nacionales y su organización, administración y gobierno estaría á cargo del gobierno general.





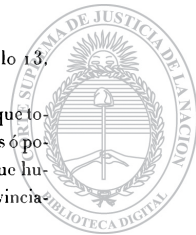
Así es que la reforma que indico al artículo 13, se armoniza en todo con el inciso citado.

La ley de 13 de octubre de 1862 estableció que todos los territorios existentes fuera de los límites o posesión de las provincias eran nacionales, aunque hubiesen sido enajenados por los gobiernos provinciales, desde el 1° de mayo de 1853 (art. 1°).

Los territorios nacionalizados por esta ley, y divididos más tarde (1884) para asegurar una administración progresista, son las futuras provincias que se erigirán, conforme al artículo reformado, y al mismo inciso citado que dice: « crear otras nuevas provincias ».

Si dejo — conforme al proyecto — á juicio del Congreso y según leyes especiales, la erección de los actuales territorios en provincias, es porque tales hechos deben producirse conforme á circunstancias especiales que no es fácil preveer en la evolución progresista que á cada uno caracterizará: y además, porque la diversa situación geográfica, la topografía, extensión territorial, riquezas, climas, medios de transporte y de vialidad, etc., de cada territorio, no permite aplicar el mismo criterio para todos.

La ley número 1532, de 18 de octubre de 1884, sobre organización de los territorios nacionales, en



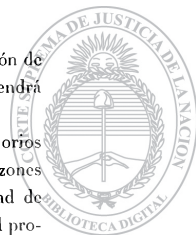
su artículo 4°, estatuye que, cuando la población de un territorio alcance á 60.000 habitantes tendrá derecho á ser provincia argentina.

Esta disposición general para los diez territorios ó gobernaciones, no consulta las diversas razones apuntadas que abogan en favor de la diversidad de condiciones capaces de declararlos aptos para el propio gobierno.

El censo supletorio de los territorios, levantado en 1905, bajo la dirección de la oficina de censo y territorios nacionales del Ministerio del Interior, nos demuestra el crecimiento de la población en los distintos territorios, y como éste es factor indispensable para la erección en provincias, á la vez que índice de los progresos y de las riquezas de cada uno, él viene á ratificar las observaciones que anteceden. Mientras La Pampa y Misiones tienen 56.575 y 39,978 habitantes respectivamente, Los Andes y Tierra del Fuego, acusan las reducidas cifras de 2708 y 1468.

¿Cuántos años transcurrirán para que estos dos últimos alcancen á tener 60.000 habitantes?

No es fácil predecir, pero es posible que dentro de un periodo no muy lejano, contengan 30 ó 40.000 habitantes, á la par de un desarrollo económico flo-



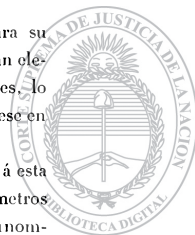
reciente, y que circunstancias especiales para su mayor prosperidad, ó en sentido político, exijan elevarlos á la categoría de estados independientes, lo cual no podría acontecer, siempre que estuviese en vigencia la citada ley.

Prescindiendo de la cercanía de La Pampa á esta capital, su territorio inmenso (145.997 kilómetros cuadrados), su llanura ininterrumpida, como su nombre lo indica, apta para la ganadería y agricultura, cuyo progreso avanza sin medida, no puede ser equiparado con Tierra del Fuego, cuya superficie es de 31.499 kilómetros, su topografía es de las más accidentadas, y sus costas erizadas de peligros, aparte de los rigores del clima, conforme á las latitudes en que está comprendido.

Actualmente, La Pampa contiene mayor número de habitantes que algunas provincias argentinas, y si á esto agregamos el portentoso crecimiento de su riqueza, preciso es confesarlo que está en condiciones de ser elevada á la categoría de provincia.

El artículo 46 de la ley citada de 1884 determina que los territorios que, según el censo nacional ó censos supletorios, cuenten 30.000 habitantes, tendrán legislatura electiva.

Este artículo es repugnante al 37 de la Constitu-

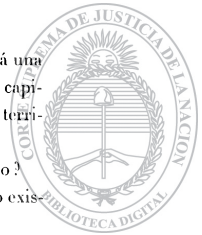


ción, el cual estatuye que el congreso ejercerá una legislación exclusiva en todo el territorio de la capital de la nación. y por extensión, en todos los territorios nacionales.

¿ Por qué no tiene este agregado este artículo ?

Porque en el 53, los actuales territorios no existían.

Con lo expuesto creo haber demostrado la conveniencia de substituir el artículo vigente por el que propongo.







« Art. 16. — La nación argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento : no hay en ella fueros personales, ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra consideración que la idoneidad. *La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas.* »

Art. 16. — La nación argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento : no hay en ella fueros personales, ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos *y cargos públicos*. sin otra consideración que la idoneidad. La igualdad es la base de las cargas públicas, *y la relativa capacidad económica la del impuesto.*

Esta modificación es consecuencia lógica de las ideas expuestas al tratar el artículo 4°.

El artículo 16 que rige es correlativo del 4°: pues la igualdad como base del impuesto, y las contribuciones proporcionales á la población, significan ambas una sola y misma cosa: que el Estado, á los efectos de la renta pública, considera á todos los habitantes con igual capacidad económica.

Como el tributo está en razón directa de los beneficios, y no hay comparación posible entre los que recibe el rico con los del pobre, la igualdad á que se refiere el artículo que comento es un contrasentido.

Si no hay igualdad económica entre los habitantes, como acontece y acontecerá siempre, no puede haber igualdad tributaria.

El tributo debe ser proporcional al haber económico de cada uno, y es posible establecer escalas de contribución entre los que disponen de bienes de fortuna, pero no entre los que tienen subordinada su existencia al jornal diario con el movimiento de su brazo. Mientras el obrero trabaja, se viste y se alimenta, y cuando está imposibilitado de hacerlo, contrae deudas para satisfacer sus apremiantes necesidades y aun para el erario, luego el sistema de la igualdad como base del impuesto, es régimen de desigualdad.

Como la base de la renta ordinaria de la nación

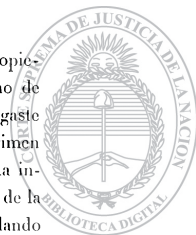


es la imposición indirecta, puede decirse en propiedad que el obrero paga diariamente el derecho de vivir, sin prosperar, con el correspondiente desgaste de su fuerza física. Y ¿es posible que el régimen fiscal que impone un tan grande sacrificio á la inmensa masa de la población, verdadero motor de la gran máquina de la economía nacional, nivelando la capacidad económica de todos los habitantes beneficiados desigualmente, sea titulado régimen de equidad ?

No. Este es régimen de expoliación, de extorsión de la inmensa mayoría en beneficio de la minoría, régimen de lo injusto, de lo inmoral.

La igualdad civil y política de las sociedades es el desideratum de los progresos de la última centuria : pero la igualdad como base del impuesto y de las cargas públicas, es la negación de la misma en su doble acepción. ¿ Por qué ? Porque la igualdad civil es vana ilusión en el gobierno de las plutocracias : porque la igualdad política es una mentira en las sociedades que viven en el régimen capitalista. Esto es lo que acontece entre nosotros, en Norte América, etc., amén de las monarquías.

¿ Quiénes son los que en nuestro país ocupan los más altos cargos y empleos ?



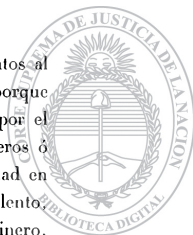


Los más ricos ó los parientes más inmediatos al que ocupa la primera magistratura del país, porque las virtudes de los hombres sólo se cotizan por el haber económico que representan los primeros ó las necesidades de los segundos. La idoneidad en estos casos, no quiere decir preparación, talento, ilustración, etc. No. Idoneidad, quiere decir dinero, pesos — por referirme á nuestro anticuado sistema monetario. — parentela, camaradería, influencias, obsecuencias incondicionales.

La igualdad civil y política requieren para su efectividad y eficiencia, la igualdad económica, ó un estado social que más se aproxime á ella.

El orden, la armonía de las actividades de todos y de cada uno, se concibe sin esfuerzo, en los conjuntos donde la potencia moral y física se regula por el esfuerzo de cada factor, en razón directa de los beneficios que recibe: en las sociedades donde se miden las actividades ó capacidades en la balanza de la equidad, para adjudicar á cada uno su lote en la energía aplicada y en los frutos del trabajo.

Por consiguiente, estas condiciones que son luz é higiene en la gran maquinaria del trabajo, no son ni pueden existir en éste como en ningún país regido por la igualdad tributaria.



« La igualdad es la base del impuesto », hubiere sido una conquista (como lo fué en la edad moderna), en la época romana á base de esclavitud ó en el del estado servaico de la edad media, cuando la nobleza ó los señores estaban exentos de tributos de toda especie, porque los sufragaba el hombre-cosa : pero en el estado actual de la sociedad y particularmente en la nuestra, en la que todos los habitantes tenemos iguales derechos y la suficiente libertad para emitir nuestras ideas y desenvolver conscientemente nuestra acción en favor de la prosperidad general é individual, esa igualdad de la que nos habla el artículo materia del comentario, que en otra hora fué conquista, es hoy, regresión : no se aviene á la época contemporánea : fomenta la desigualdad, el desequilibrio económico, social y político : es fórmula de decadencia, de retardataria cristalización.

Las sociedades no pueden permanecer estacionarias : necesitan continuar el eslabonamiento de sus progresos. La característica de las ciencias sociales consiste en su constante movimiento ascendente, á base de las conquistas de ayer, ineficaces para hoy ; en su permanente transformación en procura de « la felicidad de la nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar



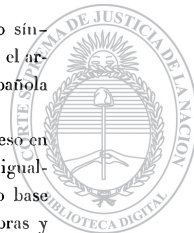
de los individuos que la componen », como síntesis del objeto del gobierno, según lo expresa el artículo 13, capítulo III de la Constitución española de 19 de marzo de 1812.

Si deseamos un signo de verdadero progreso en nuestras instituciones, debemos establecer la igualdad relativa de la capacidad económica como base del tributo, es decir : á cada uno por sus obras y por los beneficios que recibe. Éste es el régimen de verdad, de equidad, el que resume, más que cualquier otro, la sabia máxima del gobierno de las democracias : de todos y para todos.

La renta pública á base de la relativa capacidad económica, simboliza la perfecta conciencia ciudadana, el voto libre, la verdad republicana, la felicidad social.

El simple buen sentido hace ver que no es posible ni racional exigir igual suma al que tiene uno como al que dispone de miles. La mecánica nos enseña que si á una caldera de vapor cuya resistencia es de diez, no se la puede hacer servir como una de veinte, porque, apenas excedido el límite calculado, la pieza estallará.

Este principio es perfectamente aplicable á la sociedad. La fuerza expansiva de la masa obrera que



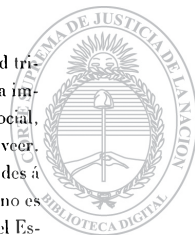
aceleran las cargas fiscales, á base de la igualdad tributaria, pueden llegar á un límite tal, que sea imposible impedir el estallido de una revolución social, cuyas graves consecuencias no es posible prever.

Las masas se ilustran y tienen intelectualidades á su cabeza. Cuando el obrero se dé cuenta que no es el capitalista quien absorbe su savia vital sino el Estado, con sus leyes fiscales con mácula, para apropiarse del fruto de su trabajo, y holgar á los ricos, no habrá fuerza que contenga el empuje de su brazo en la conquista de sus derechos tanto tiempo vulnerados.

Investigando antecedentes sobre el particular en constituciones de otros países, encuentro que Italia y Portugal (1) tienen establecido el principio de que las contribuciones deben ser proporcionales á los haberes de los que las sufragan : y asimismo lo tenían establecido Francia, España y Brasil en sus constituciones, de 9 de agosto de 1830, y 19 de

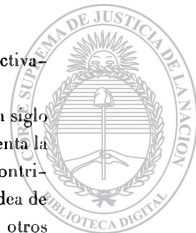
(1) Italia, Constitución de 4 de marzo de 1848 : « Art. 25. — Todos los nacionales contribuyen indistintamente en proporción de su haber, á las cargas del Estado. »

Portugal, Constitución de 30 de abril de 1826, título 8º, artículo 145, § 14 : « Nadie estará exento de contribuir para los gastos del Estado, en proporción á sus haberes. »



marzo de 1812, y 22 de abril de 1824, respectivamente (2).

Se ve, pues, que los países mencionados, un siglo antes de ahora, estatuyeron como base de la renta la igualdad relativa de las capacidades de los contribuyentes, y que nosotros no tuvimos la feliz idea de adoptar este principio, en cambio de tantos otros exclusivos de la monarquía, y aun parece que no nos diéramos cuenta de su importancia, del punto de vista de los órdenes diversos del progreso social.



(2) Francia : « Artículo 2º. — Los franceses contribuyen indistintamente á las cargas del Estado, en proporción de su fortuna. »

España : título I, artículo 8º : « También está obligado todo español, sin distinción alguna, á contribuir en proporción de sus haberes para los gastos del Estado. »

Título VII, artículo 33º : « Las contribuciones se repartirán entre todos los españoles con proporción á sus facultades, sin excepción ni privilegio alguno. »

Brasil : título VIII, artículo 15 : « Nadie estará exento de contribuir para los gastos del Estado en proporción á sus haberes. »

« Art. 18. — Ningún habitante de la Nación, puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, ó sacado de los jueces designados por la ley, antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado á declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados; y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse á su allanamiento y ocupación. Quedan abolidas para siempre la pena de muerte *por causas políticas, toda especie de tormento, y los azotes*. Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias: para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas y toda medida



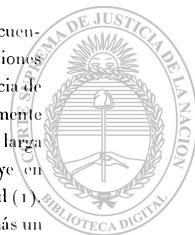
que á pretexto de precaución conduzca á mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice.»



Art. 18. — Ningún habitante de la nación, puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, ó sacado de los jueces designados por la ley, antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado á declarar contra sí mismo, ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados; y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse á su allanamiento y ocupación. Queda abolida para siempre la pena de muerte. Las cárceles de la nación serán sanas y limpias: para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas y toda medida que á pretexto de precaución conduzca á mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice y á los empleados que la ejecuten.

La reforma á este artículo, consiste en la abolición de la pena de muerte por cualquier causa ó delito, y en la responsabilidad que se exige á los empleados que dieran cumplimiento á órdenes que imparten para mortificar á los detenidos.

La pena de muerte, como castigo de la delincuencia, tiene su origen en las primeras agrupaciones humanas : nace en la incultura, en la incipiente de los primeros pueblos ; ha recorrido posteriormente todos los ciclos del progreso social, y en su larga trayectoria, vemos que su ejercicio disminuye en razón directa de la cultura social y de la libertad (1).



La pena de muerte es ley inhumana : es más un ultraje que un correctivo social : no moraliza, ni infunde terror : es sencillamente bárbara, un resabio de la ley del talión : *ojo por ojo y diente por diente*.

En la penitenciaría moderna todos los penados son elementos útiles á la sociedad, y no es justo privarla á ésta de esos factores, donde, al mismo tiempo que purgan la pena, retribuyen con la dedicación de su actividad el daño causado, quedando además, en condiciones de una vida regenerada al término de la condena.

El hombre, por diversas causas, sean de degeneración, de extravío mental, de impremeditación ó de

(1) M. Démeunier (*L'esprit des usages et des coutumes des peuples*, t. III, pág. 148, edición de 1776), nos hace saber que, bajo el reinado de Enrique VIII, desde 1509 hasta 1547, fueron ejecutados en Inglaterra, setenta y dos mil criminales ; mientras que, en la época en que escribía este autor, este número estaba reducido á cien por año.

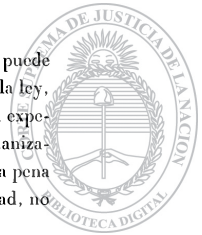


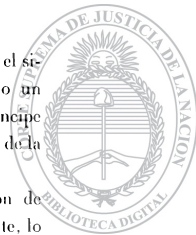
cualquier otra que importe una anormalidad, puede cometer un homicidio, y se explica : pero que la ley, fruto de la sabiduría, de la razón serena, de la experiencia cuidadosamente aquilatada, de la humanización á base de la libertad, que imponga una pena igual á la cometida, por desagravio á la sociedad, no tiene atenuante.

Es un error creer que la pena de muerte es una necesidad para la reparación del crimen perpetrado, ó un correctivo para otras acciones semejantes : y creo no estar en error, al afirmar que á un delincuente le hará mayor efecto permanecer quince ó veinte años en la penitenciaría, que la pena de muerte.

En la conferencia que el profesor Ferri dió en la Facultad de Derecho, el 24 de agosto último, nos manifestaba, que después de 1890, fecha en que en Italia se suprimió la pena de muerte, la criminalidad ha disminuido en una proporción considerable, lo que prueba que la última pena no es el remedio para el mal.

La abolición de la pena de muerte es una necesidad sentida en todas las sociedades bien organizadas que aspiran auras de libertad, y es prueba de ello, el hecho de que son muy raras las ejecuciones en la actualidad en el mundo civilizado.





Démecunier, propagandista de estas ideas en el siglo xviii, en su obra mencionada, cita como un ejemplo digno de imitar, la resolución del príncipe Bade-Dourlach, quien suprimió esta ferocidad de la última pena.

La Constitución vigente establece la abolición de la pena de muerte por causas políticas solamente, lo cual representaba un gran progreso en nuestras instituciones nacientes, en un período asaz difícil y anárquico : pero hoy, esa conquista es insuficiente : necesitamos ampliarla generalizándola para todo género de delitos : esto es humano, moral y dogma de civilización.

La parte que se refiere á tormentos y azotes á los detenidos ó delincuentes, la suprimo porque la última parte del artículo la hace innecesaria.

El agregado de la responsabilidad de los empleados ejecutores de órdenes que importen mortificar á los detenidos, es una necesidad, porque es general en las cárceles de las provincias usar de esta medida con órdenes verbales del jefe, ó del comisario de policía.

Los presos en provincia, y principalmente los que caen por causas políticas, son comunmente mortificados y escarnecidos por sus guardianes, quienes

han llegado hasta el asesinato, como en los mejores tiempos de la barbarie. ¿Cuál es la razón de que aún persistan estos resabios de incultura y de incalificables abusos de la autoridad ?

La irresponsabilidad de esos funcionarios de segunda ó tercera categoría, afianzados en el beneplácito de sus jefes superiores. Á corregir este mal, es que viene este agregado del artículo : porque sólo así podrá ser respetado el derecho de vida y la dignidad de las personas, cuando han dilinquido, defendiendo el atributo más sagrado de los pueblos : la libertad.

En Inglaterra, un funcionario, desde el primer ministro hasta el *policeman*, es responsable ante la justicia ordinaria de toda violación de la ley ó de excesos del poder, y aquél que está recriminado por un acto ilegal, no puede cubrir su falta, fundándose en órdenes recibidas de su superior jerárquico (2). « Un soldado debe obedecer á sus superiores ; pero no puede escapar á las consecuencias de un acto ilegal pretextando excepciones de órdenes de su jefe. » Esto demuestra que se ha querido afirmar y mantener en todo rigor, el principio de la so-

(2) A. V. DICEY, *Introduction à l'étude du Droit constitutionnel*, pág. 15.



beranía de la ley común sobre las cortes marciales.

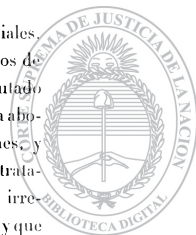
El diario de sesiones de la cámara de diputados de 1890 (julio 2), contiene un discurso del diputado Gonnet (M. B.), fundando su proyecto sobre la abolición de la pena de muerte por delitos comunes, y considerando de otro punto de vista del que he tratado la cuestión, decía: «La pena de muerte es irremisible. Un *inocente ejecutado* á virtud de una ley que autoriza la pena de muerte, es una víctima de los errores judiciales.

«Y pregúntese á la historia si hay víctimas inocentes, no ya de la maldad de las autoridades, que son muchas, sino de los errores de los jueces.

«Sostener lo contrario, sería suponer la infalibilidad de los jueces encargados de juzgar, tan hombres como nosotros mismos, con tantas pasiones como los mismos reos á quienes juzgan, neuróticos, tal vez, que por defectos de su propio organismo, de su propio cerebro, llegan á veces, á condenar por error, por maldad y, en muchas ocasiones, hasta por venalidad.»

«El juez Jeffreys cubrió con la autoridad de su firma todos los crímenes que supo inspirar á Jacobo II. de Inglaterra.

«Hay que examinar también la cuestión bajo el

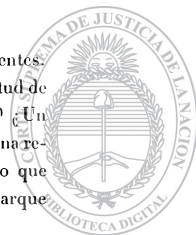


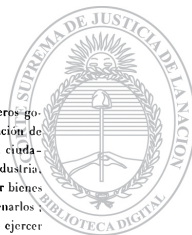
punto de vista de la personalidad de los delincuentes.

«¿Es el criminal un sér que obra en la plenitud de sus facultades intelectuales? ¿Es un atávico? ¿Un neurótico? ¿Un loco? ¿Un fatalista? ¿Hay alguna regla fija que lo establezca? ¿Hay algún principio que lo sancione? ¿Hay alguna ley física que nos marque los rumbos seguros á este respecto?»

Encontrándome de acuerdo en un todo con estas ideas, he preferido transcribirlas por el respeto que me merece quien las ha emitido.

Este proyecto digno de mejor suerte, pasó á comisión, y desde entonces, duerme el sueño de los justos.





« Art. 20. — Los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano : pueden ejercer su industria, comercio y profesión ; poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos ; navegar los ríos y costas ; ejercer libremente su culto ; testar y casarse conforme á las leyes. *No están obligados á admitir la ciudadanía, ni á pagar contribuciones forzosas extraordinarias. Obtienen nacionalización residiendo dos años continuos en la Nación ; pero la autoridad puede acortar este término á favor del que lo solicite, alegando y probando servicios á la República.*»

Art. 20.— Los extranjeros gozan en el territorio de la nación de todos los derechos civiles del ciudadano : pueden ejercer su industria, comercio y profesión ; poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos ; navegar los ríos y costas ; ejercer libremente su culto ; testar y casarse conforme á las leyes.

*Todos los extranjeros que posean el idioma nacional, sepan leer y escribir y tengan cuatro ó más años de residencia inmediata en el país, ó no sabiendo leer y escribir, sean propietarios ó casados en el país, están de hecho naturalizados, y obligados á tomar su carta de ciudadanía, é inscribirse en el Registro cívico nacional. La naturalización del jefe de familia, se extiende, á su mujer é hijos menores radicados en el país.*

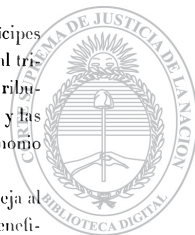


No cabe discusión alguna que el elemento extranjero ha sido, es y será el gran colaborador de nuestros progresos económicos. Las inmensas extensiones cultivadas, los ferrocarriles y la actividad fecunda en industrias de diversa índole, ó son obra de su brazo, ó de su capital ; pero en medio de esta prosperidad no sospechada por nuestros antepasados, por lo menos en la medida de los hechos palpantes, nuestra carta orgánica no nos ha permitido obtener todos los beneficios de la energía extranjera radicada en el país, obligándola á la naturalización. Hemos abierto las puertas á todos los hombres del mundo á compartir de las riquezas de nuestro suelo, pero no los hemos asimilado á nuestras prácticas políticas, no les hemos inoculado el virus del alma nacional, base de la verdadera vida argentina ; les hemos invitado al festín del trabajo y de sus frutos,

es decir, les hemos llamado para hacerles partícipes en los beneficios, y hemos limitado sus cargas al tributo de la vida ordinaria de la Nación : las contribuciones extraordinarias, la defensa del territorio y las deliberaciones de la cosa pública, son patrimonio de los argentinos solamente.

El extranjero, en estas condiciones, se asemeja al meteco de Grecia : ave de paso, colmada de beneficios y exenta de cargas. ¿ Quién no sabe que el cosmopolitismo de esta gran capital es la grave enfermedad que la afecta hondamente en sus progresos políticos ? Y como la metrópoli irradia su acción directriz y compensadora en todos los ámbitos del territorio, quiere decir que esa enfermedad es nacional y el único remedio para combatirla, es la naturalización obligatoria del extranjero, de manera que éste deje de ser indiferente á los grandes problemas nacionales, se identifique y sienta las palpitaciones del espíritu nacional en el comicio, en el parlamento y en todas las cuestiones que afecten el territorio argentino.

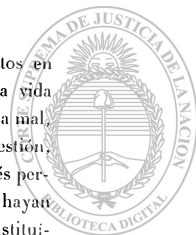
El comercio, la banca, las fábricas, los ferrocarriles, puede decirse que están en manos del extranjero, y estos factores son los reguladores de la marcha económica y política del país : es decir, que el ex-





tranjero, con los cuantiosos capitales puestos en juego, influencia de una manera poderosa la vida cívica argentina, y como es natural, la impulsa mal, porque el extranjero, como tal, no mira la cuestión, sino de un sólo punto de vista, del de su interés personal. ¿Qué le importa al extranjero que no haya elecciones de verdad en el país, que se haya instituido la carrera de congresal mediante obsecuencias incondicionales al primer mandatario, y muchas otras desgracias políticas que no las anoto para no desviarme de la cuestión principal : qué le importa, repito, si el orden y la paz sobre tanto despojo, le hace aumentar sus dineros, en la forma de la multiplicación de los peces de que habla la Biblia ? ¿Qué le importa del sacrificio ó del ostracismo á que están reducidos los hombres preparados, incontaminados con la corrupción política que avanza á pasos de gigante, si su condición de mero espectador y de aprovechador de nuestras riquezas le hace tan cómodo su pasaje por este Eldorado de América ?

Es de imaginarse la gravedad del mal del extranjero entre nosotros, cuando dirigimos la vista á personas que se destacan, por su actuación social y económica rebotante, adheridos al presupuesto con hijos y servidumbre, sirviendo intereses menguados y



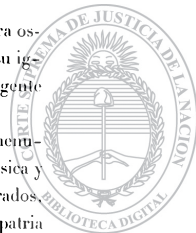
pasando á menudo por las horcas caudinas para ostentar una posición política que no cuadra á su ignorancia, y mucho menos á la dirección inteligente á que es acreedor este país y sus destinos.

Esta misma es la causa para que se oiga á menudo esta frase : « seamos prácticos, siga la música y siga la danza », en vez de decir : seamos honrados, seamos dignos de los que nos legaron esta patria grande.

La anarquía de las ideas es la norma ordinaria de la vida nacional, y la unanimidad es el eco de la palabra del presidente de la República que consagra su sucesor. ¿Por qué? Porque pueblo y congreso ceden : porque allí está la fuerza manejada arbitrariamente, acompañada siempre por el extranjero que se ha acaparado los tesoros del país, sin responsabilidad política alguna.

El pueblo no delibera ni gobierna, pero se presta para la parodia electoral, en beneficio de los cubileteros políticos ; gobierna el dinero, las fuerzas conservadoras, el elemento extranjero con la fuerza muda pero elocuente de sus cuantiosos capitales.

El importantísimo censo de esta capital, de 1904, levantado bajo la inteligente dirección del estadígrafo doctor Alberto B. Martínez nos demuestra, con



la evidencia incontrovertible de los números, la razón de mi afirmación. El monto de los valores mobiliarios de la República, al 31 de diciembre de 1904, era de 1.586.116.991 pesos oro, y en éste, sólo el capital inglés representa 994.000.000 de igual moneda con una renta anual de 45.000.000 : si á ésto se agrega 250.000.000 más en títulos, estancias, y otras industrias, no tomadas en cuenta en el cálculo anterior, se tendrá una suma total de 1.244.000.000 de pesos oro, y un interés de 74.640.000 pesos. Con estas cifras, se hace innecesario entrar á considerar otros capitales extranjeros.

El comercio de esta capital, al 18 de septiembre de 1904, era estimado en un total de 480.138.300 pesos moneda legal, y en esta suma están comprendidos 416.818.900 de capital extranjero.

Conforme al censo citado, la población extranjera de esta capital, en septiembre de 1904, fué igual al 45 por ciento del total, y comprendía 221.961 varones de 15 años arriba, los que descompuestos por grados de instrucción, se contaban 171.086 alfabetos y 50.875 analfabetos. De este total de extranjeros varones, había 30.464 propietarios de bienes raíces.

No anotamos los datos pertinentes de los extran-



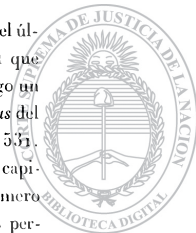
jeros de todo el territorio de la Nación, porque el último censo general es de nueve años atrás al que considero de esta Capital, y conforme á él tengo un estudio en la *Revista de Derecho, Historia y Letras* del doctor Estanislao S. Zeballos, tomo XVI, página 531.

Bien, pues, ante las cifras que representa el capital extranjero, la población alfabeta y la del número de propietarios de bienes raíces, no podemos permanecer indiferentes, porque al mismo tiempo que engrandecen la economía general, empequeñecen la acción cívica con su política eminentemente conservadora.

¿Por qué no se naturalizan los extranjeros ? Por dos razones ; ó no les conviene, porque se aumentan las cargas públicas, ó si desean hacerlo, se encuentran deprimidos al renegar la patria de origen : y es á obviar estos inconvenientes que viene la disposición de la reforma que propongo.

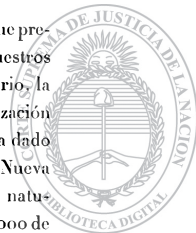
La primera objeción que surge para la naturalización del extranjero, es ésta : ¿cuál será el resultado práctico que obtendríamos con su incorporación á la perfecta ciudadanía argentina ?

Muy lejos estamos de los peligros que asaltaban á los convencionales de 1853 que estatuyeron la naturalización solicitada y servicios á la República, de-



mostrados : igualmente lejos de los temores que preveía el gran Sarmiento con la absorción de nuestros derechos por el extranjerismo : por el contrario, la nacionalidad se robustece mediante la naturalización obligatoria, y sino, véase el resultado que ha dado en Norte América, por demás satisfactorio. Nueva York solamente tiene 2.749.752 ciudadanos naturalizados y 687.450 nativos ; Chicago, 1.152.000 de los primeros y 350.000 de los segundos (1900). El elemento extranjero, en las condiciones propuestas, instruido, con intereses sagrados que defender ; riqueza é hijos, lazos que oprimen y detienen, será siempre conservador, pero no en las condiciones actuales de irresponsabilidad, será conservador responsable y por lo tanto, actor y director de los progresos propios que son parte de los progresos comunes ó generales.

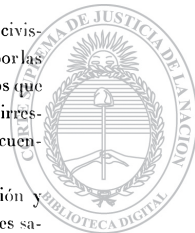
El elemento extranjero en estas condiciones, es elemento sano, garantía de orden, de paz y de bienestar. Su concurso político no puede ser sino eficiente, porque su ilustración y el estado próspero de su economía lo hace factor insospechable para la vida libre de la Nación y por ende para la eficacia de las instituciones, de la verdadera democracia y de los destinos futuros grandes y amplios como sus pampas y sus riquezas inagotables.



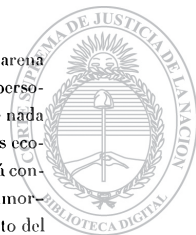
No podemos negar que el estado actual del civilismo argentino es deplorable, enfermo crónico por las condiciones económicas y escasa cultura de los que ejercitan el voto, y por la fuerza conservadora irresponsable del extranjero, en cuyas manos se encuentra gran parte de la riqueza nacional.

Obra es de patriotismo, afrontar con decisión y energía el mal, introduciendo nuevos gérmenes sanos y robustos que benefician el ambiente político, para que en esta tierra fructifique el árbol de la verdadera vida institucional : para que los beneficios de la libertad acordados á todos los hombres del mundo en la portada del libro de los derechos del hombre en nuestro suelo, sea efectiva en todas las manifestaciones de la actividad ciudadana.

La acción del extranjero naturalizado, en nuestras prácticas políticas, tiene que ser fuerza reguladora de una marcha feliz en los negocios públicos : propulsora de energías ponderadas en favor de los regímenes económico, social y político : influencia poderosa en la representación nacional con su voto consciente y libre, y estímulo para el ciudadano de origen, que abandona á menudo sus intereses y los destinos del país á merced de los que manejan la fuerza ó de los más audaces traficantes de la politiquería.



Con la incorporación del extranjero á la arena cívica, terminaremos con las denominaciones personales de los partidos, ó con abstracciones que nada significan, para ser reemplazados por banderas económicas que son las verdaderamente llamadas á condensar el espíritu nacional en favor de los primordiales intereses generales y particulares. El voto del extranjero, en las condiciones de su naturalización, será dado, no al caudillo político, ni en homenaje á ninguna complacencia, sino respondiendo á un acto perfectamente deliberado, en favor de la persona que reuna la mayor suma de competencia y honorabilidad y sea capaz de defender los grandes intereses confiados. El extranjero no irá al comicio por el acto en sí, sino por lo que él representa, comprendiendo que los intereses económicos se defienden con la acción política, y que el desarrollo de la riqueza pública y particular no se debe solamente á la potencialidad de las fuerzas naturales que la contienen, sino también á la acción fiscal, á la fuerza directriz de la Nación, al Congreso, al poder ejecutivo y sus colaboradores. La acción cívica es fuente, fuerza, movimiento que la honradez y la capacidad ciudadana lo regula. Tonificar el ambiente político con la incorporación de nuevos factores ponderados, como

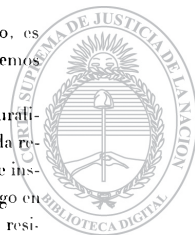


son los que comprende el elemento extranjero, es acto de patriotismo y de buen gobierno que debemos resolverlo sin tardanza.

Entre las exigencias estipuladas para la naturalización obligatoria del extranjero, conforme á la reforma, priman condiciones de residencia y de instrucción, y, en defecto de esta última, de arraigo en el suelo ó en la familia para los adultos, y de residencia para la niñez.

¿Qué son los partidos actuales y cómo desarrollan su acción en la política argentina?

Oigámosle al doctor Pellegrini que con frase lapidaria clasificó al partido personal de Roca, en su conferencia de 22 de febrero de 1904 en esta capital, quien entre otras importantes consideraciones, expresó lo siguiente : « Nuestros opositores no invocan como título ni la inteligencia, ni la ilustración, ni la experiencia, ni grandes servicios prestados al país, ni mérito alguno. Suplen todo eso con audacia sin pudor y sin escrúpulos. No se dirigen á la opinión sana é independiente, porque ellos se agitan en otras esferas y buscan el triunfo por otros medios. Ofrecen comprar á todo el que se quiera vender, descienden á los *bajos fondos sociales* é invitan á todas las *aves negras de la política* al festín de la venalidad y la corrup-





ción, derraman los depósitos policiales en los clubs electorales, *convierten á las grandes administraciones nacionales en comités políticos*, amenazan con las iras ó seducen con los favores oficiales y convierten así la lucha electoral en una inmensa *orgía política*, como jamás la presencié este pueblo que ha visto grandes violencias, pero nunca *tantas vergüenzas*.

« Es eso lo que tenemos al frente y contra eso vamos á luchar. *Son corsarios políticos que pretenden hacer presa del Congreso Nacional* para convertirlo en instrumento de *opresión y de escándalo* y al cerrarles el paso luchamos para salvar el decoro, tal vez el *honor nacional*.

« Es por esto que esta lucha no es ya de un partido contra otro partido, sino una lucha de *defensa social*, de todos los elementos sanos é independientes contra una camarilla sin bandera y sin ideales, formada por residuos de todos los partidos. »

Dudar de estas palabras no es posible porque son hijas de la experiencia propia en treinta años de actuación ininterrumpida en el mismo partido ; son la franca y sincera expresión de un cofrade.

Las condiciones para el adulto se explican por si mismo. Propiciando el gran Sarmiento la inmigración seleccionada decía : « mientras que, con la difu-



sión de escuelas nos empeñamos en desasnar los habitantes, con la inmigración á granel estamos asanando el país ». Si bien es cierto que hasta ahora no hemos dictado disposiciones análogas á las que tiene Estados Unidos sobre inmigración, ésto no nos afecta mayormente por cuanto la reforma proyectada impone condiciones que hacen de cada factor social un elemento hábil para el voto libre y consciente por sus condiciones económicas y de instrucción. Por otra parte, el extranjero que posee bienes raíces ó forma su hogar en el país, está en condiciones de mirar por la suerte de la nacionalidad, de la tierra que le brinda sus riquezas y le protege con sus leyes liberales y benefactoras.

La última disposición, referente á los niños menores, es con el objeto de incorporarlos á la nacionalidad é instruirlos obligatoriamente en nuestras escuelas para preparar el futuro ciudadano.

Preciso es que esta cuestión sea afrontada también de otro punto de mira.

La representación nacional, conforme al artículo 37, es á base del número de habitantes de la Nación, no del de la población nacional que es la única electora de verdad. También están representados los extranjeros que no eligen, y mientras hay provin-



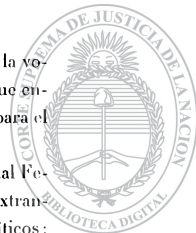
cias que mandan diputados al Congreso, por la voluntad genuinamente argentina, hay otras que envían representantes de extranjeros inhábiles para el voto.

De los veinte diputados que elige la Capital Federal, once son representantes del elemento extranjero sin capacidad para conferir poderes políticos: la provincia de Buenos Aires, en las mismas condiciones, tiene nueve, en veintiocho: Santa Fe, cinco en doce: Entre Ríos, dos, en nueve: y Córdoba, uno, en once, de acuerdo con el censo de 1895.

Así es que, con un número insignificante de votos, con relación al total de la población, se consagra la representación de los más importantes cargos electivos del país.

¿ Por qué dice el artículo 37 que la representación nacional, ó del pueblo de la Nación, se ha de conformar según el número de *habitantes*?

El doctor Guastavino (José M.) contestó esta pregunta, en la sesión del 5 de marzo de la convención de 1898, y dijo: « Porque Francia, Bélgica, Suiza, Prusia, Países Bajos, Suecia, Dinamarca, España, Portugal y Grecia, en Europa: Estados Unidos, Méjico, San Salvador, Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Chile, Brasil y la Banda Oriental, en Amé-



rica, todos estos países tienen establecida la representación conforme á la *población* ; porque todos los pueblos cultos de la tierra consagran esta base. »

En la convención del 53, se aprobaron sin discusión los artículos 20 y 37 (antes 33), porque la carta orgánica fué impuesta desde el campamento del vencedor, y era necesario sancionarla á tambor batiente, en homenaje á la unidad nacional, que era necesario sellarla sin pérdida de tiempo, antes de que cayéramos nuevamente en la guerra civil y bañáramos de nuevo el suelo patrio con sangre de hermanos. No es, pues, de extrañar que la constitución proyectada por una comisión *ad hoc*, compuesta de dos miembros, no discutida en la amplitud y libertad necesarias, con la pólvora aún humeante de los campamentos, fuere deficiente en algunas de sus partes, como lo es en la que trato. Empero, no se comprende que nuestras personalidades de hoy no se den clara cuenta de los errores de ayer.

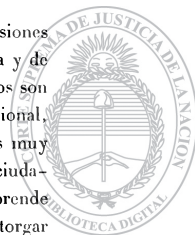
El doctor Guastavino, para robustecer el contenido del artículo 37, de que la representación es del pueblo, en el cual está comprendido el elemento extranjero aunque no como elector, citaba todos los países de Europa y América, cuyas constituciones contienen la misma disposición, pero no practicó el



análisis del significado político de las expresiones *pueblo* y *habitante* en Europa y Norte América y de lo que representan entre nosotros. En aquéllos son sinónimas, implican ciudadanía, habitante nacional, pueblo comicial, y entre nosotros, son voces muy distintas : la primera quiere decir votante, ciudadano, factor del comicio, y la segunda, comprende á éstos y á los extranjeros incapacitados de otorgar poderes, y por consiguiente de tener representantes.

Así es que el artículo 37 de la Constitución, que dice que los representantes son elegidos por el pueblo en razón de un determinado número de habitantes, no se adapta al principio político que debe regirlo, el cual consiste en que la representación debe ser conforme al número de los capacitados para otorgar poderes.

Como los estados europeos están formados por una población eminentemente nacional, de raza, podríamos decir, sin adherencias extrañas á la nacionalidad, no son países de inmigración como los de América, cuando dicen pueblo, ó habitantes en sentido político, dicen ciudadanos hábiles para el voto, nacionales, no se refieren al extranjero, considerado como un simple transeunte. El aumento de la población en los estados de Europa es vegeta-



tivo. Estados Unidos, no obstante ser un país de inmigración, tiene estatuida la naturalización obligatoria del extranjero después de un corto periodo de años de residencia inmediata, y el extranjero que no satisface esa condición es considerado de la misma manera que en Europa. Así es que, pueblo, en aquella gran república significa ciudadanos, habitantes de la nación, entre los que no están comprendidos los transeúntes : de manera que los representantes son realmente el exponente del pueblo de la nación americana ó de sus habitantes : tienen mandato propio y directo de los intereses individuales y sociales.

Nada tenemos que agregar sobre las demás repúblicas americanas, porque todas ellas no han hecho sino copiar los principios que han servido de base para los pueblos constituidos anteriormente, en forma análoga á la nuestra, sin análisis é incompletamente.

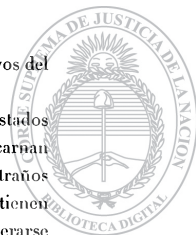
Por lo que antecede, se ve con toda evidencia que el doctor Guastavino no estaba en lo cierto, cuando para demostrar que todos los países nombrados tienen como base de la representación, el pueblo ó los habitantes, presentaba este argumento contundente : « todos los pueblos cultos de la tierra tienen esta base, porque todos tienen necesidad de llevar una



influencia indirecta en los consejos legislativos del país », refiriéndose al elemento extranjero.

Tanto en los estados de Europa, como en Estados Unidos, los representantes del pueblo no encarnan ninguna influencia indirecta de habitantes extraños á la nacionalidad, porque no la precisan, no tienen porquienes ser influenciados, ni puede considerarse este arbitrio como principio político, y en nuestro caso, ni como fundamento para cohonestar el error que encierra nuestra carta orgánica.

La representación de factores sociales inhabilitados para el voto es un contrasentido. Toda representación implica poderes conferidos, así es que los veintiocho diputados representantes de los habitantes extranjeros no tienen un mandato legítimo como acusan los diputados de las provincias del norte, en las que se puede decir que todos los habitantes son nacionales. En nuestro país no eligen los habitantes en general, sino los nacionales, pero como los extranjeros son censados para fijar el número de diputados de conformidad á un determinado número de habitantes, resulta que una parte de la representación es ilegítima. Y así cada uno de los 20 diputados que elige esta capital no representan sino 15.918 habitantes nacionales : 22.746 los 28 de la



provincia de Buenos Aires : 19.225 los 12 de Santa Fe; mientras que los de las demás provincias, con excepción de Córdoba y Entre Ríos, representan 33.000 ciudadanos hábiles para el voto.

Además de lo expuesto, existe otra razón fundamental que aboga en favor de la reforma propuesta, y es la siguiente : según el artículo 20 que rige, cualquier extranjero, con dos años de residencia puede obtener la ciudadanía, y ya hemos notado que en las proximidades de elecciones han tomado su respectiva carta una cantidad de peones municipales analfabetos, para desempeñar el triste papel de máquinas votantes, circunstancia que viene á viciar más el ambiente cívico nacional : y por la reforma sólo son admitidos aquéllos que saben leer y escribir y como excepción personas de verdadero arraigo siendo propietarios, ó casados en el país.

En el orden económico y en el de la política internacional, la naturalización obligatoria del extranjero tiene otro significado más. Supuesto el caso de que el estado tuviese necesidad de formar un fondo de recursos extraordinarios, de conformidad al inciso 2° del artículo 67 vigente, el extranjero no está obligado á pagar contribuciones forzosas extraordinarias, no obstante ser éste el más habilitado para





hacerlo. En el caso de una guerra internacional, conforme al artículo 21, los ciudadanos naturalizados no están obligados á « armarse en defensa de la patria y de la Constitución, sino diez años después de naturalizados ».

Bien, pues, con la naturalización obligatoria del extranjero, desaparecerán estos inconvenientes y habremos aumentado la fuerza moral y material de la Nación.

Finalmente y ya que para adaptar en nuestro país cualquier principio institucional, tenemos el hábito de mencionar las bondades reconocidas en el país de origen, en ningún caso más oportuno que en éste, el hecho de que en Norte América la naturalización obligatoria ha dado los resultados más satisfactorios ; así lo dicen el poder grandioso de su actividad, la potencialidad exuberante de sus riquezas, los respetos que inspira á todas las demás naciones de Europa, América y Asia, sus prácticas políticas y la excelencia y honorabilidad de sus mandatarios geniales.

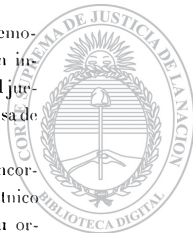
¿ En qué momento ha peligrado la nacionalidad americana (de E. U.) por la inmediata naturalización de tanto inmigrante que se ha cobijado bajo su bandera, nacido y crecido en la monarquía, sin la



más mínima noción de las prácticas de la vida democrática republicana? ¿Quién ha apuntado algún inconveniente que en la práctica haya originado al juego armónico de los poderes del estado, por causa de la nacionalización obligatoria del extranjero?

Estados Unidos se ha engrandecido con la incorporación é identificación de tanto elemento étnico que ha fluido á su territorio; ha robustecido su organismo político y social; ha fomentado el arraigo de la población extranjera de origen con el vínculo de la fraternidad consistente en la igualdad de los beneficios y de las cargas públicas, y finalmente ha resuelto el gran problema de su poderosa fuerza en la política internacional, y representa hoy el poder compensador del imperialismo europeo.

Eso representa para Estados Unidos la naturalización obligatoria del extranjero. Allí han afluído hombres de todas partes del mundo para confundir sus idiomas, modos de ser, aspiraciones y tendencias, y para diluirse, en fin, y unificarse con la raza anglo-sajona del pueblo yankee, á semejanza de las corrientes mediterráneas que presurosas se arrojan en el océano, para no aparecer más con sus caracteres peculiares, confundidas en la inmensidad de esa masa prehistórica, caracterizada por la uniformidad

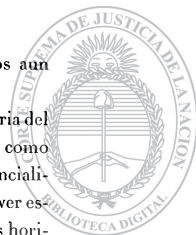


del conjunto, su profundidad y sus términos aun desconocidos.

Esta es la obra de la naturalización obligatoria del extranjero en Estados Unidos, y nosotros, como amenguando nuestro carácter y nuestra potencialidad no nos hemos resuelto hasta ahora á resolver este sencillo problema y magno, á la vez, por los horizontes de grandeza que nos hace columbrar en lo porvenir.

El doctor Estanislao Zeballos, diputado al congreso en 1887, hablando en favor de la naturalización obligatoria del extranjero, decia : « Nosotros que vamos á ser el centro obligado adonde convergerán quinientos mil inmigrantes ó viajeros anualmente, nos hallaremos, un día, transformados en una nación que no tendrá ni lengua, ni tradiciones, ni carácter, ni bandera ».

Hago mención de estas palabras porque ellas son la fiel expresión de mis sentimientos en el grave problema de la nacionalidad. En el transcurso del tiempo, cuando el progreso industrial y quizá también el fabril, haya conquistado todos los veneros de la riqueza y nuestra población llegue á 15, 20 ó más millones de habitantes, el espíritu nacional habrá desaparecido, porque el inmigrante viene con sus

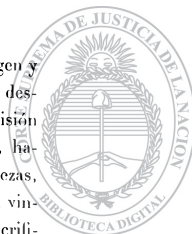


tradiciones, con el espíritu fijo en el país de origen, a  
el propósito de labrarse una posición económica des-  
ahogada, y, si nuestras leyes carecen de la previsión  
necesaria para diluirlo en el ambiente nacional, ha-  
ciéndole amar la tierra que le brinda sus riquezas,  
enseñándole sus tradiciones y el patrio idioma, vin-  
culándolo al ambiente político, exigiéndole sacrifi-  
cios propios de sincera hermandad, y haciéndole  
pensar sobre nuestros anhelos y los destinos de este  
hermoso país; si nuestras leyes, repito, carecen de  
de estas previsiones, cansados en esta lucha titánica  
con los que pueden y no quieren entender, llegare-  
mos al fin de la jornada y cuando será ya tarde, á  
considerar una realidad las proféticas palabras que  
quedan grabadas más arriba.

Desde hace medio siglo, por todas partes el eco  
repite: « *Poblar es gobernar* », y seguimos repitiendo  
la misma frase, sin que se escuche la complementa-  
ria, que es ésta : *nacionalizar es engrandecer*.

Poblar un país con elementos de inmigración,  
sin adaptarlos á la nacionalidad es como enfeudar  
nuestro país al extranjero : es poner las bases para  
cambiar el estado de nación, por el de colonias eu-  
ropeas.

« Poblar naciones, — agregaba el diputado aludi-



do, — es la tarea más difícil de este siglo, porque, al mismo tiempo que se busca los brazos para que cumplan las evoluciones económicas, es necesario preparar los elementos políticos y morales que dan por resultado la nacionalidad ». Éste es el problema que tenemos hoy en el tapete. Nuestro país está en formación, tomando contornos, y debemos propender á que sus instituciones sigan una marcha paralela al desarrollo de sus cuantiosas riquezas y al aumento de su población. Todos los instantes no son iguales para resolver los diversos problemas que preocupan á los pueblos.

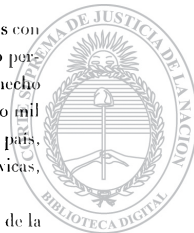
Nos encontramos hoy en el momento preciso para solucionar esta importante cuestión, para establecer sobre base sólida la grandeza nacional. Meditémosla y pongamos manos á la obra.

Al mismo tiempo que he hecho notar la indiferencia de los poderes públicos, en asunto de tanta magnitud como éste, cabe mencionar el hecho significativo de que los congresales de 1817, con la visión clara de las ventajas que nos reportaría la naturalización obligatoria del extranjero, la establecieron en el reglamento provisorio ó primer ensayo constitucional, en el artículo IV del capítulo III, sección primera que dice así : « Todo extranjero de veinte-

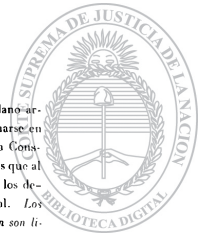


cinco años, que se haya establecido en el país con ánimo de fijar en él su domicilio, y habiendo permanecido por espacio de cuatro años, se haya hecho propietario de algún fundo al menos de cuatro mil pesos ó en su defecto ejerza arte ú oficio útil al país, gozará de sufragio activo en las asambleas cívicas, con tal que sepa leer y escribir ».

Esta es una de las cuestiones que el pueblo de la República debe resolver en estos momentos, con la entera confianza de hacer obra buena, benéfica y patriótica, haciendo honor á aquel voto de los congresales del año 17.







« Art. 21. — Todo ciudadano argentino está obligado á armarse en defensa de la patria y de esta Constitución, conforme á las leyes que al efecto dicte el Congreso y á los decretos del ejecutivo nacional. *Los ciudadanos por naturalización son libres de prestar ó no este servicio por el término de diez años, contados desde el día en que obtengan su carta de ciudadanía. »*

Art. 21. — Todo ciudadano argentino, *nativo ó naturalizado*, está obligado á armarse en defensa de la patria y de esta Constitución, conforme á las leyes que al efecto dicte el Congreso y á los decretos del ejecutivo nacional.

El espíritu de esta reforma es el de que los ciudadanos naturalizados estén en igualdad de condiciones á los nativos, desde que no existe causa alguna justificada que imponga la necesidad de una postergación.

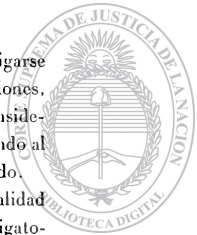


Hoy no tenemos los peligros que podrían abrigarse en la época embrionaria de nuestras instituciones, con una escasa é inculta población, cuando considerábamos que hacíamos una gracia naturalizando al extranjero á quien no mirábamos de buen grado.

Al presente acontece lo contrario. La nacionalidad es un hecho irrevocable y la naturalización obligatoria del extranjero se impone como elemento ponderado de nuestros progresos políticos y de nuestra potencialidad numérica como nación.

Dados los términos de la reforma propuesta para la naturalización obligatoria del extranjero y el poder político y económico de la Nación, no podemos demorar el tan largo período de tiempo del artículo vigente, para hacerlo partícipe de esta carga pública, cuando goza de todos los beneficios que nuestras leyes liberales le acuerdan.

Por otra parte, el carácter pacífico de nuestra nacionalidad, entregada de lleno á la tarea fecunda del trabajo, sin ni asomos de imperialismo, sin perspectivas de querellas internacionales, mucho menos, con las naciones que desbordan la superabundancia de sus brazos en nuestro suelo, nos induce á no abrigar ningún temor de parte de los extranjeros naturalizados.





« Art. 23. — En caso de conmoción interior ó de ataque exterior que pongan en peligro el ejercicio de esta Constitución y de las autoridades creadas por ella, se declarará en estado de sitio la Provincia ó territorio donde exista la perturbación del orden, quedando suspensas allí las garantías constitucionales. Pero durante esta suspensión no podrá el Presidente de la República condenar por sí, ni aplicar penas. Su poder se limitará en tal caso respecto de las personas, á arrestarlas ó trasladarlas de un punto á otro de la Nación, si ellas no prefiriesen salir fuera del territorio argentino. »

Art. 23. — *Toda enajenación de bienes del Estado, compras y demás contratos susceptibles de licitación, se harán precisamente en esta forma y públicamente, bajo pena de nulidad imprescriptible y de responsabilidad personal de los funcionarios, si hubiere defraudación, salvo las excepciones y limitaciones que la ley estableciere.*



Como lo he manifestado en otras partes de este trabajo, nuestra Constitución sancionada por un partido que asumía el poder después de una lucha sangrienta continuada por espacio de un cuarto de siglo, y mandada respetar desde el campamento por el jefe vencedor, sin que se hubiera extinguido aún la llama que incendiara los vastos horizontes de la República, debía adolecer de defectos tendientes á la forma del gobierno fuerte, por lo menos del punto de vista de la cultura que hoy nos distingue y de nuestros crecientes progresos. Así es que, el estado de sitio debió establecerse en la Constitución y él fué instituido como arma de defensa contra el caudillismo, para cimentar la unidad nacional: y en esa hora de anarquía y de dislocación de los pueblos que siguió á la jura de nuestra carta, prestó importantes servicios, dió todo lo que debía dar, y su acción está hoy fuera de lugar.

Montesquieu (1), dice : « Existen en algunos estados donde más se rinde culto á la libertad, leyes que

(1) *Obras de Montesquieu*, t. I, pág. 342.



la violan contra uno solo, en beneficio de todos los demás. Tales son en Inglaterra los *bills* llamados *attainder*. Estas son las mismas leyes de Atenas y de Roma, que se estatúan contra un particular, las mismas que combatía Cicerón, fundándose en que las leyes deben ser generales, no particulares. Lo que me induce á pensar, por lo tanto, que en la vida de los pueblos más libres de la tierra, hay casos en que es necesario poner por un momento un velo sobre la libertad, como se cubre la efígie de los dioses. »

Los recuerdos que trae este genial escritor son aplicables á las sociedades amamantadas en la monarquía, en el gobierno de clases, y en la época en que él mismo dió á luz su *Espíritu de las leyes* (1748). no se tenía el concepto claro de la república cual lo tenemos hoy; por otra parte, él estaba imbuido en la vida guerrera de los pueblos, anterior al ciclo en que vivió y por más que estuviese inspirado en ideas libertarias, respondiendo al ambiente en que actuó, no podía desprenderse de ciertos resabios atávicos de la monarquía, porque es propio del eslabonamiento paulatino de los progresos.

La libertad es palabra sacrosanta en la vida de los pueblos constituidos para disfrutar de sus beneficios, y el velo que la cubra es un atentado á los prestigios

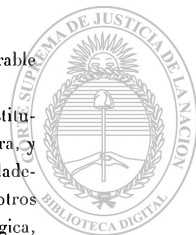
que la ennoblecen, y por lo tanto no es comparable al que oculta la efigie de los dioses.

El estado de sitio tiene su origen en la Constitución francesa de 1791, para los casos de guerra, y en 1807 Napoleón le dió su significación verdaderamente política, tal cual ha llegado hasta nosotros por vía del Pacífico. Alemania, Austria, Bélgica, España y Portugal lo establecieron posteriormente; Inglaterra lo tenía en la forma de la suspensión del *habeas corpus* y Estados Unidos (N. A.) adoptó esta misma forma.

Las naciones europeas se apropiaron de este principio, hijo del gobierno fuerte, porque él se adapta más que cualquier otro á la monarquía : á esas formas de gobierno pertenece, allí debe reinar y prosperar.

De Estados Unidos nada digo, porque en ésta como en muchas otras disposiciones, no ha hecho sino copiar las instituciones de la madre patria, y allí, el Presidente ejerce un poder más fuerte que el rey de Inglaterra.

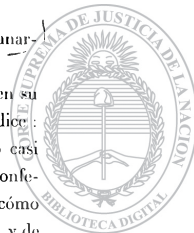
Méjico, las repúblicas de Centro América, Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y la Banda Oriental adaptaron también el estado de sitio á sus instituciones, porque lo necesitaron



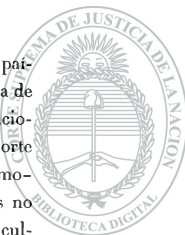
como nosotros para matar el monstruo de la anarquía.

A este respecto, el doctor Amancio Alcorta en su libro *Garantías constitucionales*, página 156, dice: « Cuando estudiamos la situación de todas ó casi todas las repúblicas sudamericanas, debemos confesar con franqueza que no nos damos cuenta cómo pueden ser combatidas las medidas de orden y de tranquilidad dentro de las prescripciones constitucionales. En perpetua anarquía, malgastando las fuerzas vivas del país y sembrando odios y rencores que se transmiten por generaciones enteras, se mira un vejamen en la limitación constitucional, y no se ve el vejamen en la incertidumbre, en el atraso, la ignorancia y la arbitrariedad de la anarquía, que lleva á los puestos públicos y al gobierno los ambiciosos vulgares, cuando no la degradación y el vicio. »

La autorizada opinión transcrita viene en favor de la tesis que sostengo, que sólo la anarquía de los períodos inorgánicos de los pueblos preparados para la república, puede autorizar el estado de sitio. Sólo si, tengo que hacer notar, que si la anarquía ha perdurado largo tiempo en los estados sudamericanos, es porque no han sabido traducir en las cartas orgánicas el principio libertario de la república que ins-



piraron sus anhelos. Las constituciones de estos países son un conjunto de ideas liberales con mezcla de principios monárquicos tomados de las constituciones de las naciones de Europa, ó de la de Norte América, calcada en la libertad inglesa á base monárquica. Si las constituciones de estos países no hubiesen acordado tantas y tan discrecionales facultades al poder ejecutivo, que llega en el receso de las cámaras á poseer la suma del poder público: si hubiesen establecido el linde justo de los poderes que constituyen el gobierno: las restricciones necesarias para crear la independencia de los miembros del Congreso, todo con el fin de hacer práctico el gobierno representativo democrático, con elecciones de verdad, la anarquía hubiese muerto al nacer: porque, lo que más la ha sostenido ha sido el abuso de los gobernantes, en los que han podido más sus vulgares apetitos de mando inmerecido, que las satisfacciones del patriotismo, cumpliendo con los altos deberes del mandato social. La anarquía argentina, en sus últimos estertores agónicos, cuando el caudillismo del interior había desaparecido, ya no fué producto de la barbarie, sino más bien del abuso que los gobernantes han hecho del arma del estado de sitio, y de las intervenciones. El pueblo todo de





las provincias ha presenciado, impasible unas veces, iracundo otras, los enguajes políticos nacidos en la Casa Rosada y puestos en práctica en los estados mediterráneos para exaltar á la primera magistratura á personas menguadas, instrumentos serviles del despotismo. En la anarquía que ya no existe, posterior á la orgánica de la primera hora, el factor ha sido el gobierno que ha llevado la revolución al pueblo, abusando de la poderosa arma del estado de sitio: ésta es la que ha entronizado la arbitrariedad, la degradación y el vicio á que se refería el doctor Alcorta.

Los resortes de fuerza de la autoridad son sólo aplicables á especiales momentos de los pueblos, y cuando las causas que los han declarado necesarios han desaparecido, justo y necesario es que se abandone el ejercicio de esos mismos resortes. Si la incultura de los pueblos los hizo indispensables, la cultura debe rechazarlos, porque, como dijo Echevarría, «no es posible dejar á merced de un solo hombre, la seguridad, la libertad y la vida de todos.»

El senador Elizalde (2), con motivo de un proyecto del ejecutivo declarando en estado de sitio la

(2) *Diario de sesiones de la Cámara de Senadores*, pág. 287-1862.

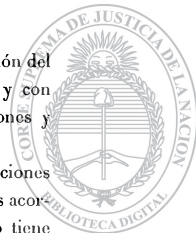


provincia de Corrientes, decía : « La declaración del estado de sitio es sumamente perjudicial, y con ella se han hecho las más grandes violaciones y males. »

Es que, nada hay más grave en las instituciones republicanas que las facultades extraordinarias acordadas á un mandatario, y no otro significado tiene el estado de sitio.

El artículo 29 de la Constitución dice, que el Congreso no podrá conceder al ejecutivo nacional facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarle sumiciones ó supremacías, por las que la vida, el honor ó las fortunas de los argentinos queden á merced de gobiernos ó persona alguna; calificando de infames traidores á la patria á los que formulen ó consientan estos actos: y es el caso de preguntar, ante esta explícita disposición ¿es posible concebir que se lleve á la práctica la facultad de dictar el estado de sitio ó la suspensión de las garantías individuales, dejando á la voluntad de una sola persona determinada, la vida, el honor y las fortunas de los argentinos?

Si la Constitución misma establece en forma imperativa que no hay poder en la Nación capaz de acordar las facultades extraordinarias á ninguna au-

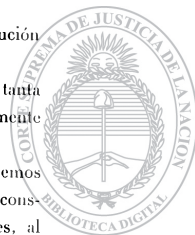


toridad ¿cómo es posible que la misma Constitución las haya establecido?

Estos dos artículos se contradicen, y ante tanta disparidad de disposiciones, tenemos forzosamente que optar por el segundo.

En presencia de hechos evidentes, no podemos ocultar que ésta, así como otras disposiciones constitucionales, responde, más que á otros fines, al objeto de cimentar el entronizamiento del partido unitario en el poder. Así lo demuestra el inciso 20 del artículo 83, suprimido por la convención de 1860, que decía : « Aun estando en sesiones el Congreso, en casos urgentes en que peligre la tranquilidad pública, el Presidente podrá por sí solo usar sobre las personas, de la facultad limitada en el artículo 23 : dando cuenta á este cuerpo en el término de diez días, desde que comenzó á ejercerla. Pero si el Congreso no hace declaración de sitio, las personas arrestadas ó trasladadas de uno á otro punto serán restituidas al pleno goce de su libertad, á no ser que habiendo sido sujetas á juicio, debiesen continuar en arresto por disposición del juez ó tribunal que conociere de la causa. »

El gran Sarmiento, en su discurso en favor de la supresión de este inciso, decía : « Si los habitantes





han de estar sujetos á una disposición que suspenda las garantías individuales permanentemente, estando reunido el Congreso, ¿qué será cuando no esté reunido el Congreso? Si toda persona está á merced del Presidente, en cualquier momento y sin estado de sitio y puede ser sacada á medianoche de su cama sin decirsele la causa, es preciso declarar que el Presidente de la Confederación tiene iguales derechos á los del emperador de los franceses. »

Este grande hombre consideraba la enormidad de esta facultad, tan sólo del punto de vista de poder ser llevada á la práctica mientras el Congreso funciona, pero no le inquietaba en lo más mínimo la aplicación de la misma facultad en el receso de las cámaras con un decreto de estado de sitio.

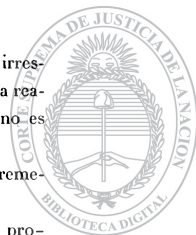
« La mejor administración como la mejor medicina, es la que deja obrar á la naturaleza », ha dicho con sobrada razón el genial Alberdi (3). Así, pues, cuando hemos llegado á la mayor edad : cuando la cultura de un pueblo como el nuestro ha alcanzado un grado superior : cuando sus querellas las dirime en forma ecuánime no obstante los abusos de los poderosos obsecados en regimenter al congreso y las

(3) *Obras completas*, t. III, pág. 541.

legislaturas de los estados para imponer una sola voluntad suprema; cuando despejado el horizonte político de los primeros tiempos, la razón pública ha hecho camino, y secundada por el hilo eléctrico y las cintas de acero que ponen á los pueblos en contacto inmediato para el comercio de ideas y de cosas, ha consolidado la unidad nacional; cuando la población y los enormes capitales ingresados día á día, fortifican nuestra energía económica, y hemos entrado de lleno á labrar la felicidad de todos y de cada uno en un ambiente de paz y de franca confraternidad; en tales circunstancias, no es dable dejar subsistente en nuestras instituciones el estado de sitio, arma imperial, para dejar al pueblo en pleno goce de su vida, honor é intereses, y que propenda, en procura de los mismos, por acto propio á cimentar la paz, el orden y el progreso.

En el supuesto improbable de un ataque exterior, el estado de sitio, en las condiciones actuales, no presta beneficio alguno para la defensa del país, porque es perfectamente innecesario. Si tal cosa aconteciera en el receso del Congreso, este alto cuerpo puede encontrarse sesionando antes de las veinticuatro horas de producido el hecho, y todas las leyes que con este motivo se dictaren serían tan respetadas





ó más que bajo el imperio de la fuerza y de la irresponsabilidad, porque la unidad nacional es una realidad indiscutible y el patriotismo argentino no es planta exótica.

Si se trata de conmoción interior, es peor el remedio que la enfermedad.

¿Por qué tenemos aún conmociones en las provincias?

Porque los gobernadores no son los delegados de la soberanía popular, ni permiten ninguna manifestación de sus derechos, cual si estuviesen en un permanente estado de sitio.

¿Cuál es la razón de este orden de cosas?

La presidencia de la Constitución; el supremo elector, el «supremo jefe de la Nación», del Congreso, de la justicia criminal, del ejército de mar y de tierra y patrono de la iglesia católica, apostólica, romana.

El Presidente derroca gobernadores con sus huestes, y con las mismas protege las arbitrariedades de estos mismos, y es natural y justo que el león dormido, ruja al despertar, cuando la algazara es gorda; y cuando el rugido es bravo, para eso está el estado de sitio, á cuya sombra prospera el despotismo.

Así es que el Presidente es el autor de las conmo-

ciones interiores y el que dicta el célebre estado de sitio. De manera que, si suprimimos el estado de sitio y algunas de tantas supremacías de que está adornada la presidencia, habremos terminado con las conmociones interiores, sin estado de sitio y sin intervenciones.

Finalmente, debo hacer notar que los alcances del estado de sitio de nuestra Constitución han ido más lejos de las facultades acordadas en las constituciones de las cuales la hemos tomado.

En la carta orgánica de España de 1812, la más liberal y adelantada para su época y aún para hoy mismo, razón por la que vivió lo que un lirio (4), contiene una disposición entre otras muchas adaptables á una perfecta democracia. Me refiero al artículo 11, título IV, que dice: «*No puede el rey privar á ningún individuo de su libertad. El secretario del despacho que firme la orden y el juez que la ejecute, serán responsables á la Nación, y castigados como reos de atentado contra la libertad individual.*»

«Sólo en el caso de que el bien y seguridad del

(4) Desde el 19 de marzo al 4 de mayo de 1814. Fernando VII la sustituyó por el poder absoluto. El 9 de julio de 1820 la puso en vigencia, obligado por la insurrección militar: y en octubre de 1823, la intervención francesa la declaró insubsistente.

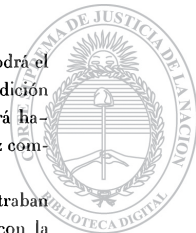


Estado exijan el arresto de alguna persona, podrá el rey expedir órdenes al efecto; pero con la condición de que dentro de cuarenta y ocho horas deberá hacerla entregar á disposición del tribunal ó juez competente. »

Nuestros hombres de primera fila se encontraban tan encantados con la revolución francesa, con la Constitución de Estados Unidos, calcada en principios de libertad á base de clases de Inglaterra, y con la de Chile, desde donde Alberdi nos presentó sus *bases*, que no fijaron su atención en la disposición transcrita.

Comprendiendo Alberdi que « no se andan de un salto las edades extremas de un pueblo »; que salido de la monarquía, la Constitución debe tenerla á ella en el fondo y ser republicana en la forma, como lo era la de Chile, la cual le merecía grandes elogios, « por la energía del poder del Presidente, acordada para las garantías públicas que la monarquía ofrece sin faltar á la naturaleza del gobierno republicano », nos dió sus bases para la Constitución con un fondo eminentemente monárquico, á sabiendas.

« Yo no vacilaría en asegurar que de la constitución del poder ejecutivo especialmente depende la suerte de los estados de la América del sur.





«Dad al poder ejecutivo todo el poder posible, pero dádselo por medio de una Constitución.

«Este desarrollo del poder ejecutivo constituye la necesidad dominante del derecho constitucional de *nuestros días* en Sud América» (5).

Alberdi tenía razón del punto de vista de la época en que actuó; era necesaria la organización del país y conveniente también lo era seguir la correspondiente gradación de los progresos políticos, como acontece en el histórico momento del centenario de la emancipación argentina.

Al Presidente debía acordársele facultades propias de las monarquías para que fuese capaz de mover eficientemente el engranaje de la complicada máquina gubernativa, y saliendo de las zarzas y malezas, pudiéramos llegar al llano para reponer allí las fuerzas perdidas y respirar el ambiente de libertad auspiciado por los patriotas de 1810. Entre esas facultades vino la del estado de sitio, cuyo rol está ligado á hechos históricos del pasado, inadecuado al presente y al porvenir.

(5) J. B. ALBERDI, *Bases y Puntos de partida*, página 141. Valparaíso, 1852.



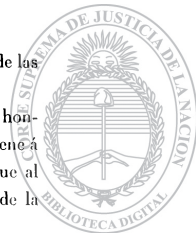
## II

Los poderes que el pueblo delega en sus mandatarios deben ser especificados y restringidos, á fin de que éstos puedan rendir cuenta de sus actos á su mandante, máxime en los organismos democráticos representativos como el nuestro, porque los poderes discrecionales son propios de las monarquías.

La administración de los cuantiosos intereses del Estado no puede ser hecha cual si fuesen los propios haberes : la honradez y la delicadeza personal de los que en ella intervienen deben evidenciarse á la luz del día y en todo momento para que el pueblo tenga la suficiente confianza en sus procederes y en la ejecución de las leyes que lo gobierna.

Este artículo viene á llenar una necesidad sentida en la administración de la cosa pública. La prensa denuncia constantemente operaciones de compra y de venta privadas, de cosas que son materia de licitación pública, y como la Constitución no estatuye esta prescripción, el funcionario público escucha ó no la voz de alarma emitida y se consuman los negocios lícitos ó ilícitos y todo el engranaje sigue por el





mismo camino que ha dado tanto que decir de las administraciones anteriores.

El funcionario público no solamente debe ser honrado, sino también parecerlo y este artículo viene a ser una especie de patente de limpieza, porque al menos escrupuloso lo encarrila en la senda de la honradez.

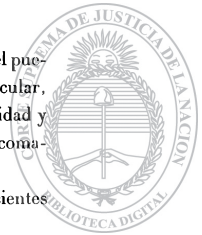
No se encuentran antecedentes al respecto en los organismos de los pueblos basados en la monarquía, porque éstos tienen en todas sus disposiciones el sello del absolutismo, por más que se llamen constitucionales; pero felizmente, los tenemos en casa.

Las constituciones de Córdoba (art. 32), Entre Ríos (56), Corrientes (35), Tucumán (38), Mendoza (37), Catamarca (55) y Jujuy (38), contienen la misma disposición del artículo que propongo, como óbice á los probables abusos del poder. Santiago consiguió también esta misma disposición en el artículo 48 de la Constitución de 1884, pero, por un espíritu poco delicado, antes que de progreso institucional, lo suprimó en la última reforma.

No necesito penetrar al detalle de hechos y cosas que han pasado y que son del dominio público para demostrar la necesidad y bondades de este artículo. Es evidente que las operaciones de la índole de las

que él contiene, á base de los dineros con que el pueblo contribuye para el progreso general y particular, deben ser realizados con la mayor escrupulosidad y honradez, sin pagar tributo á la amistad ó á la camaradería política por parte de los funcionarios.

Creo que estas simples reflexiones son suficientes para hacer viable la existencia de este artículo.



*« Art. 24 — El congreso promoverá la reforma de la actual legislación en todos sus ramos y el establecimiento del juicio por jurados. »*



Este artículo debe suprimirse por las razones que paso á exponer.

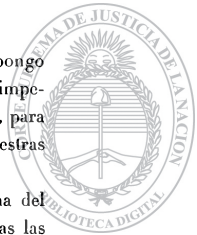
La primera parte se refiere á la reforma de la legislación anterior á 1853, la cual es perfectamente innecesaria del punto de vista de aquella misma época, en atención á las atribuciones acordadas al congreso por el artículo 67 de la Constitución, y lo es hoy con mayor razón, porque no nos queda sino recuerdos de la tempestuosa jornada de casi medio siglo desde el día de nuestra emancipación política. Así es que, lógicamente, la primera parte del artículo debe ser suprimida.

La segunda parte es la que se refiere al establecimiento del juicio por jurados.

Suficiente es considerar la reforma que propongo relativa á la organización de la justicia y á su imperio exclusivo en todo el territorio de la nación, para que se vea con cuánta razón debo excluir de nuestras instituciones el juicio por jurados.

No dependiendo la justicia en forma alguna del poder ejecutivo y siendo ella una sola en todas las provincias y territorios federales, con una misma ley y un solo procedimiento, su soberanía, dentro de su esfera de acción, es indiscutible y por lo tanto es excluyente de toda otra forma de justicia. Precisamente, esta organización está calculada para que rijá un solo criterio en la aplicación de las leyes, y para que sepan todos y cada uno de los habitantes de la nación, que ante una justicia recta y ponderada, es necesario amoldar sus disidencias, sin las desagradables consecuencias de pretensiones desmedidas no satisfechas.

Desde que hemos organizado la justicia, sancionado códigos y constantemente dictamos leyes, que imponen obligaciones, establecen derechos y fijan procedimientos, las dificultades que se presentan en su aplicación, tienen que ser resueltas por los tribunales de derecho, compuestos por personas competentes, doctas, responsables é independientes. La

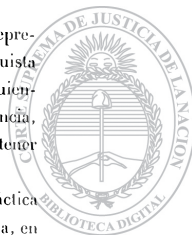


justicia, tal cual la tengo proyectada, creo que representa, en nuestra forma de gobierno, la conquista más grande que es posible anhelar. Por consiguiente, el juicio por jurados, que no exige competencia, honorabilidad ni responsabilidad, no puede tener función legal en nuestro régimen de gobierno.

Cuando en 1870 se trataba de dar forma práctica al juicio por jurados, el doctor Quintana, decía, en el senado : « La institución del jurado es una de las grandes conquistas de la civilización moderna y una de las garantías más firmes sobre que reposan las libertades públicas y privadas. »

Cito estas palabras, para combatirlas y desvanecerlas, porque habiendo sido ellas emitidas por uno de nuestros primeros hombres, podían ser tomadas sin análisis y desviar el criterio público en asunto de tanta importancia.

El juicio por jurados no es conquista de la civilización moderna. Estará bien donde está, pero no es práctico, ni es envidiable para la civilización contemporánea, con su codificación, sus leyes y sus tribunales de derecho constituidos por honorables personas, idóneas y responsables. El juicio por jurados, pertenece á las primeras agrupaciones humanas y fué fruto de la necesidad, no como sostén de las liberta-



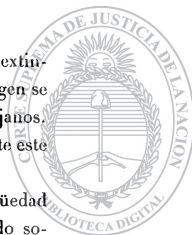
des públicas y privadas : es luz de su época, extinguida en el ocaso ; y por consiguiente, su origen se pierde en el escenario de pueblos y tiempos lejanos.

Una simple reflexión explica suficientemente este hecho.

La organización de los pueblos en la antigüedad ha seguido su proceso en armonía con el estado social de cada uno, con sus progresos, sus medios de vida, sus necesidades y tendencias. El hombre por su natural conformación, es mixto : tiene pasiones constantemente en juego : odia y ama, querella y difiere. En la primera hora, la justicia es ejecutada por él mismo y en la segunda, vióse precisado á entregar sus diferencias al criterio de otros hombres, elegidos de común acuerdo. Este es el juicio por jurados, lo cual representaba un progreso sobre la justicia propia, en la que la razón estaba siempre del lado del más fuerte.

Esta forma de juicio, puede decirse que es la justicia en la tribu ó en familia, más propio de la incivilidad, de la falta de organismos articulados, que del progreso contemporáneo, en que todo está metódicamente organizado, estatuido y simplificado en la gran armazón del mecanismo gubernamental.

Inglaterra, á la caída del imperio romano y bajo



la influencia del virus que éste le transmitiera, en 1225, bajo el reinado de Enrique III, en su Magna Carta, establece esta misma forma de juicio, ratificando una vieja costumbre del pueblo, en momentos en que aun no había alcanzado su organización regular y en pleno feudalismo. Posteriormente, en el *Bill* de Derechos de 1689, también está estatuido el juicio por jurados. Así es que, empieza Inglaterra á organizarse y coloca entre las disposiciones de su primera constitución, esta forma de juicio, dándole fuerza legal por la absoluta voluntad del rey, á lo que había sido una costumbre inveterada, propia de un estado primitivo ó inorgánico, no de una civilización avanzada, nacida y amamantada en el feudalismo, no fué establecida para sostener una libertad que aun no existía.

Los colonos ingleses al poblar Norte América, llevaron sus leyes y costumbres, y entre éstas el juicio por jurados. Se organiza Estados Unidos, toma el cuerpo de nación y sin separarse del ritual político, común á todos los estados, consigna en su constitución este principio con relación á los delitos, con excepción de los de lesa nación.

Estados Unidos, fué lógica al inscribirlo en su carta orgánica, porque las leyes son hijas de la cos-



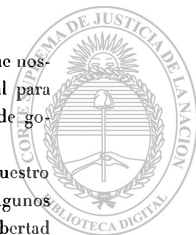


tumbre y de la tradición, pero no es lógico que nosotros transportáramos este gajo institucional para injertarlo en el árbol de nuestros principios de gobierno.

El jurado es planta exótica, no se aviene á nuestro atavismo político, no tiene la ventajas que algunos le dispensan, ni es tampoco atributo de la libertad en un país bien organizado.

Con motivo del mismo debate mencionado de 1870, en el senado (sesión del 22 de septiembre), el doctor Nicolás Avellaneda, ministro de justicia é instrucción pública, hacía notar que el juicio por jurados « es la institución más grave, la más ardua de las instituciones, una institución que viene á chocar con todos nuestros antecedentes del pasado, que tiene que luchar con todos los grandes inconvenientes inherentes á nuestro estado social y á la diseminación de nuestras poblaciones ».

En un libro recientemente publicado sobre práctica constitucional y en beneficio de la institución del jurado, se dice lo siguiente : « El mecanismo gubernamental de una democracia representativa tiene una relación directa con el jurado : este es uno de los resortes esenciales de aquélla. Por medio del jurado defiende el pueblo sus propios derechos, en



cada proceso, como los diputados defienden los intereses de la nación en los debates legislativos. Por eso un pueblo libre debe tener á su cargo los juicios criminales. »

El jurado — en las condiciones de las reformas que propongo — no tiene relación alguna con la democracia representativa.

Cuando se habla de democracia representativa, se expresa la soberanía popular como base del gobierno y la delegación de su poder en las ramas que á éste lo constituyen. El gobierno está formado por los tres poderes delegados: legislativo, ejecutivo y judicial; y por más que este último no tenga el origen directo de su voluntad, porque no es temporario, representa siempre una delegación de las facultades del pueblo, es su representante, el centinela permanente de los derechos individuales y colectivos.

¿Por qué no tenemos la elección de los jueces en nuestro régimen de gobierno, como lo tiene establecido Estados Unidos de Norte América?

Porque no conviene que estos se forjen al calor de los partidos, de grupos ó de facciones del pueblo: pues, la parcialidad los inhabilitaría en su carácter.



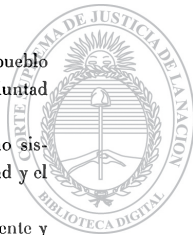
Y ¿á qué quedaría reducida la justicia si el pueblo se reservara el derecho de darse jueces á su voluntad en cada caso?

Iniciaríamos el periodo de la anarquía como sistema, entronizaríamos el crimen, la impunidad y el más perfecto desquicio social.

Si el pueblo, para tener una justicia consciente y científica, como estos tiempos lo exigen, ha instituido los tribunales de derecho, ¿de qué le sirve una justicia profana, por lo general, incompetente é irresponsable como lo sería la del jurado?

La justicia de derecho es resorte esencial de la democracia representativa en nuestro régimen de gobierno, porque ella es símbolo del derecho y constituye el tercer poder del Estado. Cuando el pueblo ha delegado su soberanía en los tres poderes que constituyen el gobierno, no puede amenguar las facultades acordadas, arrogándose atribuciones que desvirtúan los fines de su delegación. El jurado no es resorte esencial de la democracia representativa, por que no es necesario ni indispensable para su regular funcionamiento.

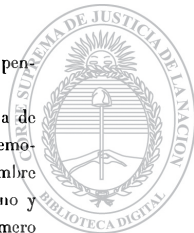
Por medio de la justicia de ley, defiende el pueblo sus derechos, más eficazmente que por el jurado, porque aquella es su propia encarnación, le pertene-



ce, es parte de su cerebro, de su acción, de su pensamiento.

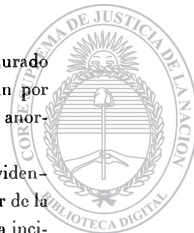
El jurado no es más popular que la justicia de derecho. Cuando se habla de pueblo, en las democracias representativas, no hay distingos : el hombre preparado ó letrado y el inculto ó profano, uno y otro forman parte del pueblo : y cuando el primero ejerce la justicia, lo hace en defensa de los intereses particulares y generales de la nación, según la categoría de los asuntos en que está llamado á intervenir. El juez de derecho es médico que cura las llagas sociales é higieniza el ambiente ; y en este sentido defiende los intereses generales de la nación, así como están defendidos por el Congreso y por el poder ejecutivo, en la esfera propia de cada uno de estos poderes.

En las causas criminales, aparte de la propia cuestión de derecho, actúan hoy, como elementos indispensables de juicio, en muchísimos casos, principios científicos de medicina, de sociología y de otras ciencias más, que no están, ni pueden estar al alcance de todas las capacidades, porque son patrimonio de los especialistas en derecho criminal : luego el jurado, excluyente de la justicia letrada, no está en condiciones de servir los intereses generales, porque faltando

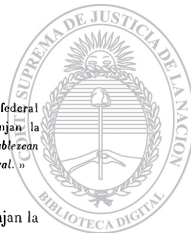


la capacidad necesaria á los miembros del jurado para llenar sus funciones, sus fallos tendrían por base la arbitrariedad y como consecuencia la anormalidad social.

Estas breves consideraciones demuestran evidentemente que es una aberración abogar en favor de la institución del juicio por jurados, propio de la incipencia de los organismos humanos, y por consiguiente, sin rol en la armónica armazón constitucional de poderes delegados por la voluntad popular, expresión genuina de su soberanía.



« Art. 32. — El Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta, ó establezcan sobre ella la jurisdicción federal. »



Art. 32. — El Congreso no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta.

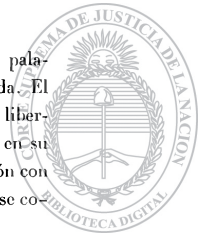
La supresión de esta parte del artículo está de acuerdo con el proyecto de una sola justicia nacional en todo el territorio de la República.

Como, según el artículo 5°, las provincias tienen su justicia propia, el contenido del artículo 32 vigente es lógico, dejando á las autonomías provinciales el derecho de legislar sobre el particular, pero no es así del punto de vista del plan general de las reformas que propongo.

Conforme á este artículo, el Congreso no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta, pero

puede legislar y legisla sobre los abusos de la palabra escrita, así como los de la palabra hablada. El Congreso no puede dictar leyes que coarten la libertad de emitir ideas por la prensa, pero está en su perfecto derecho de establecer penas en relación con la categoría de los abusos que por la prensa se cometan.

Este artículo no dice que no hay abusos en la prensa, y mucho menos que estos abusos no sean delitos punibles; simplemente, establece la más amplia libertad de la palabra escrita; porque la prensa es cátedra de espíritu público, y en cierto modo es un poder que tiene una fuerza poderosa en la opinión. No es posible, pues, limitarla, no hay la censura previa, pero hay y debe haber leyes que clasifiquen los abusos que por su intermedio se cometen, así como la penalidad de que las personas son pasibles.





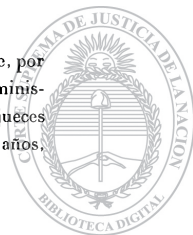
« Art. 34. — *Los jueces de las Cortes federales no podrán serlo al mismo tiempo de los tribunales de Provincia; ni el servicio federal, tanto en lo civil como en lo militar, da residencia en la Provincia en que se ejerza y que no sea la del domicilio habitual del empleado; entendiéndose ésto para los efectos de optar á empleos en la Provincia en que accidentalmente se encuentre.* »

Art. 34. — *El desempeño de funciones en el orden federal, tanto en lo civil como en lo militar, no da residencia en la provincia en que se ejerzan y que no sea la del domicilio habitual del empleado; entendiéndose esto para los efectos de la representación en el Congreso y para optar á empleos ó cargos en la provincia en que accidentalmente se encuentre.*

La supresión de la primera parte del artículo responde á una consecuencia lógica de la reforma que se proyecta al artículo 94.



Al final he agregado la palabra *cargo*, porque, por lo general, para los cargos de gobernador, ministros, diputados ó senadores provinciales y jueces sólo se exige la residencia inmediata de dos años, más ó menos, para los que no son nativos.





« Art. 37. — La Cámara de Diputados se compondrá de representantes elegidos directamente por el pueblo de las provincias y de la Capital, que se consideran á este fin como distritos electorales de un solo Estado y á simple pluralidad de sufragios. El número de representantes será de uno por cada treinta y tres mil habitantes ó fracción que no baje de dieciseis mil quinientos. Después de la realización de cada censo, el Congreso fijará la representación con arreglo al mismo, pudiendo aumentar pero no disminuir la base expresada para cada diputado. »

Art. 37. — La Cámara de Diputados se compondrá de representantes elegidos directamente por el pueblo de *la República Argentina*, á razón de uno por cada treinta y tres mil ciudadanos ó fracción que no baje de dieciseis mil quinientos. *La representación proporcional, servirá de base para ésta, como para todas las elecciones populares.* Á este fin, las pro-

vincias, la Capital, los territorios de *La Pampa*, *Misiones*, *Neuquen*, *Chaco* y *Río Negro*, forman cada uno distritos electorales de un solo Estado; y *Formosa*, *Chubut*, *Santa Cruz*, *Los Andes* y *Tierra del Fuego* formarán un solo distrito, mientras no tengan el número de ciudadanos que permita á cada uno de éstos enviar un diputado.

Después de la realización de cada censo, el Congreso fijará la representación con arreglo al mismo, pudiendo aumentar pero no disminuir la base expresada para cada diputado.

Esta reforma comprende dos principios fundamentales y otros que son de detalle.

Los dos primeros son : la representación proporcional, por una parte : y la representación de los territorios federales, por la otra.

Paso á abordar el tema por su orden.

Nada es más alto y transcendental en la vida de las democracias, que las manifestaciones de la voluntad popular en el comicio, libremente ejercitada, y dirigida con acierto hacia el logro de la eficiencia de su soberanía y de sus grandes destinos.

El voto es la esencia de las deliberaciones populares, es la voz de mando para las unidades del ejército que se llama gobierno ; es la carta-orden que confiere poderes, y simboliza la confianza del mandante en los mandatarios. Esto quiere decir, que es menester,



que la Ley de las leyes, debe contener disposiciones que sean tendientes al más justo, libre y eficaz ejercicio de la voluntad popular. Este es punto capital, punto de partida, que un país nuevo como el nuestro, y en un periodo en que todo auspicia horas de tranquilidad y de sosiego para resolver los problemas del progreso en todas las manifestaciones de la vida nacional, debemos afrontarlo resueltamente, para cauterizar los males que afectan los principales órganos políticos del cuerpo social. Garantizar la libre emisión del voto y ordenarlo en forma justiciera, á fin de que el gobierno que de él surja, se adapte á la célebre máxima de las democracias : *de todos y para todos*, debe ser el ideal de la ley ; en forma nítida y concreta, para que á nadie se le ocurra interpretarla ó torcerla. Esta es mi divisa y á ella voy.

En diversas ocasiones se ha ocupado el Congreso de reformas á la ley de elecciones nacionales, por lo general en cuestiones de detalle, y á excepción del corto periodo en que hemos tenido la elección por circunscripciones, siempre ha prevalecido la elección por listas, con el cómputo de la mitad más uno.

En 1890, el diputado Beracochea, presentó un proyecto de reforma al artículo 37 de la Constitu-



ción, para reemplazarlo por otro que permita la representación proporcional de los partidos.

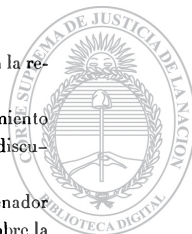
Es esta la única vez que aparece este pensamiento en el Congreso, el cual fué rechazado, sin discusión.

El eminente estadista doctor Avellaneda, senador nacional en 1883, con motivo de un debate sobre la ley electoral, que no hace al caso, y refiriéndose á la interrogación del senador Igarzábal que decía : « ¿ dónde están, salvo algunas excepciones, los hombres que la opinión pública en general considera como los más eminentes del país? », contestó así : « Siento que esta pregunta debe generalizarse en esta forma : *¿ dónde están nuestros adversarios políticos? Sin su presencia, no hay en los recintos legislativos verdadero debate, y las cámaras como el espíritu público languidecen igualmente.*

« Yo los quiero y los necesito, sentados con nosotros en estas bancas. ¡Tenemos tanto que discutir!

« Los queremos y necesitamos todos, porque tienen derechos iguales á los nuestros y para dar plenitud á la vida política!!

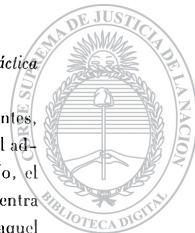
*« No se consolidará jamás una situación por absorciones ni exclusiones, cuando se trata de derechos vitales para los hombres. Las situaciones políticas sólo se nor-*



*malizan y consolidan por el reconocimiento y la práctica de los derechos políticos para todos.*

« Sucede á veces, que los partidos gobernantes, viven bajo un miraje falso; porque no tienen el adversario al frente, creen haberlo suprimido. No, el adversario no está suprimido, cuando se encuentra representado por millares de hombres fuera de aquel recinto. »

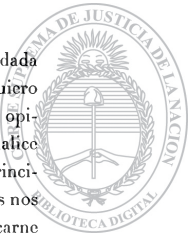
En estos párrafos está comprendida mi tesis. Mi anhelo es, que en el Congreso estén representadas las voluntades y tendencias sociales inspiradas en el engrandecimiento nacional: todos los matices políticos, que son fuerzas reguladoras del timonel que dirige nuestros destinos; todas las intelectualidades ponderadas de la cátedra, que iluminan la alta esfera política y social de las instituciones; todas las energías del comercio, de las industrias y también del gremio obrero que fortifican y mueven incesantemente la savia de la economía nacional. Quiero, que en la vida política argentina no haya fuerzas perdidas, y es preciso, en este caso, que la ley haga la costumbre: que sepan todas las colectividades políticas que todas pueden triunfar en la medida de su capacidad numérica: que la representación proporcional, simboliza una puerta que se



abre para todas las legítimas aspiraciones, escuchada á la influencia personalista de los poderosos. Quiero que en nuestro país haya verdaderas fuerzas de opinión: que el pensamiento argentino se individualice en exponentes de credos representativos de principios netamente delineados hacia el fin que todos nos proponemos: la felicidad social: que se haga carne en el pueblo, la idea de que el gobierno democrático es una mentira cuando no hay partidos que lo forjen al calor de la lucha franca y lo controlen con sus tendencias compensadoras. Quiero y anhelo, finalmente, que los gobernadores no puedan hacer congresales ni gobernadores, y que el Presidente de la República no pueda imponer su sucesor.

Reducidas á la más simple expresión, las reformas que proyecto, se traducen en lo que antecede: abandonar el gobierno monárquico de hecho en que vivimos, y emerger á una nueva vida, con nuevos rumbos y hacia horizontes mejores, que normalicen y nivelen todas las aptitudes, todas las energías, todas las voluntades y condensen el espíritu cívico en la libertad, el orden y el progreso, para todos y para cada uno.

El sistema electoral de una democracia bien organizada debe tender á la coexistencia de partidos orgá-



nicos, y á fomentar la representación de cada uno de ellos en el parlamento, conforme á la respectiva capacidad.

El principio en que se basa el sistema eleccionario en vigencia es tan primitivo como simple, sintetizado en la tan gráfica frase : *la mitad más uno*, ó sea, el *gobierno de unos cuantos*.

Los actuales diputados al Congreso, prescindiendo de que su designación emana de los gobernadores de provincia con acuerdo del Presidente, no son representantes del pueblo de la Nación, sino de un número reducido de él. En efecto, si en la Capital de la República, por ejemplo, hay 50.000 votantes, se presentan 10.000 al comicio y votan 5001 por una lista y 4999 por otra. la lista que corresponde á los cinco mil más uno triunfa exclusivamente sobre la de los cinco mil menos uno. En este caso, que es lo que á menudo acontece, los diputados que se estiman como exponentes de la mayoría, son representantes de una minoría.

Con este sistema de elecciones se pierde el estímulo que pudiera haber para la otra minoría, y es este uno de los principales inconvenientes para la elección, conforme al artículo que comento.

Así es que al régimen electoral en vigencia le falta

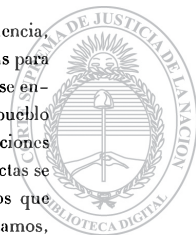




una de las principales condiciones para su eficiencia, que consiste en el estímulo de las fuerzas cívicas para el comicio, y es esa la causa de que los atrios se encuentran desiertos, en momentos en que el pueblo debiera disputar su acercamiento. Á las elecciones no van sino los que lleva la autoridad, y las actas se llenan con la copia de los padrones, entre los que caen algunos que pasaron á mejor vida. Estamos, pues, desde hace bastante tiempo, en el reinado de las unanimidades y de las elecciones canónicas, ¡qué felicidad para los que persisten en tanta belleza!

El gobierno, conforme á la actual Constitución, no es del pueblo, ni representa tampoco á la mayoría: es el gobierno de la época de la Constitución del 53, ó sea del partido unitario, para desalojar del todo al partido federal. Preciso es darse cuenta que los odios existentes entonces, entre esas dos fuerzas en que estaba dividida la opinión, no podían ser más extremos, cuando hasta la alianza con potencias extranjeras era bien mirado, con tal de ir contra el tirano, quien no permitió ultraje alguno ni desmedro de la soberanía nacional.

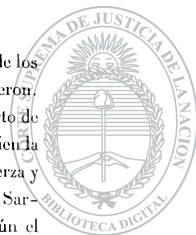
Muy largo tiempo hemos permanecido estacionarios en este sentido, guardando todos los principios de nuestra Constitución, á guisa de reliquia, sin fijar



nuestra atención en los móviles y tendencias de los que la proclamaron y la época en que la hicieron. Un solo partido triunfante, después de un cuarto de siglo de una lucha sangrienta y desigual, es quien la dictaba; ó más bien ella era impuesta por la fuerza y desde un campamento, como lo dijo el gran Sarmiento, en el que no habiéndose disipado aún el humo de la pólvora, no les permitía conocerse los unos á los otros de los mismos triunfantes.

En aquella época, los unitarios hablaban de los derechos del hombre, de libertad, igualdad, etc., y miraban de soslayo y hacia atrás, deseando encontrar un trapo rojo para embestirlo, y los derechos del hombre salían fabricados con cola, y baste decir que se encontraba en la vicepresidencia de la República, quien con más anhelo, había pedido al general Lavalle, la cabeza del inmortal Dorrego. Detrás de la grandiosidad de la portada de la magna carta, se oculta una tiranía que aun la soportamos con paciencia y con valor, preparada para un pueblo que parece dormir, agobiado por el peso de cadenas... y duerme en realidad. ¡Hermoso país! ¡Qué bondad de hombres!

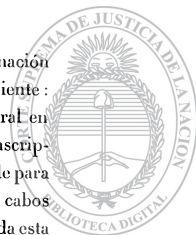
Para demostrar hasta dónde es cierta esta afirmación de que la parte política de la Constitución ha



sido hecha á propósito para la absoluta dominación del partido unitario, mencionaré el hecho siguiente :

Cuando se sancionó la primera ley electoral en 1857, entre las personas que no podían ser inscriptas en el registro cívico, requisito indispensable para el voto, estaban comprendidos, « los soldados, cabos y sargentos de tropa de línea » (art. 7°). Enviada esta ley para la promulgación del poder ejecutivo, ésta fué vetada. El general Urquiza, Presidente de la República y vencedor sobre Rosas y factor principal en la sanción de la Constitución, no pudo mirar con indiferencia el contenido de la parte transcripta del mencionado artículo, y con fecha 27 de septiembre, dirigió una nota-veto al Congreso, sincerando los fundamentos de la negativa. El Congreso empezó por las claudicaciones y el país por las unanimidades. La inscripción de los soldados, cabos y sargentos en el registro cívico fué sancionada, y el pueblo suprimido en las elecciones. En consecuencia, los diputados no eran los representantes de la soberanía popular, sino simplemente los representantes del ejército de la Nación. ¿Quién había de disputar entonces el predominio del partido unitario en las urnas, si éste poseía todos los resortes de la fuerza ?

Este andamiaje cambió en 1863, en cuanto á su



forma, pero no en su esencia. Hoy no elige el ejército de línea, sino las policías provinciales, y no se diga que ésto no es un progreso: los candidatos son hechura del gobernador, y éste, del Presidente de la República. *Tableau.*

La tan decantada libertad de nuestra Constitución para todos los hombres del mundo que quieran habitar el territorio argentino, nació con el paso cambiado; y á semejanza de las monarquias, en las que las instituciones politicas son solamente para la existencia y seguridad de una casta, nuestra Constitución y leyes políticas, se iniciaron sirviendo, pura y exclusivamente, los intereses de un solo partido. Bien, pues, esa misma carta política es la que permite que á su amparo, tengamos hoy presidentes cuya autoridad compite con el zar de las Rusias, y un pueblo servil, ignorante de sus deberes y derechos.

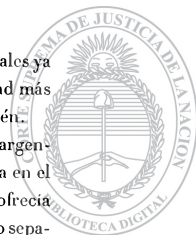
Á la condición : á *simple pluralidad de sufragios*, se le sacó oportunamente todo el jugo que pudo dar, y hoy seguimos explotando el mismo principio con una ingenuidad rayana en candidez, en beneficio del partido del presupuesto, ahondando el germen de la enfermedad que nos permite vivir en plena monarquía, sin otra *soberanía* que la del Presidente de la República.



Felizmente, aquellos dos partidos tradicionales ya no existen, y justo es que el sistema de la mitad más uno, confeccionado *ad hoc*, desaparezca también.

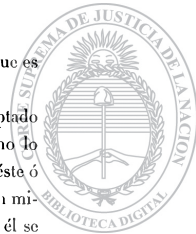
Hace ya bastante tiempo á que la familia argentina está unida, como lo decía el general Roca en el tercer año de su primera presidencia, cuando ofrecía dar de alta á los jefes y oficiales que habían sido separados del ejército por disenciones civiles. Y con este motivo, el doctor Nicolás Avellaneda decía en el Senado : « ¿Qué significa, *la familia argentina unida?* Hoy, la unidad de la familia argentina no tiene sino un sentido práctico, pero profundo y que nosotros debemos contribuir con todos nuestros esfuerzos á hacerlo verdadero, y *es la representación de todos los partidos políticos dentro del Congreso de la Nación.* »

Estas palabras vienen á robustecer mi opinión de que las elecciones, á base de la simple pluralidad de sufragios, fué expofesamente hecha para el partido gobernante, en circunstancias en que *la familia argentina se encontraba desunida, anarquizada.* Quieren decir también, que la familia argentina unida, debe tener en las esferas gubernativas los representantes de todos los partidos y todas las tendencias del progreso social, con la única diferencia de que los hombres que así se expresaban en aquella época, no acer-



taron en el único camino que á ello conduce, que es el de la representación proporcional.

No quiero averiguar en qué países tienen adoptado el régimen electoral que propongo, porque no lo preciso en este caso, y porque la adopción de éste ó de cualquier otro, involucra la necesidad de un minucioso y largo estudio de la sociedad en que él se desarrolla para encontrar las causas y tendencias que lo han impuesto. En Francia, por ejemplo, como lo demostró el diputado Calvo el 83, se instituyó el sistema de la elección por *arrondissements*, para debilitar el enorme poder político de Gambetta, su indiscutible popularidad y en vez de ser elegido por ocho ó nueve millones de votos, lo fuera por los de un simple distrito: este procedimiento estatuido en 1881, no tuvo su razón de ser porque se considerase lo más perfecto en materia eleccionaria, sino en una conveniencia de política local. ¿Por qué Norte América estableció la elección por circunscripción en 1842? Porque, como dice muy bien James Bryce, á Estados Unidos fueron transportadas todas las instituciones inglesas. Inglaterra feudal, desde su origen, tiene los feudos ó circunscripciones como base electoral, y la gran república ha continuado en la tradicional práctica de la madre patria.



¿Por qué no hemos seguido nosotros á Estados Unidos en esta cuestión?

Por la razón que hemos dado más antes: porque nuestra Constitución fué dictada para un solo partido, no como lo dice el preámbulo de la misma: «para asegurar los beneficios de la libertad para todos»: y si como es cierto la Constitución del 53 fué apropiada para la familia argentina desunida, reformémosla, adaptándola á la familia argentina unida, en esta época sin nubes en el horizonte patrio, sin asperezas que dificulten la acción bienhechora del progreso, y sin zozobras que amengüen ó dificulten el proceso del engrandecimiento nacional.

La provincia de Buenos Aires estableció en 1872 el régimen de la representación proporcional, y si hasta ahora no ha dado los resultados apetecidos, es porque en Buenos Aires, provincia la más rica y grande de la Nación, no hay libertad, como no la hay en ninguna provincia argentina. Buenos Aires experimenta también los males de la enfermedad presidencial: jefatura única, componenda, suma del poder público, etc., y como complemento, la creencia de haber hecho un gobierno históricamente bueno, irreprochable, modelo. Pero, esto no es posible, porque no es cuestión de voluntad: cuando el

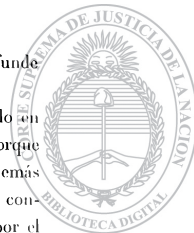


molde es imperfecto, el bronce que en él se funde adolece de iguales defectos.

La representación proporcional no ha dado en Buenos Aires todos los frutos de que es capaz, porque en cuanto á sus libertades, está como todas las demás provincias, oprimida por un chaleco de fuerza, confeccionado por la Constitución y abotonado por el presidente.

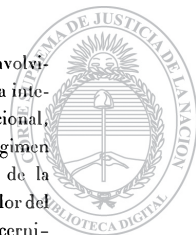
No tengo necesidad de penetrar al detalle para explicar la forma de aplicabilidad de la representación proporcional, porque esto es materia de una ley que debe reglamentarla y porque este punto está suficientemente esclarecido por verdaderas autoridades en los debates habidos en la Legislatura de Buenos Aires y hasta se ha escrito libros en que la cuestión está dilucidada ampliamente y con éxito feliz.

Para terminar con esta parte del artículo en cuestión, debo hacer notar que, aparte de que con este régimen, en la alta dirección del gobierno estarán representadas todas las aptitudes y las diversas tendencias del espíritu público, en entera y franca libertad de acción, por la eficiencia de la dirección conjunta, tiene la virtud de concretar el pensamiento político de cada agrupación ó partido y de conservarlo, puesto que todos tienen acceso en la cosa pública.





Los pueblos libres necesitan para el desenvolvimiento regular de sus progresos, en su política interior, no la uniformidad del pensamiento nacional, no el predominio de las unanimidades ó régimen electoral canónico; precisan el predominio de la idea modelada en la controversia, nacida al calor del debate parlamentario de buena ley, del discernimiento juicioso que analiza y reúne los elementos que forman un conjunto pulido y acabado del pensamiento. Esto se consigue con partidos de principios, de banderas inconfundibles. Como la cuestión económica es una de las principales, y dado el modo de ser fiscal de todos los países: proteccionista aduanero, todos los que se encuentran afectados por este sistema, que constituyen la inmensa mayoría en todos los países, deben formar al frente: y desde luego, proteccionismo y libre cambio, son dos banderas que perfilan dos partidos de una vida larga y duradera. El socialista ú obrero puede ser un tercer partido, aunque fácilmente puede diluirse en el librecambista de la cátedra. Á semejanza de éstos pueden formarse otros, aun temporariamente, para conquistar principios necesarios para una época dada. Esto es lo que entre nosotros se realizará con el régimen de la representación proporcional y así po-



dremos salir del desaguisado de partidos personales con careta de nombres que no caracterizan una idea ó tendencia definida. La república, la nación, la autonomía, son en la actualidad, pero no deben ser banderas de partido, porque en nuestro estado de progreso, ésto representa un atraso. También tenemos en momentos dados, una fórmula muy conocida que hace tantos estragos como la fiebre amarilla : *partidos unidos, unión provincial, coalición, partido moderno, independiente*, etc. Esta clase de partidos no son de existencia legal, sino momentánea, de la época de los repartos de bancas ó de componendas para hacer gobernadores ó diputados al Congreso. Los únicos partidos de principios inconfundibles que hemos tenido en el país, son el federal y el unitario. Cada uno sintetizaba una forma especial de gobierno republicano. Después de sostenido con altura el partido federal con el inmortal Dorrego, degeneró con Rosas, y federal era sinónimo de sangre. Triunfante el partido unitario organizó el país en forma federal, según unos artículos, y según otros, aseguró el unitarismo de hecho en que vivimos, con general contentamiento de todos, intelectuales y analfabetos, incapacitados de votar libremente, y con la creencia de que nuestra Constitución es la obra más

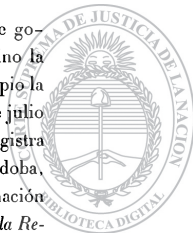


acabada en materia de libertades públicas, de gobiernos dé opinión, etc., etc., cuando no es sino la unidad de régimen como se llamó en un principio la forma unitaria de gobierno. *La Prensa* del 9 de julio del próximo pasado año, que tengo á la vista, registra el siguiente telegrama, no desmentido : « Córdoba, julio 8. Los diarios oficiales aplauden la designación del senador Palacio, hecha por el Presidente de la República, para la gobernación de Santiago. » *La Razón*, diario clasificado de oficialista, en su número 1016 del 6 de julio, dice : « El doctor Santillán (1) y su consejero don Napoleón Barraza, deben entrevistar-se esta tarde con el Presidente de la República para convenir la nueva fórmula gubernativa que satisfaga las conveniencias de la política nacional y provincial ». Menciono estos antecedentes, por tratarse de la designación más reciente de gobernador.

¿No es ésto acaso, una burla sangrienta inferida á la forma federal de gobierno, á las autonomías provinciales y al país todo ?

Este es el fruto de la obra de un solo partido,

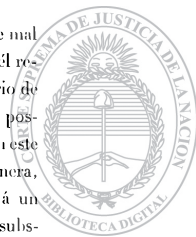
(1) El gobernador Santillán salió de fuga, de incógnito de su provincia, ~~pre~~dejándola en acefalía, conduciendo á un individuo incapaz para presentarlo al templo en calidad de candidato para sucederle, y como la pildora era tan grande, felizmente, no pasó.



adueñado del poder como de cosa propia, y este mal es el que se necesita arrancar de cuajo, porque él representa un sistema en auge. El partido unitario de la Constitución, con diversas denominaciones posteriores ha continuado siempre gobernando. En este último periodo se gobierna de la misma manera, pero sin un partido definido. Hemos llegado á un periodo de perfecta disgregación política, de substancia atómica, pero hay siempre una serie de viejos servidores (*sic*) los notables del país, entre los cuales es preciso elegir á los que han de hacer el *sacrificio* de dirigir los destinos de este hermoso país, poblado por cinco millones de hombres mansos que tienen la dicha de que un solo hombre piense y ejecute las cosas para evitarles molestias.

No ! Esto no es posible. Es necesario salir cuanto antes de este estado cívico morbosos, y á ésto tiene la representación proporcional que propongo.

El artículo en vigencia, dice, que la elección de representantes será hecha « por el pueblo de las provincias y de la Capital, que se consideran á este fin como distritos electorales de un solo Estado » y en esta virtud el pueblo de los territorios federales queda excluido de la representación, porque éstos no son parte integrante de las provincias ni



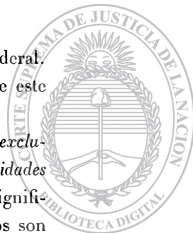
están contiguos al territorio de la capital federal.

¿Cuál es el « solo Estado », á que se refiere este artículo ?

Es la *nación argentina*, el Estado-nación, *sin exclusión de territorio alguno, ni de habitantes de localidades determinadas*. La letra y espíritu del artículo significan una sola y misma cosa, que los diputados son los representantes del pueblo de la nación, y como los ciudadanos de los territorios federales son parte integrante del pueblo de la Nación, no pueden estar excluidos de los derechos políticos que la constitución les acuerda.

Este artículo ha necesitado ser interpretado racionalmente de esta manera, para salvar la incorrección con que se procede, considerando la población de los territorios como perteneciente á otra nación distinta de la nuestra.

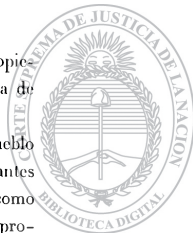
El extranjero que vive en las provincias ó en la capital federal, tiene representantes en el Congreso, aunque él no esté habilitado para asistir al conicio, y el ciudadano que desafía innumerables peligros, puebla y torna los desiertos de los territorios en fuentes de labor y de prosperidad, es un desheredado del pueblo de la Nación. Basta enunciar el hecho para que el menos preparado en estas cuestiones, se



dé cuenta que tal proceder importa una impropiedad y más que ésto, una negación ó ignorancia de lo que se entiende por pueblo de la Nación.

Conforme al artículo que comento, es el pueblo de la Nación Argentina el que elige representantes al Congreso, considerando á cada provincia como un distrito electoral, porque el 53, en las 14 provincias estaba comprendido todo el territorio que constituía la Nación. Como los actuales territorios federales eran parte de las provincias colindantes, en esa época, quiere decir que la población que éstos tuviesen estaba comprendida en la representación. Y por otra parte, si los diputados son, por el espíritu mismo del artículo, los representantes del pueblo de la Nación, ¿cómo es que el pueblo de los territorios está desheredado de los beneficios que comporta el derecho de representación ?

Lo más curioso en este asunto es que, en la convención de 1898, reunida expresamente para reformar este artículo, no se escuchó una sola voz en favor de esa parte del pueblo argentino huérfana, sin derechos políticos, como los parias ó plebeyos de Roma, pero sirvió para acrecentar considerablemente los gastos de la administración con el aumento de representantes y ministerios y el consiguiente

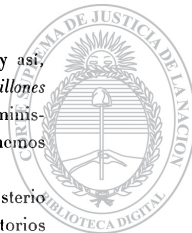


cortejo ó ejército de empleados inferiores; y así, mientras en 1897 hemos invertido *ochenta millones* en los gastos ordinarios del Congreso y de los ministerios, en 1907, por los mismos conceptos hemos gastado *ciento treinta millones* :

Conforme al censo supletorio que el ministerio del Interior mandó levantar en 1905, los territorios federales contienen una población de 193.550 habitantes, de los cuales, sólo una cuarta parte comprende el elemento extranjero.

Á la fecha esta población ha crecido y sin duda alguna excede de doscientos mil, y no es dable que permanezca ajena á la participación que le corresponde en la dirección de la cosa pública, en la esfera gubernativa donde se debaten los intereses de todos.

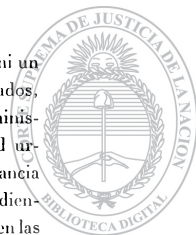
Los representantes de los territorios, habitantes de los mismos, levantarían su voz para hacer conocer el estado de cada uno de ellos, sus progresos y sus necesidades á fin de que el poder público lleve su acción eficaz en bien de ellos, promueva el crecimiento de sus riquezas, el aumento y la cultura de sus habitantes. Hoy los territorios federales se gobiernan desde el ministerio del interior y como es consiguiente, están mal gobernados. Los agentes de éste que llevan el título de gobernadores, no lo son



sino en el nombre, porque no pueden gastar ni un peso fuera de la suma asignada para los empleados, sin la correspondiente y previa autorización ministerial. Los gobernadores hacen ver la necesidad urgente de acometer obras públicas de importancia para los mismos y las solicitan, se forman expedientes que siguen una larga tramitación nacional, en las reparticiones de la administración nacional, se cambian ministros y los expedientes marchan al archivo. Si los territorios tuviesen representantes en el Congreso, ésto no marcharía en esta forma y sus progresos tendrían, á no dudarlo, una realidad pasmosa.

La clasificación que hago de la Pampa, Misiones, Neuquén, Chaco y Río Negro, como distritos electorales, responde á que, teniendo cada uno de ellos: 56.575, 39.978, 23.901, 21.132 y 20.147 habitantes, respectivamente, están habilitados para enviar representantes al Congreso de conformidad al número de 33.000 habitantes, ó fracción que no baje de 16.500, que fija el artículo en cuestión.

Como los territorios de Formosa, Chubut, Santa Cruz, Los Andes y Tierra del Fuego, no están en las condiciones de los anteriores, englobo su población, á fin de que el pueblo de estos territorios tenga también su representante.

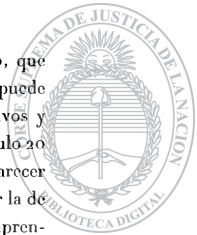


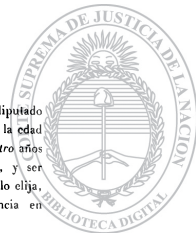


Como la palabra *pueblo*, en sentido político, que es al que se refiere este artículo, no tiene ni puede tener otra acepción que la de *ciudadanos*, nativos y naturalizados, y consecuentemente con el artículo 20 sobre naturalización obligatoria, hago desaparecer la expresión «habitantes», y la substituyo por la de «ciudadanos», porque en la primera están comprendidos también los transeúntes, sin voz ni voto en las deliberaciones políticas de la nación.

Es por esta razón que digo que la representación debe ser hecha de un diputado por cada treinta y tres mil ciudadanos, en vez de igual número de habitantes.

Modifico también la forma de la primera parte del artículo, para mayor claridad, porque es conveniente que así sea. El que elige es el pueblo de la Nación, el pueblo de la República Argentina, dividido en secciones ó distritos electorales.





« Art. 40. — Para ser diputado se requiere haber cumplido la edad de veinticinco años, tener cuatro años de ciudadanía en ejercicio, y ser natural de la provincia que lo elija, ó con dos años de residencia en ella. »

*Art. 40. — Todo elector puede ser diputado al Congreso, dentro de las condiciones siguientes : ser ciudadano civil ó militar ; haber cumplido la edad de treinta años, ser natural de la provincia que lo elija, ó no siéndolo, que tenga dos años de residencia inmediata en ella, y cinco años de ciudadanía en ejercicio ; la residencia de veinte años consecutivos, aunque no tenga la inmediata, lo coloca al oriundo de otra provincia en iguales condiciones al nativo ; pagar contribución directa de doscientos pesos desde dos años antes de la elección ó disponer de una entrada anual de cinco mil pesos.*

Las reformas que proyecto á este artículo se explican por sí mismas.

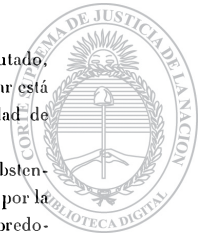
La razón de que todo elector puede ser diputado, es obvia. El ciudadano incapacitado para votar está inhabilitado para ser elegido, porque la calidad de elector es correlativa de elegible.

Es costumbre inveterada entre nosotros la abstención del ejercicio cívico del comicio, razón por la cual se ha entronizado con mayor fuerza el predominio de las imposiciones gubernativas, y la calidad de ser elector obliga á los aspirantes á cargos electivos, á no ser indiferentes á los actos comiciales.

Además de ser justa esta condición es también educativa, principalmente para los que están llamados á dirigir los destinos del país y como ejemplo para los demás.

La inscripción de esta condición tiene antecedentes en constituciones modernas de varios países.

La constitución del Brasil, de 24 de febrero de 1891, dice : « Las condiciones de elegibilidad de los miembros del Congreso nacional son las siguientes : estar en posesión de derechos de ciudadano brasileño y estar inscripto como elector ». El artículo 6º de la ley orgánica, sobre elección de diputados de Francia, del 30 de noviembre de 1875, dice : « Todo elector es elegible ». El artículo 36 de la constitución del Japón, de 11 de febrero de 1889, dice :



« La Cámara de representantes está compuesta de miembros elegidos por el pueblo, conforme á las disposiciones de la ley electoral », y la disposición pertinente de esta ley, dispone : « Todo elector es elegible siendo de treinta años cumplidos. »

Podemos decir entonces, en verdad, que éste es ya un principio que merece los honores de la universalidad en materia eleccionaria.

La modificación que se refiere á la edad, es de todo punto conveniente.

Cuando el hombre que ha recorrido una media centuria, hace el balance de las aptitudes y de la discreción y juicio en el ejercicio de ellas, por periodos escalonados, desde que se consideró mayor de edad, los reproches que á sí mismo se adjudica por causas de incapacidad é inexperiencia están en razón inversa de los años transcurridos. Esta sola reflexión demuestra con toda evidencia que un diputado de veinticinco años no puede estar á la altura de las funciones que representa, y si hemos tenido algunos de esa edad de condiciones sobresalientes. — lo que es para mí ignorado — esto no prueba nada en contrario, porque la excepción no hace la regla.

La Cámara de diputados, así como la de senadores debe ser formada por personas que, por su edad,

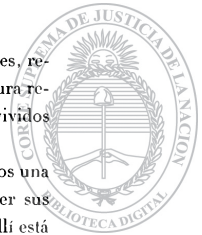


aparte de otras calidades que les son inherentes, representen juicio en el discernimiento y madura reflexión, condiciones que sólo con los años vividos inteligentemente se adquieren.

El Congreso no es un asilo, ni mucho menos una máquina en la que la inexperiencia debe hacer sus ensayos : es cátedra del perfecto ciudadano, allí está el pensamiento directriz argentino, allí se condensa el espíritu público de la nación y se elaboran las leyes que rigen nuestros destinos, el bienestar de la sociedad del presente y del porvenir : el Congreso es la dinámica económica, política y social de la nación, y por consiguiente, sus renovaciones deben hacerse con elementos de buena ley, por la edad, por el saber y por condiciones de honorabilidad.

Las condiciones de competencia y de honorabilidad que no se estipulan, están sobreentendidas, y la mayor edad es elemento que garantiza su eficiencia en el ejercicio de tan alto cargo.

En Francia y en algunos otros países se exige la edad de veinticinco años para diputado y cuarenta para senador, y en Italia, etc., se ha establecido la de treinta para el primero y cuarenta para el segundo. Evidente es que este último país ha sabido calcular con más acierto la correlación que existe y el

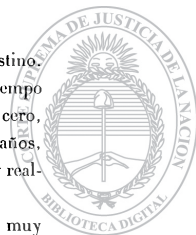


número de años que separa uno y otro destino. Diez años de diferencia es un periodo de tiempo racional, y si se quiere, ésta podría reducirse á cero, tomando la edad de treinta y cinco ó cuarenta años, pero nunca llevarla á quince ó más, porque hay realmente desproporción.

Además de las razones expuestas, considero muy conveniente dignificar el alto cargo de representante del pueblo, estableciendo condiciones que hagan menos accesible la inexperiencia y la incapacidad, porque, en el caso contrario, en la dirección de la cosa pública hay fuerzas que actúan en contra de los propósitos de una definida y sana política, y la edad de treinta años que estipulo es una de estas condiciones.

La modificación consistente en cinco años de ciudadanía en ejercicio para el extranjero naturalizado, en vez de cuatro que exige la constitución, responde á permitir que el aspirante pueda encontrarse más imbuido en nuestras prácticas políticas y más asimilado á nuestra nacionalidad. Imprudente sería permitir el acceso á la alta dirección del país á ciudadanos naturalizados en el mismo instante que se incorporan á la ciudadanía.

La disposición vigente exige cuatro años de ciu-



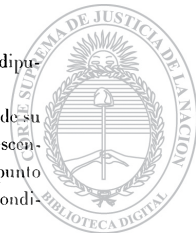
dadania en ejercicio, porque establece la residencia de dos años para optar á la naturalización voluntaria, y si se establece la naturalización obligatoria con residencia de cuatro años, racional es poner cinco años más para hacerlo participe en la dirección política del país.

Por otra parte, la exigencia de cinco años, en este caso es correlativa de la de diez para el cargo de senador.

La calidad de nativo que adquiere el hijo de otra provincia con la residencia de veinte años consecutivos es conveniente, porque hace perder antiguos resabios localistas y propende á estrechar más el vínculo de unión de la familia argentina, además de ser ella justa. Esta disposición aumenta el número de las personas en condiciones de emerger á las esferas gubernativas, así como las de competencia y honorabilidad.

Una persona que ha permanecido veinte años consecutivos en una provincia que no es la de su nacimiento, á la cual se ha incorporado después de los veinte, es decir, que ha hecho vida de hombre, que ha actuado en política, en el comercio, la industria, ó ejerciendo una carrera liberal, y formando afectos, aunque esté fuera de la provincia, está en condicio-





nes de desempeñar cumplidamente el cargo de diputado.

Hay muchas personas que habiendo salido de su provincia antes de los veinte años, en la adolescencia, inexpertos, han pasado la vida en otro punto de la República, ó en el extranjero y están en condiciones de ser elegidos.

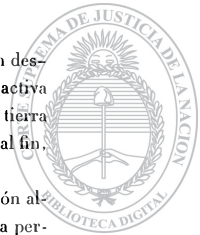
Como se ve, los nativos, en las circunstancias mencionadas, no están más habilitados que los anteriores para responder con mayor eficacia á la confianza depositada.

¿Qué importa la condición de nativo y la de dos años de residencia inmediata no siéndolo?

La condición de nativo y la que le sigue importan el conocimiento que las personas deben tener del estado y necesidades del distrito que les elige para que propendan á su mejoramiento.

Pero, una persona que solamente en la niñez lo ha pasado en su provincia natal, ó el que siendo extraño á ella, la ha visitado sólo dos años, ¿están en mejores condiciones que una que ha vivido los mejores años de su vida, connaturalizado con sus alegrías ó con sus pesares, sintiendo todas las palpitaciones del nuevo hogar, argentino también, retirado por cualquier circunstancia feliz ó adversa?





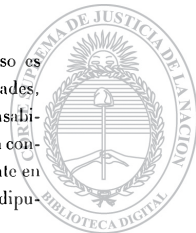
Un hombre en estas condiciones es casi un desconocido en su provincia, porque toda su vida activa y eficiente la ha dedicado á otro pedazo de tierra que quiere y defiende como el suyo propio, y al fin, todo es República Argentina.

La constitución vigente no tiene disposición alguna que tienda á establecer la independencia personal del diputado, como lo ha estatuido para el cargo de senador; lo que demuestra, que para los convencionales del 53 la categoría de las dos cámaras era por demás diversa, cual si se tratara de un cuerpo irresponsable y de otro responsable.

En las monarquías, si se quiere, esta marcada diferencia tiene su explicación, por cuanto el monarca tiene la facultad de disolver la cámara de los comunes ó de representantes que es hechura del pueblo y no así la alta ó senado.

Allí, los miembros de la alta cámara son designados por el monarca, á perpetuidad, y en Francia, conforme á la constitución de 1830, de la que hemos copiado bastante, establece la edad de 25 años para la cámara de los pares (1), y la de 30 para la de diputados.

(1) Porque conforme al artículo 25, « Los príncipes de sangre son Pares por derecho de nacimiento ».



En nuestra forma de gobierno, el Congreso es uno solo, las dos cámaras tienen iguales facultades, y sus miembros los mismos deberes y responsabilidades, y si á los senadores se exige que tengan condiciones de independencia personal, consistente en una posición económica desahogada, con los diputados debe procederse de igual manera.

El Congreso es el más alto poder del estado y es á la vez la verdadera fuerza directriz de la vida de la nación en todas las manifestaciones de su actividad : por consiguiente, los elementos que lo forman, tanto de una cámara como de la otra, deben poseer, sino las mismas, por lo menos análogas condiciones de independencia personal, aparte de las que he esbozado.

La independencia personal es garantía de fiel cumplimiento de los deberes, de sana conciencia, de recto juicio, de dirección inteligente, de sana política y de patrióticos anhelos.

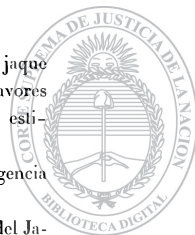
El diputado, así como el senador, necesita disfrutar de un estado económico que le permita pensar y discurrir libremente sin reatos de ningún género, porque sólo de esa manera sabrá llenar cumplidamente la alta misión que del pueblo recibe, y así no oiremos hablar más de *blocks* de diputados.

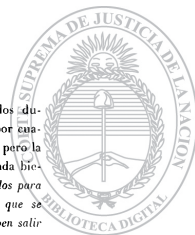
regimentados por gobernadores para poner en jaque á la presidencia ó apuntalarla á trueque de favores que importan nuevas dignidades ó crecidos estí- pendios.

¿ Por qué nuestra constitución no hace exigencia ninguna al respecto para el diputado ?

Porque, con excepción de la constitución del Ja- pon, de 1889, en ninguna de las demás naciones la tienen, y hasta el presente no hacemos otra cosa que copiar literalmente las instituciones extrañas al país, sin miramiento alguno á lo que la razón impone como lo más acertado á nuestro medio, á la verdad republicana y á los progresos de la razón pública contemporánea.

La condición anotada es tanto más necesaria, cuanto que la remuneración del congresal es exigua para satisfacer las más modestas exigencias, y la que se refiere al pago de contribución desde dos años antes al de la elección, es con el objeto de evitar el fraude, en asunto de tan capital importancia.





« Art. 42. — Los diputados durarán en su representación por cuatro años, y son reelegibles ; pero la sala se renovará por mitad cada bienio ; á cuyo efecto los nombrados para la primera legislatura, luego que se reunan, sortearán los que deben salir en el primer período. »

Art. 42. — Los diputados durarán en su representación por cuatro años, y son reelegibles *después del intervalo de un período*. La Cámara se renovará por mitad cada bienio.

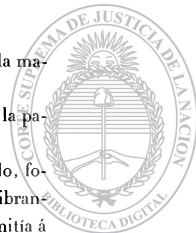
Dos son las causas que informan esta reforma :  
1° garantizar la independencia del diputado, y 2° asegurar la constante y necesaria renovación de los representantes, es decir, la rotación de nuevas fuerzas, á fin de que todos aporten su contingente intelectual, porque el gobierno es de todos, no es de castas, de predestinados ó de nepotes.

Es por demás sabido quiénes son en la actualidad

los más acreedores al cargo de diputado, y la manera como son éstos ungidos ó fabricados.

Respecto á lo primero, me bastará referir la palabra de un candidato en ciernes.

Don Restituto era un hombre bien templado, fogosamente patriota ó patriotero, de palabra vibrante, enérgico y lleno de buenas ideas que las emitía á cada paso y con cualquier motivo, distinguiéndose como muy enemigo del *General*, aunque éste no lo supiera. Así pasó los mejores años de su vida. Hoy frisa en los cincuenta. Después de algún tiempo que no veía á este señor, empecé á frecuentarlo de nuevo y notando que había experimentado un cambio radical en su carácter, ideas, maneras y que hasta su viejo aspecto dantoniano se había transformado ecuanimemente en un tipo compungido, con una mirada indefinida, con apariencias de sordo-mudo, porque por lo general, hablaba muy poco, sin afirmar ni negar sobre las cuestiones de que otros trataran, se me ocurrió decirle cierto día : — He notado, don Restituto, que desde algún tiempo á esta parte, usted debe padecer de una aguda dolencia, que le lleva en mal camino. Usted no habla como lo hacía antes, no opina sobre nada, no critica las malas acciones de los hombres públicos; usted tiene alguna dolen-



cia que le enerva todas las energías de su espíritu, ¿es verdad?

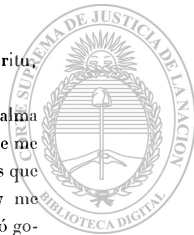
— ¡Error craso! Estoy sano de cuerpo y de alma contemporánea, y la prueba más evidente de que me encuentro en la plenitud de mis facultades, es que he comprendido la época en que actuamos y me aporto á ella. Estoy estudiando para diputado ó gobernador de mi provincia.

Á los príncipes de lo que llamamos democracia les agrada tener cerca de ellos siervos ó esclavos : el carácter no llega al dintel de la gran morada.

Como es consiguiente, otra de las condiciones que favorecen la designación de diputado es la pobreza, circunstancia que garantiza su adhesión hacia el jefe que lo elige.

— Mi tío Cándido está pobre, y por consiguiente, á nadie más que á él debo mandarlo al Congreso, — oí decir una vez á un gobernador de provincia, y en efecto, lo mandó.

Es por demás sabido cómo se hace diputados en la actualidad. Presidente y gobernadores pónense de acuerdo sobre personas de su amistad, parentesco, ó de su cofradía política, adornados de las calidades que preceden, y los últimos encargan del simulacro de elecciones á los comisarios, jueces de



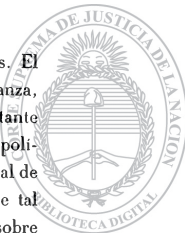
paz y jefes políticos de sus respectivos feudos. El feliz mortal que á este encumbramiento alcanza, desde que á está capital arriba, tiene la constante preocupación de servir incondicionalmente la política del primer magistrado, tutor constitucional de lo que entendemos por soberanía popular; de tal manera que, hasta se evita el trabajo de pensar sobre las cuestiones en debate : uno ó dos atláteres llevan la sagrada palabra, ó sea el santo y seña, y lo demás es cuestión de moverse ó de quedarse quieto, de ponerse de pie ó de permanecer arrellanado en la cómoda butaca.

¿Cuál es la razón de tanta obsecuencia en favor de la persona Presidente?

Salta á la vista : la *reelección*.

¿Cuál es el Presidente que, dado nuestro régimen absolutista de gobierno, no declare acreedor á la reelección al amigo ó pariente que tan decididamente ha servido su política en favor de la intervención á la provincia A, ó de la no intervención al estado B, y le secunda eficazmente en su obsecación de imponer la persona que ha de sucederle en el mando?

Los presidentes creen que sin una mayoría que les pertenezca en el Congreso, no pueden gobernar y tienen razón del punto de vista de los constantes



abusos del poder ejecutivo favorecidos por la constitución y de que el Congreso no es sino una dependencia del *soberano* ; pero esta razón se desvanecería si existiese el firme propósito de hacer gobierno representativo democrático de verdad : si se tuviese el verdadero concepto de la honradez política y de que, cuando falta la confianza de los mandantes, el mandatario está obligado á devolver al pueblo sus poderes.

Con las reformas que propongo, estableciendo la independencia de los diputados y senadores y la autonomía del poder legislativo, los presidentes no tendrían necesidad de esa mayoría, ni podrían hacerla ; bastaría cumplir fielmente con los deberes de ese alto cargo, para terminar su periodo en paz y tranquilidad, dejando á la opinión pública, que hoy no existe y que mañana será un hecho irremediable, la elección franca y sincera del sucesor.

La reelección es un mal y causa, á la vez, de males mayores, es la enfermedad crónica de la política argentina, y la reforma propuesta es uno de tantos remedios que han de curarla con eficacia.

Un diputado gubernista no puede darse el lujo de votar en contra de un proyecto del ejecutivo, porque si lo hace, ese solo hecho basta para el decreto de su no reelección. Así es que, la independencia de



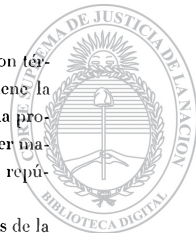


un diputado y la amistad con el presidente, son términos que se excluyen. Un diputado que tiene la conciencia de sus actos y que conforme á ella procede, es considerado como enemigo del primer magistrado, adueñado de los destinos de la república.

Necesario es evitar á todo trance los abusos de la presidencia, para que el pueblo se encuentre en condiciones de ejercitar su legítima influencia y decisión en la elección de sus representantes.

Los constituyentes del '53 crearon la presidencia de la nación con el *sumum* de la fuerza moral y material, para matar el monstruo de la anarquía y hacer efectiva la unidad nacional que los ferrocarriles y telégrafos completaron más tarde, y esas facultades que en aquel entonces fueron bálsamo, son hoy cáncer, y de la peor especie : porque, merced á ellas, los gobernadores de provincia han cerrado el camino á las más legítimas aspiraciones, secundados por batallones de línea enviados ex profeso por el presidente de la república para regimenter diputados cómodos.

La excesiva autoridad del presidente no es ya para la época en que vivimos, lejos de amagos de disolución, preparados para el trabajo reproductor y para

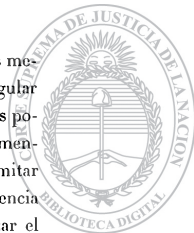


la paz que es fuente de todos los progresos. Es menester deslindar netamente la autonomía y regular funcionamiento de cada uno de los tres grandes poderes en que está dividido el regimen gubernamental, y levantar el nivel moral del diputado. Limitar en cuanto es posible la autoridad de la presidencia es la conquista más grande que puede realizar el pueblo de la república. Imposibilitar la reelección de diputados y senadores á la par de la negación de empleos y comisiones, es decretar la independencia personal del diputado y la honradez de proceder de parte del presidente.

El presidente, conforme á la Constitución en vigencia, gobierna sólo el país : él elige y reelige diputados y senadores, y con un gesto ó una palabra hace saltar desde ministro abajo. ¿ Qué no es cierto ? Es preciso ser ciego para no verlo y mudo para no confesarlo.

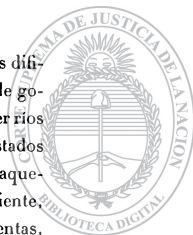
Como nuestra Constitución está calcada sobre la de Estados Unidos, es conveniente hacer ver las causas que contribuyeron á depositar tanta autoridad en la presidencia de la nación.

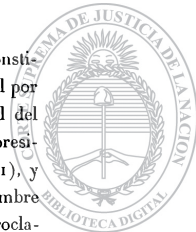
Si bien es cierto que en Estados Unidos no medió un tan largo y sangriento debate para llegar á constituirse definitivamente en nación, como aconteció



entre nosotros, allí hubo también muy serias dificultades. Mientras aquí discutíamos formas de gobierno, y en su homenaje, la barbarie hacía correr ríos de sangre en el extremo norte, allí, los trece estados que se unieron, eran independientes entre sí, y aquellos que, por su situación geográfica inconveniente, la escasez de habitantes y exigüidad de sus rentas, creían ser absorbidos por los más fuertes ó en mejores condiciones, dificultaron de tal manera la unidad que los hombres más eminentes empeñados en ella, como Washington, Franklin, Randolph y otros, pasaron por amargas pruebas y se consideraban fracasados en su empeño.

Estos antecedentes, que imponían la necesidad de un gobierno fuerte para evitar desmembramientos y las tradiciones de raza ó sea la suprema autoridad de la reyesía inglesa, á la que pertenecieron, indujo á los convencionales americanos á investir al presidente con una suma tal de poderes, cual si se hubieran constituido en monarquía. Y á decir verdad, la Constitución de Estados Unidos tiene muchos puntos de contacto con la monarquía inglesa, con la diferencia que el rey no dispone de tanta autoridad como la que tiene el presidente americano.





Cuando se discutió sobre las bases de la Constitución americana, Patricio Henry, convencional por el Estado de Virginia, oponiéndose á la latitud del poder acordado á la presidencia, decia que el presidente podría fácilmente llegar á ser un rey (1), y agregaba : « Si el jefe americano fuera un hombre ambicioso y de talento, ¡ cuán fácil le sería proclamarse absoluto ! Hallándose el ejército bajo su poder, si es un hombre diestro, conseguirá que aquel esté siempre de su parte, para aprovechar una ocasión y llevar á cabo sus designios. »

Bien pues, estos defectos que apuntaba aquel gran personaje, han venido á realizarse en el hecho, en la autoridad presidencial creada por nuestra Constitución, y es éste y no otro el origen de la *depresión ciudadana, del rebajamiento moral de las Cámaras legislativas y el de la muerte del espíritu cívico argentino.*

Asaz duramente hemos criticado todos á los presidentes anteriores y continuaremos en el mismo orden de ideas, mientras la Constitución actual rija nuestros destinos, porque la opinión pública sólo ve, por lo general, los efectos y los actores que los

(1) J. A. SPENCER, *Historia de Estados Unidos*, tomo II, página 175.

exteriorizan, sin llegar al fondo de la fuente de la cual nacen esos mismos defectos : este conocimiento es patrimonio de un reducido número de ciudadanos.

Con excepción de uno sólo, todos los presidentes no han hecho otra cosa que aprovechar con más ó menos sutileza, con más ó menos discreción y tacto las facilidades que la Constitución acuerda al primer magistrado, para satisfacer sus apetitos de mando. ¿Se habrán excedido á veces? Pues, los excesos son también permitidos.

Así es que los defectos políticos de que adolece el pueblo de la república tienen su causa primordial en la Constitución, en el poder absoluto del presidente.

El hombre es orgánicamente defectuoso. Las pasiones son al hombre, lo que la sombra al cuerpo, y por consiguiente es disculpable verle inclinado á lo malo, antes que á lo bueno ; pero, para que esto no acontezca, en favor de los fines sociales, es conveniente establecer obstáculos á las tendencias que son perjudiciales. En consecuencia, corresponde disculpar á los mandatarios que han delinquido y atacar reciamente los principios que vulneran la libertad y la independencia ciudadana.

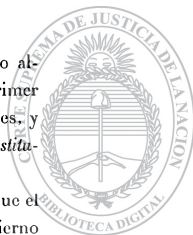


El gran ministro americano Webster, citado alguna vez por el gran Sarmiento, decía : « El primer objeto de un pueblo libre es salvar sus libertades, y esto se consigue por medio de *restricciones constitucionales* y del *deslinde de los poderes públicos*. »

Este es uno de los principios más sabios que el ingenio humano pueda producir aplicado al gobierno de las democracias.

Evitemos la corrupción política, excluyamos las causas que entorpecen la acción independiente del diputado, despojemos al poder central de todos aquellos resortes que le facilitan el abuso, y limitemos netamente el rol independiente en que debe funcionar cada uno de los tres poderes en que está dividido el gobierno general, y podremos encontrarnos, gobernantes y gobernados dentro de los límites de la estricta justicia, de la libertad mejor auspiciada y de la verdad institucional, más sabiamente aplicada.

Recapitulando, es necesario convencerse que la reelección inmediata de los representantes del pueblo, no debe ser permitida, para evitar los graves inconvenientes del incondicionalismo, y también para hacer práctico el gobierno de las democracias fundado en la constante rotación de las personas



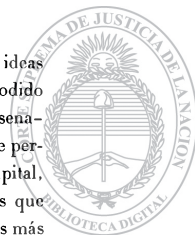
que la forman, y con ellas, la evolución de las ideas que representan. Hasta el presente, no ha podido estrecharse más el círculo: los diputados y senadores no salen sino de un limitado número de personas, tanto en las provincias como en esta capital, y no es extraño contemplar varios ejemplares que llevan más de veinte años en el Congreso, los más con empalmes continuados inmediatamente y algunos con el intervalo del periodo gubernativo de provincia ó de un ministerio nacional, amen de cátedras en colegios y facultades y otro empleos *retenidos*.

¿Y á esto podemos llamar *self-government*?

No, pues. Esto es, *comandita-government*.

La constitución más adelantada que ha tenido la monarquía española fué la jurada en 1812, de la cual nuestros convencionales tomaron el espíritu de algunos artículos, pero no adoptaron ciertas disposiciones que se amoldan más á los principios democráticos. Tal es la que prohíbe la reelección de los diputados, como lo comprueba el artículo 110, título III, que dice: « Los diputados no podrán volver á ser elegidos, sino mediante otra diputación. »

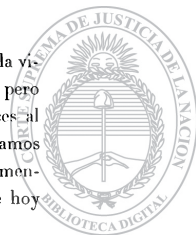
Investigar las razones que tuvieron los convencionales del 53 para estatuir la reelección de los diputados, es trabajo arduo, porque el diario de se-



siones hace constar que el artículo 38 (42 de la vigente), fué sancionado sin discusión alguna, pero corresponde declarar que no estuvieron felices al consagrarlo, porque, no siendo así, no tendríamos el triste espectáculo de las unanimidades parlamentarias, ni la tan grande depresión moral que hoy agobia todas las energías cívicas del país.

La reelección de un diputado, después de transcurrido el intervalo de cuatro años, importará declarar que el agraciado tiene prendas de carácter, de honorabilidad y de competencia bien reconocidas para merecer tal distinción, porque, de lo contrario, nadie procuraría su elección. Lo que importa decir que la medida que propogo, además de ser beneficiosa en favor de la dignidad del cargo y de consultar la base del verdadero gobierno democrático, con la renovación constante de tanto elemento ponderado que tenemos en el país, es, á la vez, un poderoso estímulo para perfilar las condiciones del perfecto ciudadano, en su acepción más amplia, porque lo prepara para aspirar y merecer en justicia.

Yo comprendo que es un poco dura la prueba á que se somete al Congreso invitándole á sancionar la reforma constitucional en esta parte y otras pertinentes y me dirijo á los diputados y senadores de





verdad en cuanto á sus condiciones de ilustración y honorabilidad, para que, identificándose con el patriotismo que las inspira, resuelvan esta cuestión con la satisfacción de haber echado los cimientos de la verdadera libertad política de la república.

He hablado aquí de abusos del poder presidencial, porque la reelección de diputados ó senadores es una de sus manifestaciones más inconvenientes para la vida cívica nacional y para el progreso institucional de la república. Decir reelección y abuso presidencial es una sola y misma cosa.

En suma : la reforma de este artículo importa la nivelación de las aspiraciones y de las capacidades aptas para tan delicadas funciones y la constante renovación de la savia intelectual, en la dirección de la cosa pública, aplicada á los distintos momentos de sus constantes progresos.





« Art. 43. — En caso de vacante, el Gobierno de provincia ó de la capital, hace proceder á eleccion legal de un nuevo miembro. »

Art. 43. — En caso de vacante, el Gobierno de provincia ó de la capital, convocará al pueblo á eleccion legal de un nuevo miembro *hasta completar el periodo, dentro de los quince dias siguientes al de la vacancia.*

Esta modificación responde á no dejar al arbitrio del mandatario la eleccion de la fecha en la que á sus intereses politicos convenga hacer la eleccion, acordando al efecto un término prudencial dentro del cual debe decretarse la convocatoria.

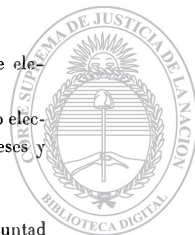
Sucede á menudo que los gobernadores dejan pasar el tiempo indefinidamente sin convocar al pueblo para el nuevo representante, con perjuicio manifiesto para los intereses generales de la nacion, y

en especial para los de la provincia que debe elegirlo.

En el próximo pasado año se han practicado elecciones por vacancias, con retardo de seis meses y hasta de un año, sin causa justificada.

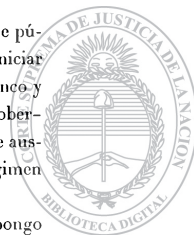
¿Cuál es la causa de esta anormalidad?

La política chica. La condensación de la voluntad popular en el presidente y los gobernadores de provincia. Como en todo lo que es anormal, las aspiraciones se multiplican con ocasión de cada vacante. Los parientes ó amigos políticos del gobernador, ministros, jefe de policía, algunos miembros de la legislatura y otros más de la cofradía, suman dos ó tres docenas de candidatos en el primer momento, y de entre éstos, sucede algunas veces, que llegan á ser pensionistas de la casa de Orates, cuando no pasan á mejor vida. Es preciso haber actuado en provincia para darse cuenta del cúmulo de aspiraciones bastardas, por una legítima, y los inconvenientes que presenta la solución del problema. Se teme herir la susceptibilidad de unos y provocar las incontinencias de otros, y el tiempo corre: el pueblo, como en realidad no elige, permanece indiferente á las tramas del mandatario y la representación sigue incompleta.

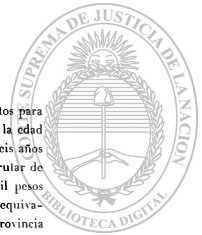


Ante la evidencia de estos hechos que son de pública notoriedad, preciso es que resolvamos iniciar la era de la normalidad cívica, del ejercicio franco y legítimo de los deberes de los gobernantes y gobernados á base de prescripciones terminantes que auspicien y garanticen todos los derechos, del régimen de honradez política, de verdad republicana.

Como antecedentes de la reforma que propongo debo mencionar el artículo 17, párrafo 3° de la Constitución del Brasil, de 1891, y el artículo 16 de la ley orgánica de 30 de noviembre de 1875, de Francia, que dicen, respectivamente : « En caso de vacancia de un miembro de la cámara de representantes, cualquiera que sea la causa, comprendido el caso de dimisión, el gobierno del Estado donde esta vacante se produjera hará proceder *inmediatamente* á una nueva elección. » « En caso de vacancia por muerte, dimisión ú otra causa cualquiera, la elección del reemplazante deberá ser hecha dentro del plazo de tres meses á partir del día en que la vacante se hubiera producido. En caso de opción, la vacante será provista dentro del plazo de un mes ».







« Art. 47. — Son requisitos para ser elegido senador : tener la edad de treinta años, haber sido seis años ciudadano de la nación, disfrutar de una renta anual de dos mil pesos fuertes, ó de una entrada equivalente y ser natural de la provincia que lo elija, ó con dos años de residencia inmediata en ella ».

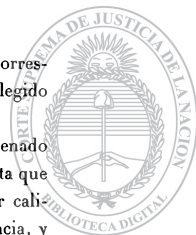
Art. 47. — Son requisitos para ser elegido senador : *ser ciudadano civil ó militar con goce de derechos políticos y civiles, tener cuarenta años de edad, diez años de ciudadanía en ejercicio, pagar contribución directa de mil pesos, cuando menos, desde dos años antes de la elección, ó disponer de una entrada anual de diez mil pesos y ser natural de la provincia que lo elija ó con dos años de residencia inmediata en ella. La residencia de treinta años consecutivos, aunque no tenga la inmediata, lo coloca al oriundo de otra provincia en las mismas condiciones del nativo.*

Entre las reformas de mayor importancia referi-

das á este artículo, está comprendida la que corresponde á la edad necesaria para poder ser elegido senador.

Basta considerar el rol que desempeña el Senado en el engranaje gubernativo, para darse cuenta que los miembros que la componen deben poseer calidades superiores de honorabilidad y competencia, y una larga experiencia conquistada por los años vividos. El pensamiento sazonado y reflexivo no es patrimonio de la inexperiencia, sino de la edad madura ; corresponde á la hora en que la conciencia se recrimina á sí mismo, para descorrer el velo de la verdadera vida y penetrar de lleno en la última trayectoria fecunda y bienhechora del espíritu templado y sereno.

Por más que se diga que la precocidad es la característica del alma argentina, como lo es en realidad, por razones del clima y otras muchas de diverso orden, no es menos cierto que esto mismo es un defecto que favorece la intemperancia de los caracteres, en esta vida ligera que hacemos, marchando á saltos, improvisando personalidades y talentos : y como entre la vida intelectual y la física existe una estrecha correlación, resulta que en nuestro país tenemos la enfermedad de la juventud-vejez, á

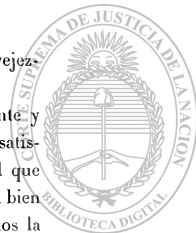


la inversa de lo que acontece en Europa, de la vejez joven.

Preciso es que la constitución que es fuente y base de las instituciones y de la vida nacional, satisfaga en esta parte la condicion más elemental que impone la majestad del cargo de senador. Si bien es cierto que en la época en que sancionamos la constitución había escasez de hombres preparados, por lo cual se estatuyó la edad de treinta, á guisa de habilitación de edad, felizmente y para honra de nuestra cultura, hoy no podemos decir lo mismo, porque hasta en los más apartados territorios tenemos ciudadanos ilustrados y de antecedentes honorables, de edad madura, y cada día que transcurra los tendremos en mayor número.

El equilibrio europeo se mantiene por la sabia é inteligente dirección de las personalidades de las naciones, entre cuyas principales condiciones está la de la edad sazónada, cuyo límite mínimo es el de cuarenta á cuarenta y cinco años. Así, pues, los cuarenta años asignados para poder ser senador, es la menor edad que debe exigir una sabia disposición.

La constitución vigente establece que los ciudadanos naturalizados pueden ser elegidos senadores





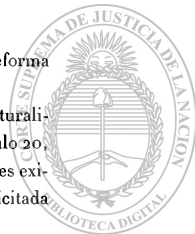
después de seis años de ciudadanía, y la reforma que propongo establece un período de diez.

Previamente, debo hacer notar que la naturalización obligatoria, cual la propongo en el artículo 20, sin consultar al naturalizado, impone mayores exigencias en este caso, que la naturalización solicitada voluntariamente.

Aboga en favor del más largo período, la mayor vinculación á la nacionalidad y mayor adaptación á nuestras prácticas políticas, la asimilación y connaturalización con el espíritu, tendencias y designios del alma argentina. Estas condiciones que se adquieren con los años, en el continuo y diario comercio de ideas y de cosas que vinculan é identifican todas las voluntades, son las que habilitan al naturalizado para colmar la legítima aspiración de representar en la alta cámara la voluntad de sus conciudadanos. Así lo entendió Norte América que estableció nueve años de ciudadanía en ejercicio para ser elegido senador y siete para diputado.

La condición de pagar una contribución de mil pesos ó poscer una entrada anual de diez mil está explicada en su correlativa sobre diputados (art. 40).

Si al diputado se exige condiciones de independencia personal, con mayor razón se ha de exigir al



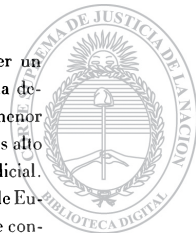
senador, por cuanto el Senado, además de ser un cuerpo compensador del poder ejecutivo en la designación de altos funcionarios, su número es menor que el de la Cámara de diputados, y es el más alto poder político en sus funciones de tribunal judicial.

La constitución del Japón y algunos estados de Europa tienen establecida la condición del pago de contribución directa *con anterioridad* al día de la elección para poder ser elegido diputado, con el objeto de garantizar la condición de independencia personal, impidiendo el falseamiento ex profeso de esta condición en vísperas de la elección.

Como en la constitución vigente existe la disposición de poseer una renta de dos mil pesos fuertes, la reforma propuesta no tiene otra importancia que la ampliación de la misma, para su mayor eficacia.

La última disposición es la misma que queda explicada en el artículo 40 sobre las condiciones requeridas para poder ser elegido diputado.

Creo que los senadores que se presentan á la cámara con su diploma deben acompañar todos los antecedentes pertinentes que respondan fielmente á las condiciones estipuladas para su aceptación, sin necesidad de que ningún miembro lo exija, porque así lo impone la majestad del cargo.

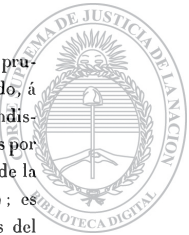


« El senador representa la sabiduría, virtud, prudencia, previsión y dignidad colectiva del Estado, á diferencia del interés, sentimiento, impulso é indiscricción que son más directamente representados por los miembros de la cámara, como que vienen de la presencia inmediata del mandato popular » (1); es centro de gravedad entre las ramas dirigentes del gobierno, según la expresión de James Bryce.

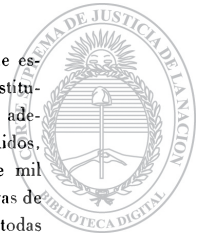
La entidad de senador es, por consiguiente, muy alta y las restricciones para alcanzarla deben ser impuestas con rigor, á fin de que no se repita aquella conocida frase : « Ya saben ustedes que mi hermano Manuel José no sirve para otra cosa que para senador », dirigida por un gobernador de tierra adentro, cuando los dóciles legisladores, como hechos de una sólo pieza, se presentaban en demanda del nombre del candidato que debía reemplazar á don Manuel José.

Finalmente, debo citar como antecedentes pertinentes á este asunto, el artículo 4º de la ley de 9 de diciembre de 1884, sobre elección de senadores de Francia, el cual estatuye la edad de cuarenta años para poder ser elegido senador ; el 33 del estatuto

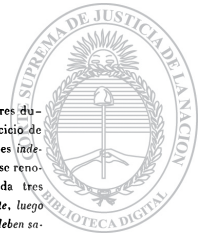
(1) TIFFANY, *Gobierno y derecho constitucional*.



fundamental (marzo 4 de 1848) de Italia, que establece la misma condición, y el 56 de la Constitución de Bélgica, de 7 de febrero de 1831, que además de exigir la edad de cuarenta años cumplidos, impone, la de pagar contribución directa de mil florines, á cuyo efecto las autoridades respectivas de cada provincia envían anualmente la lista de todas las personas en condiciones de elegibilidad.







« Art. 48. — Los senadores durarán nueve años en el ejercicio de su mandato, y son reelegibles *indefinitamente* ; pero el Senado se renovará por terceras partes cada tres años, *decidiéndose por la suerte, luego que todos se reunan, quiénes deben salir en el primero y segundo trienio.* »

Art. 48. — Los senadores durarán nueve años en el ejercicio de su mandato, y son reelegibles *después de un período de cuatro años*. El Senado se renovará por terceras partes cada tres años.

Como la reforma de este artículo es de la misma índole de la contenida en el artículo 42, me limito á indicar la lectura de los comentarios contenidos con motivo de la reelección de diputados.



« Art. 49. — El vicepresidente de la Nación será presidente del Senado; pero no tendrá voto sino en el caso que haya empate en la votación. »



Suprimo este artículo, porque considero que si la Constitución se reforma en sentido de hacer práctica la vida democrática republicana, no podemos dejar en pie esta disposición que atestigua lo que más de una vez he recordado. el origen monárquico de nuestra forma de gobierno.

La presidencia del Senado en la persona del vicepresidente de la República, importa, puede decirse, una tutoría de la autoridad ejecutiva sobre el Congreso : es el rey ó su representante en la Cámara de los Lores de Inglaterra.

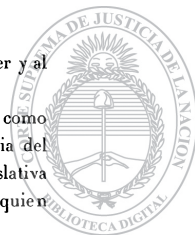
El Senado debe tener sus autoridades propias, nacidas del cuerpo mismo : no debe ser presidido por



una autoridad ajena á la esencia de su carácter y al espíritu de su autonomía.

El vicepresidente de la República está mejor como consejero del Presidente que en la presidencia del Senado ; y es más propio de la autonomía legislativa que el presidente salido del mismo Senado sea quien decide en caso de empate.

No es admisible, en nuestra forma de gobierno, que el vicepresidente de la Nación, sea quien decida las votaciones en caso de empate en el Senado. El hecho de que esta autoridad dirige el más alto cuerpo legislativo, me recuerda la autoridad del rey en el Parlamento inglés, es decir, la soberanía absoluta del ejecutivo sobre todo, la irresponsabilidad del super-hombre, el feudalismo, la monarquía y todo lo que á esto huele, no se aviene á las modalidades y tendencias de mi espíritu. La Cámara de los Comunes y la de los Lores, no son sino el Folkmoot y el Witenagemot de la edad media : excelente conquista de su época y aun para la presente. con relación á la monarquía inglesa, pero no para una república democrática en las condiciones del espíritu que informan las reformas que propongo. En las asambleas teutónicas eran los jefes quienes presidían y resolvían los negocios públicos, y en el parlamento es el

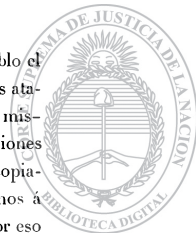


rey (1). Estados Unidos que tenía en su pueblo el alma de la raza que le dió origen con todos sus atributos y atributos característicos implantó el mismo régimen inglés, en esta parte de sus instituciones así como en muchas otras: y como nosotros copiamos la carta de aquella gran república, venimos á ser también, herederos de los teutones: y es por eso que tenemos el vicepresidente de la Nación dirigiendo la alta Cámara y haciendo valer su voto en caso de empate, precisamente en los asuntos más delicados.

Es probable que al leer estas líneas, se diga que no hay país alguno del cual se pueda tomar antecedentes que abonen la tesis que sostengo, y á esto responderé, que todos los países constituidos en la misma ó análoga forma á la nuestra, permanecen estacionarios, con la misma mezcla de principios libertarios y monárquicos de que adolece nuestra Constitución; están igualmente enfermos. La decantada soberanía de los pueblos es mentira: todos los cargos electivos son resueltos por los presidentes y los señores de los feudos.

Los progresos alcanzados por nuestra sociedad en

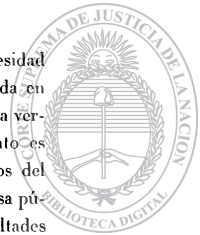
(1) C. E. STEVENS, *La Constitución de los Estados Unidos*, página 60.



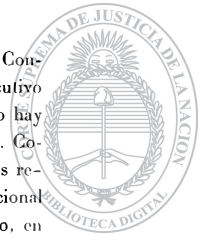
todos los órdenes de la vida, imponen la necesidad de una saludable reacción institucional, basada en sanos principios que permitan el ejercicio de la verdad republicana, haciendo desaparecer cuanto es posible, los gérmenes de absolutismo y excesos del poder, por parte de los que administran la cosa pública : delimitando ó circunscribiendo las facultades propias de los poderes que constituyen el gobierno sin absorciones que debiliten ó dificulten el regular perfeccionamiento de unos y otros: y en especial, estableciendo sobre base sólida é inconvencible la verdad del sufragio popular, para que los presidentes, gobernadores y congresales, sean la legítima expresión de su voluntad.

Nos encontramos actualmente en condiciones de crear ciertos principios de gobierno que no los encontramos en ninguna constitución.

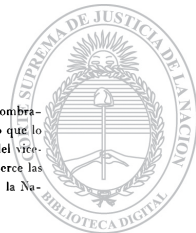
El vicepresidente de la nación, que es, puede decirse una parte del poder ejecutivo, porque está creado para reemplazar al Presidente, no puede dirigir el Senado, ni mucho menos sancionar con su voto en caso de empate, los asuntos que son del exclusivo resorte del Congreso, por que desvirtúa la autonomía de esa Cámara. Si el Congreso es un Poder, de los tres que constituyen el Gobierno, el vice-



presidente no puede presidir el Senado ; y si el Congreso no es sino una dependencia del Poder Ejecutivo como lo es, según la Constitución vigente, no hay razón ninguna en contrario de esa disposición. Como trato esta cuestión del punto de vista de las reformas que proyecto, de la limitación más racional de los poderes, de la autonomía de cada uno, en cuanto es posible, el vicepresidente no puede ser otra cosa que un consejero nato del Presidente, mientras no llega el caso de su reemplazo ; porque debe estar al cabo de las cosas y acontecimientos que ocurren en la rama ejecutiva para cuando llegue el caso de ocupar ese alto cargo.







« Art. 5o. — El Senado nombra-  
rá un presidente provisorio que lo  
presida en caso de ausencia del vice-  
presidente, ó cuando éste ejerce las  
funciones del Presidente de la Na-  
ción. »

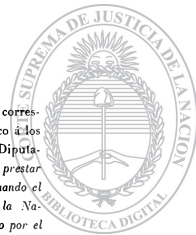
Art. 5o. — La Cámara estará presidida por un Presidente  
y en su defecto por dos vicepresidentes, primero y segundo,  
elegidos anualmente de su seno.

El contenido de esta reforma es consecuencia ló-  
gica de la que comprende el artículo anterior.

Las provincias que tienen dos cámaras y la vice-  
gobernación, la persona que desempeña este cargo,  
es el presidente nato del Senado y conforme á las  
constituciones que no tienen estatuido la vicegober-  
nación, sea que tenga una ó dos cámaras, tienen sus  
autoridades propias nacidas de su seno. Esto es lo

que contiene esta reforma. Suprimido de la presidencia del Senado el vicepresidente de la Nación, cae de su peso, que este cuerpo debe elegir sus autoridades en miembros del mismo; y sobre este punto no caben mayores explicaciones.





*« Art. 51. — Al Senado corresponde juzgar en juicio público á los acusados por la Cámara de Diputados, debiendo sus miembros prestar juramento para este acto. Cuando el acusado sea el Presidente de la Nación, el Senado será presidido por el Presidente de la Corte Suprema. Ninguno será declarado culpable sino á mayoría de los dos tercios de los miembros presentes. »*

Art. 51. — Al Senado corresponde juzgar en juicio público á los acusados por la Cámara de Diputados. La culpabilidad del acusado será declarada por mayoría de dos tercios de votos de los presentes.

Las supresiones á este artículo son perfectamente justificadas. Si los senadores, al aceptar el cargo se comprometen solemnemente á desempeñar fielmente sus funciones, como en realidad lo hacen, no es



necesario un nuevo compromiso, porque esto importaría que el primero carece de importancia ó de eficacia, lo cual no es posible suponer.

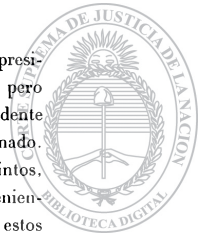
La parte que se refiere á la presidencia del Senado en el caso de que el Presidente de la República sea el encausado, no tiene razón de ser, desde que el vicepresidente de la Nación no es presidente del Senado conforme á la reforma del artículo 49. Por otra parte, siendo en este caso, el Senado, tribunal, por ser el más alto cuerpo político del Estado, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia en el orden común de la ley civil y criminal, no puede tener esta ingerencia en asuntos ajenos á su ministerio. Establecer conexiones de la Justicia con el poder político, es desvirtuar la pureza y la eficacia del magistrado de derecho, es contaminarlo con un ambiente que le daña, porque es ajeno al campo de acción de su ministerio.

De conformidad con la constitución vigente, si el tribunal de juicio político, en el caso de este artículo estuviera dirigido por el vicepresidente de la Nación, podría suceder que, en caso de empate, el presidente del Senado cortara la cuestión favoreciendo su exaltación el poder, aunque no hubiera razón suficiente para separar del cargo al Presidente de la Nación. Es



pues, explicable que en tal caso, no sea el vicepresidente de la Nación, quien presida la Cámara, pero no encuentro razón alguna para traer al Presidente de la Corte Suprema á la presidencia del Senado. El Congreso y la justicia son dos poderes distintos, con atribuciones de índole diversa y no es conveniente confundirlas porque se pierde el linde de estos poderes y se desvirtúa los resortes propios de cada uno. El Senado debe elegir las autoridades de su seno para la dirección de él mismo, en todas las funciones que por la Constitución debe desempeñar. La disposición vigente, importa el establecimiento de una tutoría en el Senado, en los casos de juicios políticos: en unos casos debe dirigir el vicepresidente de la República y en otros el Presidente de la Corte Suprema. Esto es confundir lamentablemente las atribuciones y el concepto que debe primar en los poderes que forman el Gobierno.

Por otra parte, conforme á las modificaciones establecidas en la reforma del artículo 5o, la presidencia del Presidente de la Corte Suprema es evidentemente innecesaria é inadecuada.





*« Art. 53. -- Corresponde también al Senado autorizar al Presidente de la Nación para que declare en estado de sitio uno ó varios puntos de la República, en caso de ataque exterior. »*



Consecuentemente con lo expuesto respecto al contenido del artículo 23, este (el 53) debe ser suprimido, por cuanto á aquél lo considero insubsistente dentro de mi plan de reformas.

Este artículo es correlativo de la primera parte del inciso 1º del artículo 86.

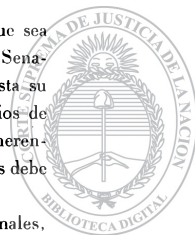
Prescindiendo del conjunto general de las reformas que estudio, considero que el contenido de este artículo no condice con las atribuciones propias del Congreso, en asunto de tanta transcendencia, cual es la declaración del estado de sitio, en caso de ataque exterior.

La gravedad que importa la suspensión de las garantías constitucionales, y á la vez, la que comporta

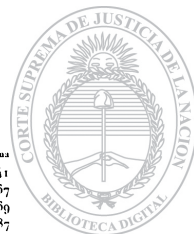
un ataque exterior, impone la necesidad de que sea el Congreso quien autorice tal declaración. El Senado tiene funciones de tribunal político y presta su acuerdo para el nombramiento de funcionarios de alta jerarquía, aparte de facultades que son inherentes á la Cámara de diputados, entre las cuales debe estar considerado el estado de sitio.

La suspensión de las garantías constitucionales, inscriptas en el capítulo fundamental de la carta orgánica, no puede ser declarada por una sola cámara, porque es del resorte de ambas, no puede ser materia de un simple acuerdo, por tratarse de un asunto de alta transcendencia política.

Por otra parte, en posesión de los más adelantados medios de comunicación y transportes rápidos como los que tenemos, y merced á ellos estamos en condiciones de reunir el congreso antes de las veinticuatro horas de convocado, no es dable esta especie de delegación de facultades de una cámara, en favor de la otra y del presidente.



# ÍNDICE



Fe de erratas.....	v	Artículo	Página
Presentación al Congreso..	vii	20 .....	141
Al lector .....	ix	31 .....	167
Carta del Dr. Manuel Go-		23 .....	169
rostiaga.....	xxiii	24 .....	187
		32 .....	197
		34 .....	199
CONSTITUCIÓN		37 .....	201
Artículo	Página	40 .....	225
2º .....	1	42 .....	235
4º .....	29	43 .....	249
5º .....	95	47 .....	253
6º .....	107	48 .....	291
12 .....	115	49 .....	263
13 .....	117	50 .....	269
16 .....	125	51 .....	271
18 .....	133	53 .....	275

—\*—

